

EL BANCO DE SAN CARLOS Y LAS COMUNIDADES DE INDIOS DE NUEVA ESPAÑA

CAPITULO I

INTRODUCCION, FUENTES E HISTORIA DE LOS ORIGENES DE LA BANCA NACIONAL EN ESPAÑA

Introducción

Este trabajo se refiere fundamentalmente al establecimiento y difusión del Banco Nacional de San Carlos en América. Conocido hoy el proceso de creación del Banco, y la historia de sus actividades gracias a los valiosos estudios hechos por Hamilton,¹ quedaba por conocerse el proceso de la proyección de la primera entidad bancaria española en el Nuevo Mundo. Ello es particularmente interesante, pues una de las iniciales finalidades del Banco era llevar por cuenta de la Real Hacienda los gastos referentes

¹ Hamilton, Earl J.: *Spanish Banking Schemes before 1700*. The Journal of Political Economy, Chicago, February, 1949, vol LVII, number 1, págs. 134-156. *Plans for a National Bank in Spain, 1701-83*. The Journal of Political Economy, Chicago, June, 1949, vol. LVII, number 3, págs. 315-336. *The Foundation of the Bank of Spain*. The Journal of Political Economy, Chicago, June, 1945, vol. LIII, number 2, págs. 97-114. *The first twenty years of the Bank of Spain, I*, The Journal of Political Economy, Chicago, February, 1946, vol. LIV, number 1, págs. 17-37. *The first twenty years of the Bank of Spain, II*. The Journal of Political Economy, Chicago, April, 1946, vol. LIV, number 2, págs. 116-140.

Sobre temas referentes a historia bancaria en el Nuevo Mundo se ocupan: Rodríguez Casado, Vicente: *Datos para la historia de la economía indiana (Proyecto del Banco del Monte de Piedad de Nueva Orleans, 1768)*, en "Anuario de Historia del Derecho Español", tomo XIV, Madrid, 1942-43, págs. 629-635. También Mariscal Romero, Pilar: *El Banco de Rescates de Plata de Potosí, Sevilla, 1962*. (Tesis de Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. En publicación).

a víveres, vestuarios, etc. de los Cuerpos de Ejércitos de Indias.

Pero al lado de esto aparece una nueva faceta, quizás la más interesante en lo que a la actividad del Banco de San Carlos en Indias se refiere. Al solicitarse la colaboración de los americanos a nuestra primera empresa oficial bancaria, y sobre todo, al solicitarse con carácter general en aquellos territorios la aportación de fondos para suscripción de acciones del recién establecido Banco de San Carlos, la eficiente intervención de D. José y D. Matías de Gálvez, y luego del hijo de éste, D. Bernardo, leales servidores de Carlos III, hace que un importante número de pueblos de indios de Nueva España, destinen parte de los intereses de los bienes de sus comunidades a la suscripción de acciones del nuevo Banco.² Las vicisitudes históricas de las acciones de los pueblos de indios novohispanos constituyen la medula de este estudio.

El primer capítulo se ocupa del planteamiento del tema, así como de las fuentes bibliográficas y documentales utilizadas. Hace un esquema histórico de la banca española con anterioridad a 1782, para ocuparse finalmente, y como antecedente inmediato a la erección del Banco de San Carlos, de las razones aducidas a favor del mismo por Don Francisco Cabarrús, y la polémica que ello trajo consigo.

El capítulo segundo trata de la erección, fines y estructura orgánica del Banco. La difusión dada en las Indias a su establecimiento, y la acogida que tuvo en los distintos territorios indianos, destacándose el papel del Fiscal de

² Hay referencias a este tema en: Hamilton, Earl J.: *The Foundation of the Bank of Spain*. The Journal of Political Economy, Chicago, June, 1945, vol. LIII, number 2, págs. 110-111.

Lobato López, Ernesto: *El crédito en México*. México, 1945, 316 págs. Fondo de Cultura Económica. Se ocupan del tema las págs. 66-67.

López Rosado, Diego: *Ensayos sobre Historia Económica de México*. México, 1957, 247 págs. Se ocupan del tema las págs. 61-64.

Voltres Bou, Pedro: *Repercusiones económicas de la Intervención española en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos*. Hispania, Madrid, tomo XXI núm. LXXXI, 1961, págs. 49-150. Se ocupa del tema en la pág. 73.

Méjico D. Ramón Posada en la abundante suscripción de las acciones del Banco en Nueva España. También se estudia y pone de relieve el interés de D. José de Gálvez en la suscripción de dichas acciones por parte de las villas y los pueblos americanos, facilitándola mediante la intervención de los Consulados de Méjico y Lima, y la liberación de todos los derechos de entrada en España, concedida a los caudales enviados en el primer registro, así como el reconocimiento de los beneficios de las acciones desde el momento en que dichos caudales llegaran a los puertos peninsulares. Se establecen para activación del comercio Cajas en las grandes capitales indianas, y en Cádiz una Caja de Descuentos dependiente del Banco de San Carlos. Es particularmente curioso el incidente motivado por el intento de algunos españoles residentes en la península, con caudales en Indias, que quisieron acogerse a la liberación de los derechos de entrada de los caudales de los indios alegando estar incluidos en dicha disposición.

El capítulo tercero se ocupa primordialmente de la suscripción de las acciones del Banco de San Carlos por parte de las parcialidades de indios de los pueblos de Nueva España. Inicialmente lo hacen las parcialidades de los pueblos de San Juan y Santiago. Luego siguen otras muchas. El apoderado general de todos ellos es D. Melchor Gaspar de Jovellanos. Este capítulo se ocupa también de las incidencias de las suscripciones hechas por autoridades y particulares en México, La Habana y Lima.

El capítulo cuarto, obligado desenlace de los anteriores trata de la condición social de los indios americanos al tiempo de la guerra de la independencia peninsular y de las Cortes de Cádiz. Es particularmente importante el informe histórico-jurídico que un gran criollo, D. Pedro de Urquinaona y Pardo, emite sobre la naturaleza jurídica de los fondos procedentes de las parcialidades, cuyo fin es el beneficio y utilidad de los mismos indios, pues a ellos per-

tenecen, no debiendo considerarse bienes nacionales como dictamina la Comisión del Crédito Público en 1822. Se estudia también la distribución de las acciones entre los distintos pueblos de indios de Nueva España que las suscribieron, dándose una relación detallada de los rendimientos anuales de las mismas, y su empleo desde 1784 hasta 1820. Finaliza el capítulo y el trabajo, dando cuenta de los distintos intentos llevados a cabo para integrar dichas acciones en la Tesorería General de la Nación (1822), propuesta por parte del Ministerio de Hacienda, al hacerse la transformación de las acciones de indios del Banco de San Carlos en el nuevo Banco de San Fernando a nombre de las Direcciones Generales de los Ramos de Propios y Pósitos, y la Administración de las Parcialidades de Indios que representaban dichas acciones. Culmina todo en la disposición dada por la Reina Gobernadora en 1834, en virtud de la cual dichas acciones pasarían a disposición del Real Tesoro, no obstante la actitud clara y manifiesta del personal directivo del Banco, y de no haber sido anulada la condición de inalienables que dichos títulos tenían.

Fuentes bibliográficas

Sobre el Banco Nacional de San Carlos existe hoy una abundante pero dispersa bibliografía. Su localización resulta difícil, aun en bibliotecas donde debía hallarse imprescindiblemente. La edición de un repertorio bibliográfico sería de gran utilidad, y en él cabría recoger todo lo que sobre el Banco y su historia se ha publicado desde su fundación. Es difícil poder calibrar la significación histórica y científica de una institución si no se conoce todo lo que sobre ella se ha escrito.

A continuación se reseñan una serie de obras y escritos sobre el Banco. No se pretende que esta relación tenga carácter exhaustivo, ni es esta nuestra finalidad, pero sí se insertan una serie de títulos que se han tenido en cuenta,

como básicos, para la redacción de este trabajo, y que por haber reportado alguna utilidad, se considera que deben ser ofrecidos a los lectores.

Contemporáneos a la erección del Banco Nacional de San Carlos, y debidos a la pluma de los que más directamente intervinieron en ella, tenemos en primer lugar la «Memoria» presentada al Rey Carlos III sobre la formación del Banco, por el propio D. Francisco Cabarrús,³ al cual sigue en orden al tiempo el «Discurso» de Edmundo Lacy⁴ sobre la utilidad de dicho establecimiento. No debe omitirse tampoco, al plantear la polémica inicial sobre la conveniencia de este establecimiento bancario, y sus características y actividades, el libro que sobre él escribió el Conde de Mirabeau.⁵ Dignos son también de tenerse en cuenta el «Elogio» de D. Miguel de Muzquiz, Conde de Gausa, Ministro de Hacienda (1766-1785) hecho por el propio Cabarrús en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid,⁶ y las «Observaciones» que sobre dicho elogio escribió el comerciante D. Jaime Amat.⁷ También contribuye a dar luz sobre el papel y la significación de la nueva entidad bancaria la «Representación» hecha a Carlos III por su Junta de Dirección, por manos del Conde de Florida- blanca,⁸ sobre la suspensión de la obra del canal del río

3 Cabarrús, Francisco: *Memoria que D.——— presentó a S. M. para la formación de un Banco Nacional...* Madrid, 1782. Reeditado en: *Moneda y Crédito*, Madrid, marzo, 1956, núm. 56, págs. 131-160.

4 Lacy, Edmundo: *Discurso sobre la utilidad que trae al Reino de España el establecimiento del Banco de San Carlos*, Madrid, 1782, mss. en 4.º menor (Biblioteca Banco de España de Madrid).

5 Mirabeau, Comte de: *La Banque d'Espagne*, s. l., 1785.

6 Cabarrús, Francisco: *Elogio del Escelentísimo Señor Conde de Gausa, que en Junta General celebrada por la Real Sociedad de Amigos del País de Madrid en 24 de diciembre de 1785 leyó el socio D.———, del Consejo de Su Magestad en el de Hacienda*. Madrid, 1786, 97 págs.

7 Amat, Jaime: *Observaciones de un comerciante sobre algunas notas del Elogio del Excmo. Sr. Conde de Gausa*, Barcelona, 1789.

8 Floridablanca, Conde de: *Representaciones que hizo a S. M. la Junta de Dirección del Banco Nacional de San Carlos por mano del Excmo. Sr.———, Gran Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, del Consejo de Estado de S. M., primer Secretario de Estado y del Despacho, suplicándole se dignase auto-*

Guadarrama a Madrid. Particular interés y trascendencia han tenido para la historia del Banco las «Cartas» escritas por D. Valentín Foronda.⁹ Testimonio documental de la vida del Banco durante toda su existencia lo ofrecen las «Memorias» de sus Juntas¹⁰ que comprenden desde 1783 hasta 1828, en que pasa a denominarse Banco Español de San Fernando,¹¹ conservándose las correspondientes a éste, las del Banco de Isabel II, y las del Nuevo Banco Español de San Fernando, hasta que en 1856 pasa a denominarse Banco de España.¹²

De los inciertos años de principios del siglo XIX está la obra de Juan Sempere y Guarinos,¹³ y la «Memoria»¹⁴ que el propio Banco de San Carlos hizo en 1824 proponiendo un medio para salir del marasmo económico en que a la sazón se hallaba. Finalmente la obra comprensiva de la historia de los Bancos de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando, y de España, hasta la fecha de su publicación, es la que escribió D. Ramón de

risarla para suspender la obra del Nuevo Canal desde el Río de Guadarrama a Madrid, por los Ingenieros D. Carlos, D. Manuel, D. Félix y D. Francisco Lemaux, hijos del difunto Brigadier e Ingeniero Director D. Carlos Lemaux. Reales Ordenes expedidas en su consecuencia aprobando este proyecto, después de haberlo examinado el profesor de Arquitectura e Hidráulica, D. Scipio Perosini. Reglas baxo las quales se ha de desempeñar la construcción de dicho canal. Descripción del mismo, cálculo de su coste, reglamento económico para la ejecución de las obras, y tabla de las excavaciones y terraplenes. Madrid, 1787.

⁹ Foronda, Valentín: *Cartas sobre el Banco de San Carlos*, Madrid, 1783.

¹⁰ Juntas del Banco Nacional de San Carlos. Años, 1784, 1785, 1786, 1789, 1789, 1791, 1792, 1800, 1802 1803, 1806, 1807, 1808, 1809, 1814, 1822, 1825, 1827, 1828.

Memoria de los años 1783 a 1789, 1794 a 1800, 1822 a 1824, 1827 a 1828. (Biblioteca del Banco de España de Madrid).

¹¹ Memorias de los años 1830 a 1855. (Biblioteca del Banco de España de Madrid.)

¹² Ley de 28 de enero de 1856.

¹³ Sempere y Guarinos, Juan: *Biblioteca española económico-política*, Madrid, 1801.

¹⁴ *Memoria del Banco de San Carlos, proponiendo los medios de regenerar este establecimiento y la R. O. por la que el Rey Nuestro Señor concede 100.000.000 de capital, o sea 5.000.000 de renta perpetua al año, inscriptos en el Gran Libro del Estado a favor del Banco, con aplicación del arbitrio que S. M. ha destinado a la seguridad de aquellos intereses.* Madrid, 1824. (Biblioteca del Banco de España de Madrid.)

Santillán,¹⁵ Gobernador que fue de estos dos últimos. En 1929, y con motivo del centenario de la fundación del Banco Español de San Fernando, D. Juan Antonio Galvarriato¹⁶ escribe la historia del Banco durante toda esa centuria. Ultimamente, y con motivo de la conmemoración del primer siglo del Banco de España, ha aparecido la última obra histórico-gráfica sobre el Banco, debida a D. Félix Luis de Baldasano y de Llanos.¹⁷

Pero independientemente de todas estas obras, que siguen día a día la evolución del Banco de San Carlos hasta convertirse en Banco de España, y aun durante la vida de éste, el trabajo más completo sobre la primera institución bancaria oficial en España se debe sin duda a Earl J. Hamilton¹⁸ ilustre profesor norteamericano, e historiador de nuestra economía en momentos particularmente decisivos.¹⁹ Sus estudios sobre los antecedentes, fundación y actividades del Banco de San Carlos, constituyen hoy día, sin duda, la obra básica sobre la materia, siendo únicamente de lamentar que no sea fácil de hallar en nuestras bibliotecas, y que todavía no se haya acometido una traducción conjunta²⁰ de los mismos, que sería de gran utilidad para la historia de nuestra economía.

¹⁵ Santillán, Ramón de: *Memoria histórica sobre los Bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando, y de España, escrita por don———, Gobernador que fue de los dos últimos*. Madrid, 2 vols., 1865.

Erección del Banco de San Carlos por R. C. de 2-VI-782.

Erección del Banco Español de San Fernando por R. C. de 9-VII-829.

Creación del Banco de Isabel II por R. D. de 25-I-844.

Reunión de los dos Bancos, de Isabel II y Español de San Fernando, en el Nuevo Banco Español de San Fernando por R. D. de 25-II-1847.

Creación del Banco de España por Ley de 28-I-856.

¹⁶ Galvarriato, Juan Antonio: *El Banco de España. Su historia en la centuria 1829-1929*, Madrid, 1932, 416 págs.

¹⁷ Baldasano y de Llanos, Félix Luis: *El edificio del Banco de España*, Madrid, 1953, 287 págs., láminas.

¹⁸ Vid. nota 1.

¹⁹ Hamilton, Earl J.: *Monetary problems in Spain and Spanish America, 1751-1800*, "The Journal of Economic History", May, 1944, vol. IV, number 1, 48 pages.

²⁰ Vid. nota 1.

Complementarios de estos trabajos específicos sobre la historia del Banco de San Carlos, son los del propio Hamilton,²¹ Smith²² y Sarrailh,²³ cuya utilidad fundamental es la amplitud de la bibliografía histórica referente a la economía y el comercio español e indiano en el siglo XVIII.

Fuentes documentales

Además de los tres legajos que en la Sección de Indiferente General del Archivo General de Indias de Sevilla²⁴ sirven de base fundamental a este trabajo, y en los que está contenida la documentación del tema que nos ocupa sobre la historia del Banco de San Carlos y las Comunidades de Indios de Nueva España, se han consultado también algunos legajos del Archivo del Banco de España en Madrid,²⁵ y del Archivo Histórico Nacional de Madrid²⁶ que tienen documentación del primer Banco oficial español. También existe documentación importante sobre el Banco de San Carlos en el Archivo del Ministerio de Hacienda de Madrid,²⁷ y en otros archivos y bibliotecas²⁸ entre los muchos en los cuales existe documentación sobre la materia.

²¹ Hamilton, Earl J.: *War and Prices in Spain, 1651-1800*. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1947, XXVI + 295 págs.

²² Smith, Robert Sidney: *The Wealth of Nations in Spain and Hispanic America, 1780-1830*, The Journal of Political Economy, Chicago, April, 1957, vol. LXV, number 2, págs. 104-125.

²³ Sarrailh, Jean: *L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle*, Paris, 1954.

²⁴ Expediente sobre el establecimiento de los Bancos de San Carlos y San Fernando, sus Juntas, negocios y parcialidades de los indios. Años 1782-1841. (A. G. I., Indiferente, 1849, 1850, 1851).

²⁵ Archivo del Banco de España de Madrid. Legajos: 536 (Expediente de don Miguel de Gálvez, y acciones de los Gálvez), 597 (Llaguno y Amirola), 641 (Marquesa de la Sonora).

²⁶ Archivo Histórico Nacional de Madrid. Legajos sobre el Banco de San Carlos: Sección de Estado, núms. 3.00, 3.192, 3.196, 3.202, 3.219, 3.230, 3.232, 3.569.

²⁷ Archivo del Ministerio de Hacienda. Inv. 41, Leg. 658, Dirección General de Renta. Expediente en general de las cuentas, alcabalas y de los efectos comprados y vendidos por el Banco Nacional de San Carlos. 1785 a 1792. (Debo esta noticia a Lourdes Díaz-Trechuelo.)

²⁸ Archivo Municipal de Bilbao. Sección Antigua y Consulado. Cajón 3, Registro 4, núm. 150. R. C. de erección del Banco de San Carlos ,2-VI-782. (Debo esta noticia a José Joaquín Real.)

Bosquejo histórico de los proyectos bancarios y los bancos en España anteriores a 1782

Aunque la primera creación oficial bancaria en España data de 1782, hay una serie de intentos y proyectos que arrancan de la Baja Edad Media.²⁹ En esa época se registra frecuentemente la existencia de bancos privados en Europa. Carande³⁰ señala la existencia de un Banco de Depósito en Barcelona en 1401, y en Valencia otro de la misma clase en 1407. Y añade que hay documentación sobre el de Barcelona desde 1370 hasta 1410. El mismo autor señala que la banca de Sevilla, que tanta importancia alcanzara después, no empieza sus actividades hasta 1533.³¹ Y en su magnífica obra nos da una nómina de los banqueros hispalenses que en el período imperial han de intervenir en los negocios indianos. Entre ellos merece recordarse a los Espinosa, Iñiguez, Lizarrazas, Leardo, Negrón, Morga, Francisquín, Martínez, Mínguez, etc. Desempeñaron un papel sumamente

A. G. I., Caracas, 23. El Intendente de Caracas, en 21-VII-784, inserta la R. O. de 30-IV-784 sobre el establecimiento en la Capitanía General del Banco de San Carlos, recepción y remesa de los caudales a España, y franquicia de derechos que concede S. M. (Debo esta noticia a José Joaquín Real.)

Biblioteca Nacional de París. Departamento de Manuscritos. Fondos Españoles, núm. 485. Número 644 del Catálogo de Morel Fatio.

"Lista de los Accionistas con voto del Banco Nacional de San Carlos, dividida en seis clases", 28 fols. Sin fecha. Familia Real.

- 1.ª clase: Grandes de España, Consejo de Estado y Tenientes Generales.
- 2.ª clase: Arzobispos, Obispos, Fundaciones, Hospitales y Obras Pías.
- 3.ª clase: Títulos de Castilla, Consejeros, Mariscales, Ministros.
- 4.ª clase: Propios y Arbitrios del Reino.
- 4.ª clase: Pósitos de Reino. (Se contienen en lista aparte.)
- 6.ª clase: particulares.

(Debo esta noticia a Luis Navarro García).

29 Hamilton, Earl J.: *Spanish Banking Schemes before 1700*, The Journal of Political Economy, Chicago, February, 1949, Vol. LVII, number 1, págs. 134-156.

Essars, Pierre des: *Banking in Spain in a History of Banking in all Leading Nations*, London, 1896.

30 Carande, Ramón: *Carlos V y sus banqueros. La vida económica de España en una fase de su hegemonía, 1516-1556*, tomo I, Madrid, 1943, 392 págs., págs. 195-198.

Carlos V y sus banqueros. La Hacienda Real de Castilla, tomo II, Madrid, 1949, XVI + 635 págs.

31 Carande, Ramón: Ob. cit., tomo I, cap. X, págs. 198-204.

preeminente en la historia de la banca española, especialmente en orden al tráfico con las Indias. De esta época son suyas las noticias de los préstamos monetarios hechos al Emperador y a Felipe II por los Fucares, los Welsers y los banqueros genoveses que también estuvieron presentes en la financiación del descubrimiento del Nuevo Mundo. Esta etapa es de proyección bancaria hacia el exterior, haciéndose una serie de operaciones con el Banco de San Jorge de Génova,³² el Banco de Amsterdam, el Banco de Hamburgo y el Banco de Suecia.³³

El primer esquema de banco castellano se debe a Pedro de Salcedo, que en 1567 hace una propuesta con el nombre de «Arca de Misericordia y Monte de Piedad».

En 1576 Peter van Oudergherste propone a Felipe II la creación de un banco hipotecario y monte de piedad, desarrollado por Luis Valle de la Cerda en 1593. Su obra, titulada «Desempeño del patrimonio de Su Magestad»³⁴ servirá a Pedro de Miranda en 1599 para proponer el establecimiento de bancos y montes de piedad.

Pedro de Angulo recuerda en 1621 que las Cortes habían aprobado la erección de bancos y montes de piedad. Sin embargo, es entonces cuando Alberto Struzzi, napolitano y consejero de Felipe IV, considerado persona competente en materia económica, quien se opone en 1632 a la fundación de bancos. El mismo año, Antonio de Rojas propone como remedio de las necesidades de la Corona la creación de bancos. Y Jerónimo de Zevallos abunda en la idea proponiendo la creación en España de un banco nacional. Al

32 Wiszniewski, Prince Adam: *Histoire de la Banque de Saint-Georges de Genes la plus ancienne Banque de l'Europe et des origines du Credit mobilier du credit fonciere, des Tontines et des Amortissements y pratiques au Moyen Age*, Paris, 1865, 210 págs.

Usher, A. P.: *The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe*, I, Cambridge, Mass., 1943.

33 Hamilton, Earl J.: *Spanish Banking Schemes before 1700*, The Journal of Political Economy, Chicago, February, 1949, vol. LVII, number 1, págs. 134-156.

34 Valle de la Cerda, Luis: *Desempeño del patrimonio de Su Magestad*, Madrid, 1600.

año siguiente de 1624, Juan de Urbina, dentro de la línea iniciada por Zevallos, propone la creación de bancos nacionales subrayando la utilidad que pueden reportar.

En esta misma época se aboga por la devaluación de la moneda de plata, como fórmula para evitar la subida de los costes. Y es Tomás Cardona primero, y luego una serie de escritos, los que entre 1622 y 1628 preconizan esta forma para poder dotar de capital a los bancos. La misma tesis es mantenida en 1629 por Alonso de Carranza, discípulo de Tomás Cardona, quien argumenta contra el incremento del precio de la plata, al considerarlo perjudicial para la provisión de capital para los bancos y montes de piedad.

En la misma línea de solución bancaria están Pedro Fernández de Navarrete (1626) al escribir su «Conservación de Monarquías», y Francisco de Peñalosa (1627) al proponer un plan de deflación del vellón, por considerarlo benéfico para el público.

Pero quizás, el proyecto bancario más atrevido hecho en nuestra patria hasta mediados del siglo XVII se debe a Francisco Martínez Mata, que en su «Memorial en razón del remedio de la despoblación, pobreza y esterilidad de España» propone en 1650 la creación de bancos reales, como fórmula para liquidar la mayor parte de la deuda nacional.

Y en esta misma época, Jacinto Pascual de Azpeitia escribe un «Memorial al Rey sobre la fundación de los erarios y montes de piedad», en que reitera el deseo de Felipe IV, expuesto en 1623, de crear bancos y montes de piedad.

Siguiendo esta línea, Juan de Castro, dominico y representante de los negociantes genoveses Domingo Grillo y Ambrosio Lomelin, presentó en 1663 un plan de regeneración económica consistente en la creación de bancos y montes de piedad auxiliares. Y abundando en la misma idea, pero sin recurrir, al menos aparentemente, a la insti-

tución bancaria, Miguel Alvarez Osorio y Rendín, propone en 1686 los préstamos de grano hechos por hacendados ricos a los pobres al 5 %.

El gradual desarrollo de las funciones bancarias de los Cinco Gremios,³⁵ establecidos en 1686, desilusionó sin duda a los proyectistas de bancos.

Al llegar el siglo XVIII se intensifica la orientación hacia el resurgir económico en España con el advenimiento de la nueva dinastía.³⁶ No obstante durante los primeros veinte años de la centuria no conocemos ninguna propuesta de creación de banco nacional. No abogan por él ni Jerónimo de Ustariz, ni Miguel Zabala y Auñón, ni Bernardo de Ulloa. Tampoco lo hace José García Caballero en su «Breve cotejo y balance de las pesas y medidas» (1731). El único economista que ve las posibles conveniencias, pero al mismo tiempo la imposibilidad de crear un banco nacional es Juan Cabrera.

Años más tarde, en 1743, Teodoro Ventura de Argumosa Gandara, propone la creación de un banco de comercio.

El Marqués de la Ensenada considera por estos años que el establecimiento de un banco nacional, sería un decisivo instrumento para la reforma fiscal, y para el desarrollo económico que él se esforzaba en promover. Para ello pide al Marqués del Puerto, embajador español en Holanda, busque un modelo entre las instituciones bancarias más importantes del norte de Europa. Los modelos serían los bancos de Inglaterra, Suecia, Amsterdam, Rotterdam, Hamburgo y Copenhague. En 1747, Puerto envía como respuesta a Ensenada y a Carvajal y Lancaster su «Llave al útil proyecto de establecer Bancos en España». Serían éstos cinco bancos reales autónomos, estableciéndose en Madrid, Cádiz, Málaga, Bilbao y Barcelona.

³⁵ Capella, Miguel; Matilla Tascón, Antonio: *Los cinco gremios mayores de Madrid. Estudio histórico-crítico*, Madrid, 1957, XI + 603 págs.

³⁶ Hamilton, Earl J.: *Plans for a National Bank in Spain, 1701-83*. *The Journal of Political Economy*, Chicago, June, 1949, vol. LVII, number 3, págs. 315-336.

El Banco de Madrid tendría como concesión todas las minas de España, excepto las de hierro, y todas las fuentes de mineral no desarrolladas en América. Dichas minas, serían dirigidas por ingenieros de minas de Lieja, trabajando en ellas los esclavos comprados a los portugueses en África.

El Banco de Cádiz tendría el monopolio de la exportación de esclavos a las colonias españolas, y el privilegio de enviar cada año un barco mercante a América, en las mismas condiciones que se había establecido a favor de los ingleses en el contrato de Asiento de 1713. Todo ello organizado por el Consulado de Comercio, a cuyo cargo estaba el tráfico indiano. Los barcos dependientes del Banco de Cádiz llevarían los esclavos desde África occidental portuguesa. El sobrante de esclavos negros podía ser vendido al Banco de Madrid para el uso de las minas.

El Banco de Bilbao tendría el monopolio de las pesquerías de ballenas y bacalao. Ello serviría para restablecer la desaparecida flota de bacaladeros españoles, cuya pericia pesquera era explotada por los franceses desde que España perdió sus puertos y derechos en Terranova³⁷ a consecuencia del Tratado de Utrecht. Mientras tanto el poderío británico impidiera el ejercicio de la pesca, el Banco de Bilbao tendría la exclusiva del comercio con Buenos Aires.³⁸

El Banco de Málaga tendría el monopolio comercial con las Filipinas y las Marianas.³⁹ España obtendría allí porcelanas, joyas, telas finas, especias, drogas, tintes, etc. en condiciones muy favorables. El transporte de los géneros

37 Palacio Atard, Vicente: *Los vascongados y la pesca de Terranova. Las gestiones del Marqués de Monteleón en Londres (1716-1717)*. Sevilla, Anuario de Estudios Americanos, 1944, vol. I., págs. 723-739.

38 Céspedes del Castillo, Guillermo: *Lima y Buenos Aires. Repercusiones Económicas y Políticas de la creación del Virreinato del Plata*, Sevilla, 1947, A. E. A. VII + 214 págs.

Gil Munilla, Octavio: *El Río de la Plata en la Política Internacional, Génesis del Virreinato*. Publicaciones E. E. H. A. Sevilla, 1949, XXIII + 463 págs.

39 Díaz-Trechuelo y López-Spínola, Lourdes: *La Real Compañía de Filipinas*. Sevilla, 1960, 445 fols. Original Mecnografiado Premiado por el Banco de España.

del Extremo Oriente se haría en los propios barcos del Banco de Málaga. Los rendimientos de dicho tráfico darían 500.000 pesos anuales para costear el gobierno de Filipinas y Marianas, y además de ello, el propio Banco obtendría grandes beneficios.

El Banco de Barcelona explotaría las salinas de Ibiza y Formentera, exportando sus productos al norte de Europa. Podría también tener el monopolio de la exportación del vino de las islas Canarias.⁴⁰ Para proteger a los nativos de la explotación del monopolio, el Banco de Barcelona pagaría también cada grado de vino al precio medio que hubiera tenido en las islas Canarias durante los cinco años anteriores.

El irlandés Bernardo Ward, consejero económico de Fernando VI, escribió en 1762, ya en tiempos de Carlos III,⁴¹ un «Proyecto económico», en que presenta el más importante plan de banca, después de haber viajado por Europa, y buscado el medio de revivir la vida económica de España.

Cuatro años más tarde, en 1766, Vicente Vizcaino Pérez propone una Compañía Universal o Banco Público, que evitará los préstamos usurarios, y hará provisiones abundantes a precios razonables.

Roch-Antoine de Pelissery informa en su «Caffé politique d'Amsterdam» en 1766 y 1769, presentando al gobierno un plan para el establecimiento de un Banco Real en Castilla.

En 1771 se hace un plan anónimo, que es tomado en serio por el embajador de Francia, que envió copia a París, y por el Foreign Office, y en el que se sugiere una reforma para el desarrollo económico, y para revivir el comercio colonial, consistente en la fundación de un banco real en Madrid, con sucursales en Cádiz y otros puntos.

⁴⁰ Morales Padrón, Francisco: *El comercio canario americano. Siglos XVI, XVII y XVIII*. Sevilla, 1955. Publicaciones E. E. H. A., XX + 425 págs.

⁴¹ Hamilton, Earl J.: *Plans for a National Bank in Spain, 1701-83*. The Journal of Political Economy, Chicago, June, 1949, vol. LVII, number 3, págs. 315-336.

Y en 1744, Pascual Martínez Lucas, alarmado por el extraordinario volumen de los préstamos hipotecarios, propone el establecimiento de un banco público.

Llegamos así a 1777, en que el Conde de Campomanes reimprime el esquema bancario de Francisco Martínez Mata, publicado originalmente en 1650, y en las notas y comentarios favorables propone la creación de bancos de crédito agrícola, bancos de ahorro, y bancos comerciales. Campomanes alaba las operaciones bancarias de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Ese mismo año, Juan de Bouligny, destacado comerciante y diplomático, somete un «Plan Preliminar para el establecimiento de un Banco Real y Oficina de Cambio». Al año siguiente de 1778 presenta un «Plan definitivo para un Banco Nacional y Oficina de Cambio». También en 1778 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, une su poderosa voz a favor de la creación de un Banco Nacional.

En 1779, y ya en pleno incremento del projectismo bancario, Miguel Jerónimo Suárez y Núñez, archivero de la Real Comisión de Moneda, Comercio y Minas (Junta General de Comercio, Moneda y Minas), envía a Floridablanca un bosquejo de un Gran Banco de Manufacturas. Este lo somete a Miguel de Múzquiz y a José de Gálvez.

Todavía en 1782, Miguel O'Kearney, inmigrante en Alicante, sometió un plan para un Banco Real de Emisión, que sería en efecto una rama de la Tesorería Real. Y al año siguiente, después de la creación del Banco de San Carlos, Innocenzo Balduvino Stacchini envía a Floridablanca, desde Florencia, el plan para un banco nacional de propiedad privada.

CAPITULO II

ERECCION DEL BANCO NACIONAL DE SAN CARLOS. SU DIFUSION EN INDIAS

«Para promover la extensión y felicidad del Comercio y facilitar sus operaciones con la circulación del dinero y de los signos que le representan, teniendo al mismo tiempo en consideración el beneficio general de los Pueblos del Reyno, y de todos sus amados vasallos, ha resuelto el Rey erigir un Banco Nacional», ¹ escribe Don Miguel de Múzquiz a Don José de Gálvez, meses antes de la publicación de la Real Cédula de erección del Banco Nacional de San Carlos. ² Los motivos se expresan con claridad.

El comercio, la circulación monetaria, y el beneficio del pueblo, son las causas determinantes de la erección, por Carlos III, del primer Banco Nacional español.

En la misma carta, anticipa Múzquiz a Gálvez la estructura orgánica del Banco. Estará regido por una Junta que presida el Gobernador del Consejo de Castilla, ³ y formarán parte de ella los ministros y sujetos que a dicho fin se designen. Es importante destacar el nombramiento

¹ Miguel de Múzquiz, Ministro de Hacienda (1766-1785), a José de Gálvez, Ministro de Indias (1775-1787), en el Pardo a 1-III-782, (A. G. I., Indiferente 1849).

² Múzquiz a José de Gálvez, en Madrid a 8-VI-782, (A. G. I., Indiferente 1849). Le remite 60 ejemplares de la R. C. de erección del Banco de San Carlos de 2-VI-782, para que se tengan presentes en la Secretaría del Despacho y en el Consejo de Indias. Hay copias de ejemplares actualmente en este legajo.

Expedientes ((1782), núm. 12. R. C. sobre erección del Banco de San Carlos, (A. G. I., Indiferente General 375) (Debo esta noticia a Antonio Muro).

³ Múzquiz a José de Gálvez, en el Pardo a 1-III-782. (A. G. I., Indiferente, 1849).

como representante del Consejo de Indias del Conde de Tepa.⁴

Mas las funciones de esta amplia Junta son preparatorias. Aunque más adelante puede integrarse en la estructura orgánica del Banco, en este momento es fundamentalmente examinadora del proyecto de su erección.⁵ Su dictamen tendrá una decisiva influencia en el nacimiento de este organismo.

La preocupación real por la difusión de la noticia de la creación del Banco fue inmediata. Diez días después de la erección,⁶ se remiten 12 ejemplares de la Real Cédula al Presidente de la Audiencia de la Contratación de Cádiz.

4 José de Gálvez al Conde de Tepa, en el Pardo a 3-III-782. (A. G. I., Indiferente 1849). Le avisa para que concurra a la Junta del Banco.

El Conde de Tepa a José de Gálvez, en Madrid a 4-III-782. (A. G. I., Indiferente 1849). Acusa recibo de haber sido "nombrado para que concurra a la Junta del Banco Nacional cuando lo cite el Gobernador del Consejo de Castilla, lo que estoy pronto a ejecutar empleando mis cortas luces".

Don Francisco Leandro de Viana, Conde de Tepa y Marqués de Viana Alegre, nació en Lagrán (Alava), en 9-III-730, y murió en 1804. Fue alumno del Colegio Viejo de San Bartolomé en Salamanca, en cuya Universidad se graduó y licenció en Leyes. Más adelante fue Rector de dicho Colegio.

En 13-V-756 fue nombrado Fiscal de la Audiencia de Manila. En 1762, al ser tomada dicha plaza por los ingleses dió grandes pruebas de patriotismo, y expuso su vida en la defensa. Tuvo especial preocupación en conocer la situación general del archipiélago filipino, especialmente en el aspecto económico. Redactó numerosos informes sobre estos asuntos, siendo el más notable la "Demostración del misero, deplorable estado...de las Islas Filipinas".

En 1767 fue promovido Alcalde del Crimen de la Audiencia de México, y en 1771 fue nombrado Oidor de la Audiencia de aquella ciudad, donde recibió el título de Conde de Tepa (1775).

Regresó a España donde fue nombrado ministro del Consejo de Indias. En este supremo organismo evacuó numerosas consultas sobre asuntos referentes a México y Filipinas, reflejando en ellos sus profundos conocimientos sobre dichos territorios. (Debo a Lourdes Díaz Trechuelo algunas noticias biográficas sobre el Conde de Tepa).

Mesanza, Fray A.: *Apuntes sobre Lagrán*, Caracas, 1926.

Rojas y Contreras, José de, Marqués de Alventos: *Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Mayor de la célebre Universidad de Salamanca. Vida del Excmo. y Rvdmo. Don Diego de Anaya y Maldonado, Arzobispo de Sevilla su fundador y noticia de sus ilustres hijos*. Madrid, A. Ortega, 1766-1770. 3 vols.

5 Múzquiz a José de Gálvez, en el Pardo a 1-III-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

6 R. O. al Presidente y Audiencia de la Contratación de Cádiz, en Madrid a 12-VI-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

que, pocos días más tarde ⁷ daba cuenta a Gálvez de haberlos repartido a sus ministros, «para instrucción de esta Audiencia».

La orden de publicación en Indias fue aún anterior. Ocho días después de la erección, se daba la Real Orden de publicación en España e Indias simultáneamente. ⁸ Su confirmación fue en el mes de julio siguiente. ⁹

Sin embargo, y desde el primer momento, México tuvo más suerte en la prioridad de la recepción de la noticia, como la habría de tener para la acogida y participación en la nueva entidad bancaria. El Real Despacho de 19 de julio de 1782, fue remitido inmediatamente a la Secretaría de Nueva España, ¹⁰ y trasladado seguidamente al Virrey, Don Matías de Gálvez. ¹¹ A Santa Fe y Lima, no se pudo hacer el envío, por haber llegado las copias de la Real Cédula después de haber partido los envíos para aquellos Virreynatos. ¹²

Vista la demora que ello significaba, se reunió el Consejo de Indias, acordando pasar por la vía reservada a

7 Don Francisco Manxón, Presidente de la Audiencia de la Contratación de Cádiz a D. José de Gálvez, en Cádiz a 21-VI-782. (A. G. I., Indiferente 1849). Acusa recibo de la R. C. expresiva de las reglas con que S. M. "ha tenido a bien crear un Banco Nacional y General bajo la denominación de Banco de San Carlos, para facilitar las operaciones del comercio, y el beneficio público para estos Reynos y los de las Indias".

8 R. O. de publicación de la R. C. de creación del Banco de San Carlos, en Madrid a 10-VI-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

9 R. O. de publicación de la R. C. de creación del Banco de San Carlos, en 19-VII-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

10 Antonio Ventura de Taranco a Miguel de San Martín Cueto, en Madrid a 1-VIII-782. (A. G. I., Indiferente 1849). Da cuenta de haber remitido a La Coruña las copias de la R. C. de erección del Banco el 19-VII.

Miguel de San Martín Cueto a D. José de Gálvez, en Madrid a 7-VIII-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

11 R. C. de erección del Banco Nacional de San Carlos el 19-VII-782. Traslada al Virrey de Nueva España D. Matías de Gálvez. Varios ejemplares. (A.G.I., Indiferente 1849).

12 Miguel de San Martín Cueto a D. José de Gálvez, en Madrid a 7-VIII-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

América la Real Cédula de erección del Banco de San Carlos.¹³

Como fácilmente puede colegirse de la relación de autoridades a que fue enviada la noticia de la creación del Banco en este primer momento, se trata sólo de las dependientes del Virreinato de Nueva España. Aunque sorprendentemente se incluyen en la Real Orden las Gobernaciones de Caracas, Maracaibo, Cumaná, Trinidad, Margarita y Guayana, se debió, sin duda, a considerarlas como dependencias jurisdiccionales de la Presidencia de Santo Domingo, por no estar creada aún la Real Audiencia de Caracas.¹⁴

Casi una año más tarde, en marzo de 1783, se hacía ya una comunicación general de la creación del Banco de San Carlos a todas las autoridades americanas.¹⁵ Vemos en ella un carácter más amplio, comprensivo de todo el Nuevo Mundo, pero se notan también omisiones particulares en lo referente a Nueva España.

¹³ Antonio Ventura de Taranco a Miguel de San Martín Cueto, en Madrid a 1-VIII-782. Acusa recibo del Acuerdo del Consejo de Indias y R. O. de 28-VII-782. (A. G. I., Indiferente 1849).

Las personas a que iba dirigida esta R. C. que reiteraba la de 19-VII-1782 eran:

Virrey de Nueva España	Gobernador de Puerto Rico
Presidente de Guatemala	Gobernador de Cuba
Presidente de Santo Domingo	Gobernador de Cumaná
Gobernador de la Habana	Gobernador de la Isla de Trinidad
Gobernador de Luisiana	Gobernador de la Isla de Margarita
Gobernador de Filipinas	Gobernador de la Guayana.
Gobernador de Caracas	Regente de la Audiencia de Guadalajara, como Gobernador y Capitán General.
Gobernador de Maracaibo	Comandante Gral. de Provincias Internas
Gobernador de Nueva Vizcaya	Gobernador de Yucatán.

¹⁴ La Real Audiencia de Caracas se creó por R. C. de 31-VII-786.

¹⁵ R. C. en el Pardo a 26-III-783. Como la Minuta de D. José de Gálvez al Virrey de Nueva España, en el Pardo en la misma fecha. (A. G. I., Indiferente 1849).

Las autoridades mencionadas entonces son:

Virrey de Nueva España	Gobernador de la Habana	Gobernador de Filipinas
Virrey del Perú	Gobernador de Campeche	Cmte. Gral. Provs. Internas
Virrey de Buenos Aires	Gobernador de Luisiana	Intendente de Caracas
Virrey de Santa Fe	Gobernador de Santo Domingo	Intendente de Luisiana
Presidente de Guatemala	Gobernador de Pto. Rico	Intendente de la Habana
Presidente de Quito	Gobernador de Panamá	Intendente de Buenos Aires
Presidente de Chile	Gobernador de Caracas	Intendente de Provs. Internas

La novedad de esta Real Orden es la inclusión de los Intendentes, como ejecutores de la misma. No en balde, el año anterior se había publicado la Real Ordenanza de Intendentes de Buenos Aires,¹⁶ y estaban ya vigentes las de Cuba y Luisiana.¹⁷ Comprendemos la inclusión de la de Caracas,¹⁸ y nos sorprende la denominación de la de las Provincias Internas,¹⁹ máxime cuando también se enviaba al Comandante General de las mismas.

La mayor parte de los destinatarios de la Real Cédula en cuestión, se limitaron a evacuar el trámite, acusando recibo y prometiendo la publicación.²⁰ Únicamente el Pre-

¹⁶ La "Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires", Madrid, 1782; Apud Luis Navarro García, *Intendencias en Indias*, Sevilla, 1959, págs. 72.

¹⁷ "Instrucción dada al Intendente que se ha de establecer en la Isla de Cuba", San Lorenzo, 31-X-764.

"Intendencia de Luisiana", dada por Squilace en 3-VII-765; Navarro García, ob. cit., págs. 20, 25 y 65.

¹⁸ R. C. de erección de la Intendencia de Caracas, en Madrid a 25-XI-776. Navarro García, ob. cit., pág. 34.

¹⁹ Según Luis Navarro García a D. José de Gálvez le gustaba llamar Intendente de las Provincias Internas al de Sonora y Arizpe, que desde 1775 es Pedro Corbalán, a quien nunca se otorgó aquél título. Las Intendencias de Durango y San Luis de Potosí son las otras dos que abarcan la Comandancia de Provincias Internas, y fueron erigidas formalmente en 1786, por la Ordenanza de Intendentes de Nueva España.

²⁰ Pedro de Peralta y Rioxas, Gob. de Sto. Domingo, en Sto. Domingo a 20-VI-783.

Luis de Unzaga y Amézaga, Gob. de la Habana, en Habana a 12-II-784.

Juan Ignacio de Uriza, Intendente de la Habana, en Habana a 3-VI-783.

José de Avalos, Intendente de Caracas, en Caracas a 3-VII-783.

Manuel González, Gob. de Caracas, en Caracas a 7-VIII-783.

Antonio, Arzobispo Virrey de Santa Fe, en Santa Fe a 7-X-783.

José García de León Pizarro, Presidente Visitador de Quito, en Quito a 18-X-783.

Ambrosio de Benavides, Presidente de Chile, en Santiago a 20-VIII-783.

Juan José de Vertiz, Virrey de Buenos Aires, en Buenos Aires a 12-VII-783.

Manuel Fernández, Intendente de Buenos Aires, en Buenos Aires a 1-VII-783.

Pedro Corbalán, Intendente Gobernador de Sonora, en Arizpe a 25-VII-783.

Felipe de Neve, Comte. Gral de las Provincias Internas de Nueva España, en Arizpe, a 25-VII-783.

Esteban Miró, Gobernador interino de Luisiana, en Nueva Orleans a VI-783.

Martín Navarro, Intendente de Luisiana, en Nueva Orleans a 2-VI-783.

Gobernador y Capitán General de Yucatán, en Mérida a 10-VII-783.

José Basco y Bargas, Gobernador de Filipinas, en Manila a 3-VI-785.

Agustín de Jáuregui, Virrey del Perú, en Lima a 16-IX-783.

Matías de Gálvez, Virrey de Nueva España, en México a 26-VI-783.

(A. G. I., Indiferente, 1849).

sidente de Guatemala, Don José de Estachería,²¹ comunicaba haber «sido el primero en introducir en las Cajas Reales las acciones a que han podido extenderse mis pocos medios»; y Juan Dabán, Gobernador de Puerto Rico,²² anunciaba lo había comunicado entre sus súbditos «sin embargo de haber notado en algunos de ellos propensión a efectuarlo, temo lo impida la pobreza en que yacen de resultado de la última guerra».

Ya veremos cómo fue Matías de Gálvez, Virrey entonces de Nueva España,²³ el único eficaz difusor de la noticia. Su interés, entre otras razones, por los vínculos familiares con el entonces Ministro de Indias,²⁴ hizo que fuera el único

²¹ José de Estachería, Presidente de Guatemala, en Guatemala a 6-X-783. (A. G. I., Indiferente, 1850).

²² Juan Dabán, Gobernador de Puerto Rico, en San Juan a 16-VI-783. (A. G. I., Indiferente, 1850).

Torres Ramírez, Bibiano: *Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XVIII*. Tesis Doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 1962. Próxima publicación.

²³ Don Matías de Gálvez, Virrey de Nueva España (28-VI-783 - 3-XI-784).

²⁴ Don José de Gálvez nació en Macharaviaya (Málaga) en 1720. De familia pobre e hidalgo. Fue pastor y acólito en su pueblo natal. El Obispo de Málaga quiso hacerlo sacerdote. Estudió leyes en Salamanca. Practicó la abogacía en Madrid. Nombrado en 1750 Gobernador de Mindanao, no fue a Filipinas. Casó con Magdalena Grimaldo. Priestley dice que el matrimonio le introdujo en las "coterias" francesas de Madrid. Sabía el francés con gracia y perfección. Secretario de Grimaldi fue muy celebrada su ocurrencia de decir: "antes que el Rey está la ley". Nombrado "Alcalde de Casa y Corte de Madrid", este cargo le puso en contacto con el Consejo de Castilla. Allí conoce al Conde de Aranda, a Campomanes y a Moñino.

Es designado Visitador de Nueva España en 1765, para sustituir a Francisco de Armona, muerto en el viaje. En el virreinato lleva a cabo una serie de reformas fiscales y hacendísticas: establece el monopolio del tabaco, recorre el territorio de la Sonora y el norte de Nueva España, propone el establecimiento de una Comandancia de Provincias Internas, hace el proyecto de Intendencias para reorganizar política y administrativamente el Virreinato. Es el brazo ejecutor de la expulsión de los jesuitas en México.

Al regresar a la península es designado miembro honorario del Consejo de Indias con señoría. En 1773 hace la inspección de los Archivos de Indias y Simancas. Recopila documentos sobre el Venerable Palafox, su predecesor en la Visita. Sustituye al Conde de Aranda como miembro de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas.

A la muerte de Arriaga le sustituye en la Secretaría de Indias, por indicación de Múzquiz. Es Gobernador temporal del Consejo de Indias.

Consejero de Estado, preconiza en 1780 la campaña contra Inglaterra para alen-

que consiguió una importante participación de sus súbditos en la naciente entidad, aparte de la suscripción personal que llevó a cabo.²⁵

A fines de dicho año de 1783 se celebró la segunda Junta General del Banco Nacional de San Carlos,²⁶ y fueron remitidos al Ministro de Indias 500 ejemplares de la misma para que «se publiquen en los Dominios de Indias los progresos y resultas de este establecimiento». José de Gálvez los remitió a «los Jefes de ambas Américas». ²⁷ Vemos en todo ello cómo seguía vivo el interés del gobierno y de la Junta rectora del Banco de San Carlos en tener infor-

tar las ambiciones de su sobrino Bernardo de Gálvez, joven oficial en Luisiana, con brillante hora de servicios.

En 1785 recibe el título de Marqués de Sonora. Favorece a su pueblo natal estableciendo en él una fábrica de naipes. Su hermano Matías y su sobrino Bernardo, hijo de éste, fueron virreyes de México. Otro hermano, Miguel, fue embajador en Prusia. El otro hermano, Antonio, marino, fue Mariscal de Campo.

José de Gálvez murió en Aranjuez en 1787, siendo ministro, y quizá de resultas de la enfermedad nerviosa contraída en la expedición a la Sonora.

(Priestley, Herbert Ingram: *José de Gálvez, Visitor General of New Spain*, Berkeley, 1916.)

²⁵ Don Matías de Gálvez, Virrey de México, envió, en 21-I-784, 50.000 pesos fuertes para adquirir 500 acciones del Banco Nacional de San Carlos. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Expediente del Mayorazgo de Don Matías de Gálvez y papeles de doña Ana de Zayas, su esposa. Son poderes. (Archivo del Banco de España en Madrid. Legajo 536, núm. 30).

²⁶ Los Directores del Banco Nacional de San Carlos: el Conde de Altamira, Gregorio Joyes, el Marqués de Tolosa, Juan Bautista Rodríguez (sic), José de Toro, Pedro Bernardo Casamayor, Francisco de Cabarrús, Juan José de Goicoechea, a José de Gálvez, en Madrid a 16-I-784. (A. G. I., Indiferente, 1849). Ejemplares de la 2.ª Junta General de Accionistas del Banco Nacional de San Carlos, celebrada en Madrid en 20-XII-783.

²⁷ José de Gálvez a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en El Pardo a 6-II-784. (A. G. I., Indiferente, 1849). Se envió a: Intendente Gobernador de Sonora, Intendente de Ejército de La Habana, Gobernador y Capitán General de Yucatán, Presidente de Guatemala, Gobernador de Popayán, Presidente de Chile, Presidente y Superintendente de Quito, Arzobispo Virrey de Santa Fe, Virrey del Perú, Gobernador de La Habana, Virrey de Nueva España, Intendente de Buenos Aires, Intendente de Caracas, Gobernador de Santo Domingo, Comandante General Intendente de Provincias Internas de Nueva España, Gobernador de Caracas, Intendente de Florida (era el mismo de Luisiana después de la reconquista de la Florida Oriental por Bernardo de Gálvez), Virrey de Buenos Aires, Gobernador de Panamá, Gobernador de Puerto Rico.

El Caballero de Croix, Virrey del Perú, a José de Gálvez, en Lima a 16-VIII-784. (A. G. I., Lima, 666). (Debo esta noticia a Miguel Maticorena.)

mados, e interesar en la marcha del mismo, a los españoles residentes en el Nuevo Mundo.

Pero para interesar más a aquellas autoridades, y a los españoles americanos en el desarrollo del Banco de San Carlos, e informarlos de la participación que del sobrante de sus Propios y Arbitrios se había hecho por diversos pueblos peninsulares hasta fines de 1783; se envió a todas las autoridades en Indias un impreso,²⁸ conteniendo una detallada relación de dichos pueblos, que habían suscrito 7.865 acciones del Banco, por un importe de 15.707.120 reales de vellón. La circular fue cumplimentada por las distintas au-

²⁸ Relación de los Pueblos que han impuesto acciones en el Banco Nacional de San Carlos, a consecuencia de las Reales Cédulas de 2-VI y 27-VIII-782. En Madrid, 1784. (A. G. I., Indiferente, 1849). (Biblioteca del Banco de España de Madrid). Los pueblos cuyo resumene va a continuación han impuesto del sobrante de sus Propios y Arbitrios hasta fin de este año: 7.856 acciones, cuyo importe asciende a 15.707.120 reales de vellón.

<i>Pueblos</i>	<i>Acciones</i>	<i>Pueblos</i>	<i>Acciones</i>
Alava	284	Mallorca	60
Aragón	2.111	Mancha	188
Asturias	163	Murcia	208
Ciudad Rodrigo	423	Navarra	102
Cataluña	49	Segovia	66
Cuenca	395	Sevilla	279
Extremadura	179	Toledo	162
Galicia	45	Toro	90
Granada	471	Valencia	1.099
Guadalajara	174	Valladolid	94
Jaén	186	Vizcaya	621
Madrid	383	Zamora	24

Total, 7.856

Hay que añadir 1.500 que se acordó imponer Guipúzcoa, que dan un total de 9.356, más 300 fanegas de trigo, que se acordó el lugar de la Torre del Burgo de Guadalajara.

Es curioso la desproporción de una provincia con otra. Cataluña (49 acciones) y Galicia (45 acciones) son las más reducidas en cuanto a la suscripción, si se tiene en cuenta que Zamora (24 acciones) debe considerarse con Toro (90 acciones). Las razones de Cataluña industrial, y Galicia agraria y retrasada son indudablemente distintas. Aragón (2.111 acciones) fue la más entusiasta, seguida de Valencia (1.099 acciones), Guipúzcoa (1.500 acciones) y Vizcaya (621 acciones).

toridades indianas,²⁹ que prometían tomar las necesarias providencias para su publicación, y para que sirviera de ejemplo en el respectivo territorio. Particularmente curiosa es la del Presidente de Chile, que al propio tiempo que manifiesta la imposibilidad de acudir con sus fondos de propios, da cuenta de los acuciantes problemas urbanos que por aquellos días tenían planteados Santiago y Concepción.³⁰

El Banco de San Carlos y el vestuario del Ejército

Una función que correspondía al Banco de San Carlos, casi desde el primer momento de su creación, fue la de llevar por cuenta de la Real Hacienda lo referente a los

²⁹ Contestaciones a la circular de 18-IV-784, acompañando relaciones de las acciones puestas en el Banco de San Carlos por diferentes pueblos de la Península. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Acusan recibo a José de Gálvez: José Antonio Rengel, Comandante General de las Provincias Internas, en 26-II-785; el caballero de Croix, Virrey del Perú, en 5-XI-784; Juan Dabán, Gobernador de Puerto Rico, en 18-VII-784; Matías de Gálvez, Virrey de México, en 23-VIII-784; Esteban Miró, Gobernador Interino de Luisiana, en 18-IX-784; Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo Virrey de Santa Fe, en 9-X-784; Marqués de Loreto, Virrey de Buenos Aires, en 8-X-784; Manuel González, Gobernador de Caracas, en 29-VIII-784; Luis de Unzaga y Amezaga, Gobernador de La Habana, en 28-VII-784; José Merino y Ceballos, Gobernador de Yucatán, en 5-X-784; Juan José Villalunga, Presidente de Quito, en 18-IX-784; José de Estachería, Presidente de Guatemala, en 15-X-784; Pedro de Peralta Roxas, Gobernador de Santo Domingo, en 7-XI-784.

³⁰ Ambrosio Benavides, Presidente de Chile, a José de Gálvez, en Santiago a 2-XI-784. Contesta a la circular de 18-IV-784 acompañando relaciones de acciones puestas en el Banco de San Carlos por diferentes pueblos de la Península. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Reconoce la utilidad del sistema propuesto y el aumento que toma el Banco, pero manifiesta la imposibilidad de concurrir a ello Santiago con sus rentas comunes, que, aunque no escasas, están superadas por los gastos indispensables a que éstas afectan, por los eventuales que causa la reparación de la población contra las avenidas del río inmediato, que el año pasado destruyó las murallas o tajamares que las defendía de las inundaciones. Estos trabajos que nunca cesan se mantienen con ingente costo de propios, y así el Presidio donde los reos de menor criminalidad trabajan en esas urgencias. Demolida por ruinosa la cárcel con la de Corte, y casas del Ayuntamiento, tomadas las disposiciones para dar comienzo a su reedificación, demanda ello crecidas impensas, procurándose todos los ahorros posibles, y teniendo que recurrir a recursos extraordinarios. Este es el estado de los fondos de comunidad de la ciudad. En Concepción ocurre igual, pues a más de ser cortos los recursos, hace más de 2 años que puso en práctica, y están los edificios sin concluir. Los demás pueblos carecen del ramo de propio y arbitrios públicos.

gastos de los diferentes Cuerpos de Ejército, en lo correspondiente a víveres, vestuarios, etc.³¹

A mediados de 1788 se relevaba al Banco de la comisión de ejecutar el vestuario del Ejército de Indias,³² acusando recibo, y viendo la forma de hacer frente a la nueva situación las distintas autoridades a las que se comunicaba esta nueva disposición.³³ En dicho momento, y después de concluir todos los encargos referentes a vestuario, la Junta de Dirección del Banco, comunicaba a Don Antonio Valdés, Ministro de Hacienda y Guerra,³⁴ que incluída la cuenta

³¹ Varios ejemplares de las Reglas mandadas formar en virtud de R. O., y aprobadas por S. M., para que se observen por los Jefes e Individuos de Tropa de Infantería, Caballería y Dragones, y demás clases de Extraordinario, por los Intendentes y Oficios de Cuenta y Razón del Ejército, y por los Directores del Banco Nacional en la Provisión de Víveres del Ejército, y en la de Corte, Caballerizas, Partidas y Sitios Reales, que deben administrarse por el Banco de cuenta de la Real Hacienda desde 1-IX-783. En Aranjuez a 15-V-783, aprobado por el Rey en 21-V-783. Firmado por D. Miguel de Múzquiz, ya Conde de Gausa (A. G. I., Indiferente 1849).

³² El Caballero de Croix, Virrey del Perú a Don Antonio Valdés y Bazán, Ministro de Hacienda y Guerra, en Lima a 30-XII-788. (A. G. I., Indiferente, 1849).

³³ Contestaciones a la R. O. de 20-VI-788. (A. G. I., Indiferente, 1849). Contestan: Virrey del Perú en 30-XII-788, Gobernador y Capitán General de Yucatán en 30-IX-788, Presidente de Guatemala en 19-X-788, Gobernador de la Habana en 29-VIII-788. Capitán General de Caracas en 20-X-788, Presidente y Capitán General Interino de Santo Domingo en 25-IX-788, Gobernador de Filipinas en 18-I-790. Ambrosio O'Higgins de Vallina, Presidente de Chile, en 22-I-789. Pide vestuario para cuyo coste ya tiene remitido el correspondiente caudal. La razón es "ser ya más extrema la desnudez que padecen las Tropas de la Frontera de la Concepción". La guerra con los indígenas no terminó nunca en Chile.

³⁴ Junta de Dirección del Banco de San Carlos a Don Antonio Valdés, en Madrid a 30-VII-788. (A. G. I., Indiferente 1849).

El importe de las cuentas de Vestuario entregados por el Banco para el ejército de América es:

Vestuario del Batallón de Caracas (30-IV-786)	301.217. 3
Vestuario del Batallón Valdivia (15-IX-786)	173.835.24
Vestuario del Batallón de Infantería Buenos Aires (30-X-786)	525.511.10
Vestuario de Dragones de Buenos Aires (30-X-786)	43.449.29
Vestuario del Batallón de Artilleros de la Trinidad (15-III-787)	91.835.33
Vestuario del 2.º Nuevo Regimiento de la Habana (30-V-788)	542.604. 2
Vestuario del Escuadrón de Dragones de América (30-VII-788)	134.254. 5

1.812.708. 4

Hay otra Relación, que debe ser del Ministerio de Indias, que suprime la partida del 2.º Nuevo Regimiento de la Habana por valor de 546.604.2, quedando reducido el adeudo a 1.270.104.2. Dice que esa partida se había despachado por la Mesa de la Habana.

del Escuadrón de Dragones de América, la de vestuarios ascendía a 1.812.798 pesos, 4 reales, esperando la orden de reintegrar al Banco sus respectivos importes.

**Intervención del fiscal Ramón Posada
en las suscripciones de indios**

No obstante la difusión de la Real Cédula de 2 de junio de 1782 en las Indias, en la cual se participaba la erección del Banco Nacional de San Carlos, y la contestación meramente protocolaria dada a la misma, en la mayoría de los casos, hubo otros en que se manifestó algún interés, al menos formal, en la participación efectiva en el naciente Banco. En Nueva España, hay una serie de razones, que, sin duda, influyeron en que fuera el sitio donde se diera una acogida más favorable a la idea. Hemos señalado en primer lugar que el virrey mexicano era hermano del ministro de Indias en aquel momento. Pero además, hemos de subrayar la eficaz intervención del Fiscal de lo Civil, D. Ramón Posada, que fue sin duda quien movió, por propia iniciativa, o reflejando otra superior, la numerosa suscripción de acciones en el Virreinato, sobre todo por parte de las Comunidades de Indígenas de muchos Ayuntamientos.

Consideró Posada, que no se había obedecido con prontitud y brevedad ³⁵ la referida Real Cédula de erección del Banco, y dispuso que, para la más pronta información en Nueva España, se reimprimiera y publicara por Bando en la capital, pasándose ejemplares del mismo a las más importantes entidades, y a las fuerzas vivas de todo el virrei-

35 Respuesta del Fiscal de lo Civil Don Ramón de Posada al Sr. Asesor General del Virreinato de Nueva España, en México a 21-III-783. (A. G. I., Indiferente 1849).

"se pasen ejemplares de ella a la Real Audiencia, Sala del Crimen, Ilmos. Sres. Arzobispos y Obispos de Nueva España, Deanes, Cabildos, Ilustres Ayuntamientos, Prelados de las Ordenes Regulares, Gobernadores y Alcaldes Mayores de todo el Virreinato, y al Comandante General de las Provincias Internas".

nato. Para facilitar el cumplimiento de la Real Orden de publicación, de 19-VII-1783, proponía el nombramiento de «sujetos más abonados y de la mayor confianza pública», a los cuales se les entregaría el importe de las acciones, contra el correspondiente recibo, interin se expedían los oportunos títulos. Esto, en el caso de que no quisieron enviar directamente sus caudales a España. Unicamente tratándose de los Cuerpos Políticos, Propios de los Ayuntamientos y Comunidades de Indios, deberían hacerlo, precisamente, en la forma prevista por la reiterada disposición.

Pero pasados unos meses, a pesar de la publicación del Bando propuesto por el Fiscal Posada en su Respuesta, nadie había concurrido a participar en la suscripción de las acciones del Banco. No obstante que, como decía Posada al Virrey,³⁶ se daba la garantía de que la entrega de numerario había de hacerse al Prior y Cónsules de la capital, contra recibo a los interesados del importe de las acciones depositadas, mientras éstas llegaban.

Quizás haya en las palabras de Posada una leve censura a la falta de entusiasmo por parte del Virrey, al decirle que la Real Orden de 26-III-1783³⁷ le mandaba procurar «con la mayor eficacia que las ciudades, villas y demás pueblos se interesen en este establecimiento nacional, a proporción de sus haberes propios y comunes, exhortando, y animando igualmente a los particulares, a que concurren a tan interesante objeto». Añadía el Fiscal,³⁸ «en este proyecto con que la bondad del Rey ha manifestado su eficaz anhelo por el beneficio de la nación, se interesa el estado en general con las innumerables utilidades que proporcionará la expedición de las recíprocas negociaciones y giros de aquellos y estos reinos; y los particulares en las utilidades del Banco, conforme a las reglas establecidas, y a la mag-

³⁶ Respuesta del Fiscal Posada, en México a 24-IX-783. (A. G. I., Indiferente 1849).

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

nanimidad con que S. M. se ha servido promoverle con los ramos de provisión de víveres del ejército y armada, y de vestuario de las tropas de tierra de España e Indias por veinte años; ofreciendo su Real Clemencia que fenecido el tiempo de los asientos actuales se lo agregarán conforme a su proposición y fondos». Repetía aquí Posada, con mayor amplitud y detalle, los beneficios que el Banco había de reportar al país en general, y a los particulares interesados en él.

Y vista la ineficacia de las medidas adoptadas, no obstante el tiempo transcurrido,³⁹ el Fiscal, añadía: «esto prueba que no se ha comprendido bien lo importante de este establecimiento, y que por esto se ha visto con indiferencia con el justo fin de que se logren las utilidades que S. M. desea». Pero lo más interesante son las medidas excesivamente coercitivas, y por ello discutibles, como veremos, que propugna Posada.

En primer lugar pedía que el Virrey oficiase «al Ilustre Ayuntamiento de esta Corte, y a los de Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Valladolid, Pácuaro, Celaya, Salvatierra, Guadalajara, Oaxaca, San Miguel el Grande y San Luis de Potosí, a efecto de que conforme a las existencias, y productos de sus fondos, se interesen con las correspondientes acciones en el Banco Nacional, remitiendo sin dilación al Consulado de esta Corte los caudales que estimaren a este objeto»; medida que, como vemos, quita en absoluto la espontánea libertad de participación en la empresa bancaria.

Con respecto a los particulares, proponía, se oficiase por el Virrey «a todos los sujetos distinguidos, y de conocidas facultades en esta capital y Reyno, exhortándoles y animándoles al mismo fin, según S. M. manda». Finalmente, al hacer referencia a los Bienes de Propios de los pueblos de indígenas, es ya excesivo y abusivamente mediatizador

39 Ibid.

del destino de los fondos que, a ellos solamente, correspondía determinar. Decía Posada a este efecto: «El Contador General de Propios y Arbitrios del Reyno, debe informar con la posible brevedad los pueblos que gozan algunos propios, o existencias en sus Arcas que dedican al Banco; con cuya noticia se tomará la providencia conveniente para que tenga efecto a beneficio de sus bienes comunes, lo que es muy conforme a las leyes, que previenen la imposición de sus fondos a censo para que no los disipen, y no estén en inacción, pudiendo producir. Estas providencias ejecutan mucho por estar para salir el Despacho de Caudales...». Aceptada por anticipado la conveniencia y utilidad de que los Bienes de Propios estuvieren siempre en inversiones productivas, para beneficiar a sus titulares, no es en modo alguno aceptable la tesis arbitrariamente estatista de Posada, de invertir los fondos disponibles.

Naturalmente que las distintas, y cada vez más insistentes propuestas de Posada, tuvieron en Madrid una favorable acogida,⁴⁰ recibiendo el Fiscal la felicitación real, al propio tiempo que se le encargaba prosiguiese en sus ideas y propósitos. José de Gálvez pedía se encomendara el asunto al Virrey de Nueva España, y le enviaba a Posada un ejemplar impreso de la Relación de Pueblos de la Península que habían impuesto acciones en el Banco.⁴¹

Sin embargo, este procedimiento coactivo dio malos resultados, y no pudo mantenerse después de muerto Don Matías de Gálvez, Virrey de México y hermano del Ministro de Indias.

⁴⁰ Minuta de la R. O. en Aranjuez, 18-IV-784, al Fiscal de lo Civil Ramón de Posada. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁴¹ El Ministro de Indias a Ramón de Posada, Fiscal de la Audiencia de México, en Aranjuez a 18-IV-784. (A. G. I., Indiferente 1849).

La Audiencia Gobernadora de Nueva España: cambio de actitud sobre la suscripción de acciones por indios

La Audiencia Gobernadora ⁴² mantuvo otro punto de vista, encareciendo en primer término la libérrima voluntad de los indígenas que formaban las Comunidades, para el envío de caudales a la suscripción del Banco Nacional de San Carlos. La postura de esta Corporación es muy diferente a la del Fiscal, y a la de Don Matías de Gálvez. Es la primera preocupación de aquélla el bienestar y porvenir de los indios en orden a sus inversiones bancarias, y no como en el caso anteriormente analizado, la aparentemente agobiante necesidad del Banco de San Carlos de cubrir la emisión de sus acciones por medio de suscripciones obligatorias.

Por ello la Audiencia pone de relieve cómo se hizo la primera suscripción de acciones, al decir: ⁴³ «Por el adjunto Testimonio se impondrá V. E. de que persuadido el Fiscal Don Ramón de Posada con justos fundamentos de los riesgos a que están expuestos los Caudales de las Comunidades de Yndios, y de la seguridad con que subsistirían imponiéndolos en el Banco Nacional de San Carlos en virtud del permiso que concede la Real Cédula de su erección, promovió el que las Jurisdicciones que comprende la Lista de foxas 32 vta. del mismo Testimonio, impusiesen las cantidades que en ella se refieren, librando, como en efecto se libraron por el Virrey Don Matías de Gálvez, órdenes a los respectivos Alcaldes Mayores para que haciendo comparecer a los Gobernadores y República de Naturales, y manifestándoles lo agradable que sería a este Gobierno el que aportasen sus caudales para el efecto, haciéndose participante de las más seguras ventajas, procediesen a su extracción y

⁴² La Audiencia Gobernadora a José de Gálvez, en México a 25-III-785. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁴³ Ibid.

remisión a las cajas de Veracruz, o de esta capital, con inclusión de un poder que deberían otorgar todos los pueblos de cada jurisdicción a favor de Don Gaspar de Jovellanos, Ministro del Consejo de Ordenes».

Vuelto el expediente al Fiscal con las contestaciones recibidas, y reconocido el buen éxito de la anterior providencia, pidió se repitiesen órdenes a los seis Alcaldes Mayores que aún no habían respondido, y para no incurrir como los demás, en el defecto de sacar cuantos caudales encontrasen en Arcas, «se les remitiese un plan igual al que envió el Justicia de Miahuatlan, que expresa lo que había en ellas; lo que extrajo para imponer; y lo que quedó existente, y que el Contador de Propios y Arbitrios remitiese razón de las demás Alcaldías, para que reconociendo lo que existía en sus Cajas de Comunidad, se impusiesen igualmente algunas cantidades en el Banco Nacional».

El párrafo, aunque extenso, es suficientemente expresivo para que nos hagamos idea de la forma cómo se hizo la primera suscripción de acciones, y hasta qué punto, la Audiencia en su actitud, significa un sustancial cambio de orientación en orden a las futuras suscripciones hechas por las Comunidades de Indígenas de Nueva España. Y así, aunque dice este organismo se conforma con todo el anterior pedimento, ella, por Decreto de 16-XII-1784,⁴⁴ «mandó que en las ulteriores órdenes que se comunicasen, y especialmente para los pueblos de Indios y Cajas de Comunidad, se previniese no se sacara, ni extrajera nada, sin que primero constase el libre consentimiento y plena voluntad de los cabildos y repúblicas, explorándose al efecto debidamente, y manifestándoles que el Rey les permite poner sus caudales en el Banco para su utilidad, y no en su perjuicio, y que los Alcaldes Mayores, y ciudades, acreditasen con Testimonio de Diligencias, haber cumplido estas indispensables circunstancias, tan conformes al pladoso y

44 Ibid.

clemente ánimo de S. M., a quien se diese cuenta con Testimonio del Expediente». Vemos cómo en este acertado párrafo, la Audiencia centraba un problema que el Fiscal Posada y Don Matías Gálvez habían desviado en su interpretación. El Rey, permitía a los pueblos de indios y cajas de comunidad, poner sus caudales en el Banco de San Carlos «para su utilidad», y solamente en el caso de que constase el «libre consentimiento y plena voluntad de los cabildos y repúblicas».

Con respecto a lo ejecutado por el Contador de Propios, se repitió por el Fiscal la respuesta de que se librasen otras Ordenes con la prevención acordada en el citado Decreto de 16-XII-1784.⁴⁵ A ello accedió la Audiencia por Decreto de 14-I-1785, «reiterando de nuevo expresamente la práctica de diligencias que acreditasen el libre consentimiento de los Cabildos y Repúblicas para la extracción de sus caudales, pues en el caso de la menor repugnancia, disgusto o resistencia de los interesados, deberá darse cuenta, y suspenderse la saca, y remisión de cantidad alguna hasta nueva providencia». Reiteraba con ello la Audiencia la condición principal de que la aportación de los indígenas fuera libérrima.

Pero no contento este organismo, con el desempeño meramente funcional de su tradicional papel de protector de los indígenas, recababa para ellos⁴⁶ que el Rey se dignara «disponer que a lo menos, en esta capital, se le proporcione la cobranza de los intereses de sus acciones, con intervención del Fiscal Protector, para evitarle de este modo molestias y gastos; y el desconsuelo de mirarlos tan lejos; en el concepto de que los más de los Pueblos que se expresan en ambas listas, han impuesto cantidades reguladas por el Fiscal de lo Civil, lo que, aunque no consta en este expediente, resulta del particular que se ha formado

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

para cada jurisdicción, con el fin de evitar confusiones, y lo acredita la considerable remesa de caudales que se ha hecho con este objeto para España». Tres son los elementos fundamentales de este tercer párrafo. Primero el papel protector de la Audiencia, antes señalado, que aboga ahora por el fácil cobro de los intereses bancarios por parte de aquellos naturales, tan alejados espiritual y físicamente de la metrópoli. En segundo lugar la expresión clara y sin ambages de que las imposiciones habían sido fijadas por el Fiscal Posada. Y finalmente el objeto de proporcionar con ello una importante remesa de caudales a España.

No cabe duda que tanto al Rey, como a Gálvez, no sólo les satisfacía el lenguaje adulator del Fiscal Posada, sino el más realista, aunque no siempre elogioso de la Audiencia Gobernadora. En contestación a las cartas, cuyo contenido acabamos de dar a conocer y comentar, el Rey mandó ⁴⁷ que «para que los indios cobren en las respectivas Cajas o Tesorerías reales los productos de sus acciones, los pongan en la Depositaria General de Indias en Cádiz, el Banco Nacional y D. Gaspar de Jovellanos, Consejero del Real dé Ordenes, como Apoderado de los indios impondores, a fin de que con la nota que se me pase por la Dirección del Banco, los mande yo entregar en ese Reyno sin desfalco alguno, para que tengan aquéllos ese beneficio y una nueva prueba de amor con que los atiende su real clemencia».

Reglamentación de la suscripción de acciones en Indias. La Junta de Descuentos de Cádiz

Fue preocupación inicial del Ministro de Indias, Don José de Gálvez, facilitar a los americanos, o residentes en América, la suscripción de las acciones del Banco Nacional de San Carlos, procurando al propio tiempo reportarles los

⁴⁷ Minuta de R. C., al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 28-VI-785. (A. G. I., Indiferente 1849). En el mismo sentido y fecha minutas de R. R. C. C. a Jovellanos y a los Directores del Banco Nacional.

máximos beneficios en cuanto al rendimiento de las mismas. Es indudable que en ello, como hemos visto, no sólo se procuraba el beneficio económico de los súbditos americanos, sino la inmediata colocación de la emisión bancaria. Gálvez, que ya hemos visto también, procuró imbuir este espíritu a las autoridades indianas, en el cual le fue tan fiel cumplidor el Fiscal Posada, recomendaba ⁴⁸ al Virrey de Nueva España, que hiciera «con la mayor eficacia que las Ciudades, Villas y demás Pueblos se interesen en este establecimiento nacional a proporción de sus haberes propios y comunes, para lo cual tiene concedido el correspondiente permiso, exhortando, y animando igualmente a los particulares a que concurran a tan interesado objeto». Para que todo ello tuviera lugar y efecto debidamente, se dieron una serie de normas favorables a los suscriptores de acciones, que facilitaban las imposiciones de caudales por parte de los americanos, o residentes en América. Eran éstas: ⁴⁹

1.º—Nombrar al Prior y Cónsules de los Consulados de México y Lima, para que se depositaran las acciones en su poder, dando ellos el correspondiente recibo a los interesados, con la obligación de entregarles las correspondientes acciones del Banco, por sus direcciones, cuando llegaran las nóminas y capitales.

2.º—Asegurar a todos los interesados, o suscriptores, que el caudal impuesto en acciones del Banco, debería venir en la primera ocasión de Registro, sin el menor retardo, y libre de derechos de entrada en España, donde sólo se pagaría el flete establecido según las distancias.

3.º—Las utilidades, o producto anual que rindieran las acciones, empezaría a correr en beneficio de los suscriptores desde el día en que se entregaran sus capitales en la Casa del Banco, o sea inmediatamente que llegaran a los puertos peninsulares.

⁴⁸ José de Gálvez al Virrey de Nueva España, en el Pardo a 26-III-783. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁴⁹ Ibid.

4.º—En las capitales donde no hubiera Consulado,⁵⁰ el importe de las acciones se entregaría a los Oficiales o Ministros de la Real Hacienda.

5.º—Establecer Cajas en las principales Metrópolis de ambas Américas Españolas, para facilitar el comercio y pronto curso de los negocios entre aquellos y estos dominios, en recíproca utilidad a los habitantes de unos y otros.

Las operaciones del Banco de San Carlos empezaron inmediatamente⁵¹ que se conoció el sistema y forma de verificarlas. A través de José de Gálvez se enviaron libranzas a Lima, la Habana y Caracas, contra sujetos de aquellas ciudades, en pago de acciones suscritas por ellos.

Es sumamente curiosa la forma que previene el Consulado de México, sobre la manera de efectuarse las operaciones de suscripción a través del Consulado de la Ciudad.⁵²

Es interesante consignar también, cómo Ramón de Posada, siempre celoso del buen éxito de las suscripciones del Banco, aclara y especifica ciertas normas establecidas en la Real Cédula de 26 de marzo de 1783, con indudable simplificación de trámites, y ahorro para los suscriptores. Prevenía Posada al Virrey de México:⁵³

1.º—«Que los Oficiales Reales de Veracruz reciban las cantidades que les dirija el Real Tribunal del Consulado para imponer en el Banco Nacional de San Carlos, y las hagan embarcar con la distinción y expresión debida, a fin de que con ésta misma se reciban en Cádiz por los factores de la Casa del Banco, a los que deben ir directamente consignadas. De este modo logran los imponentes las ventajas de la seguridad, y del ahorro de comisiones en Veracruz

⁵⁰ R. O. a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en Aranjuez a 25-V-783. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁵¹ Francisco de Cabarrús y Juan Bautista Rodríguez (sic) a José de Gálvez, en Madrid a 21-VI-783. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁵² Representación del Consulado de México, a 23-I-783. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁵³ Ramón de Posada, Fiscal de lo Civil de la Audiencia de México, al Virrey en México a 28-I-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

y Cádiz, que necesariamente pagarían sin esta providencia».

2.º—«Los recibos deben entregarse originales a los interesados, y otorgarse y firmarse por el Prior y Cónsules a su favor, copiándose antes en el libro al pie de la letra, y los referidos Prior y Cónsules rubricarán precisamente la partida. El recibo se recoge al mismo tiempo de dar las acciones que remitirán los Directores, y al margen de la partida copiada en el Libro se pone la correspondiente nota firmada también de los mismos Prior y Cónsules, sin necesidad de Escribano, ni más formalidades».

Estas dos condiciones aclaratorias, que indudablemente mejoran el sentido interpretativo de la Real Cédula de 26-III-1783, fueron aceptadas por el Virrey que las decretó⁵⁴ al Consulado de Comercio de México, el cual interpretó las normas, comunicándolas a los Directores del Banco en la forma siguiente:

- 1.º—El Consulado impondría las cantidades en poder del conductor de platas. Este las debía entregar a los Oficiales Reales de Veracruz, y éstos para libertar a los dueños de lastar la comisión de recibo y embarque las dirigirían bajo partida de registro, a los factores del Banco en Cádiz.
- 2.º—En las partidas de registro se nombraría el accionista, a cuya cuenta y riesgo navegasen, y el destino para la franquicia de derechos. Igual especificación se haría en los conocimientos.
- 3.º—El Consulado, al recibir los caudales, otorgaría obligación de dirigirlos al Banco; y entregadas las acciones a los interesados se cancelaría la obligación.

⁵⁴ "Ramo Activo de Seguros Marítimos. Agregado en la Caja de Descuentos del Banco Nacional de San Carlos, en Cádiz". Madrid, 1787. (Biblioteca del Banco de España de Madrid).

**Intentos de aprovechar los beneficios concedidos
a los americanos y residentes en América.
Reprimenda de Gálvez al Banco**

Conocida en la península la gracia hecha por el Rey a los americanos,⁵⁵ o residentes en las Indias, que quisieran invertir sus caudales en el Banco de San Carlos, consistente en liberarlos de los derechos de entrada de los caudales en la península, determinó ello a algunos residentes en España,⁵⁶ que tenían caudales en las Indias, y querían invertir parte de lo que les enviaban de ellas en el Banco, acogiéndose a los beneficios que se les habían hecho a los americanos, por estimarse comprendidos en los mismos.⁵⁷ Así lo comunicó la Dirección del Banco de San Carlos al Ministro de Indias, dándole cuenta de las suscripciones, y pidiendo fueran remitidas al Depositario de Indias, para que cobrase

⁵⁵ El Consulado de México a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en Veracruz a 22-IV-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

Pedro Bernardo Casamayor, Director en ejercicio del Banco de San Carlos, a Don José de Gálvez, en Madrid a 29-VII-784. Acusan recibo de la anterior. (A.G.I., Indiferente 1849).

⁵⁶ Los Directores del Banco Nacional de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 10-II-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

Acompaña una relación de suscriptores y cantidades para acciones del Banco Nacional que remitió con esa fecha su Dirección a la vía reservada de Indias, y que es la que sigue:

	<i>Acciones</i>	<i>Reales de Vellón</i>
El Conde de Tepa	por 150	300.000
D. Francisco Vives Prevdo. de México	" 25	50.000
El Capitán D. Juan Francisco Solano	" 150	300.000
D. Juan Ygnacio de Vertiz	" 100	200.000
Dña Maria Teresa Zerain	" 12	24.000
La misma Dña María Teresa	" 6	12.000
	<hr/> 443	<hr/> 886.000

Es curioso que el Conde de Tepa, uno de los miembros de la junta que fundó el Banco de San Carlos, se acogiera a los beneficios de esta dudosa interpretación legal.

⁵⁷ Los Directores del Banco Nacional de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 10-II-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

"Muchos dueños de caudales detenidos en Indias han sabido solamente con que la última Junta General del Banco, la gracia de derechos y fletes con que S. M. ha querido facilitar su imposición en este establecimiento".

su importe, y lo remitiese al Banco a su llegada. Con ello se reiteraba y cumplía el propósito de fomento del Banco.

La interpretación dada a la Real Orden, fue considerada fraudulenta por el Ministerio de Indias,⁵⁸ así como el intento de acogerse a los beneficios que se habían otorgado a los suscriptores indianos. Así se especificaba al decir que dicho procedimiento «no es adaptable en modo alguno a las pladosas y benéficas intenciones de S. M., ... en favor de sus vasallos americanos, habitantes en aquellos dominios, cuya precisa circunstancia, y la de entregar los capitales a las acciones en los Consulados de Comercio, y donde no los hubiese en las Cajas Reales, se pusieron con el cuidado y previsión correspondientes a la sabiduría del Rey, para no dejar margen al fraude, que ahora han intentado hacer los sujetos (de quienes son las suscripciones que V. E. y V. S.^{as} me incluyeron y les devuelvo), consignando unos caudales que no se pusieron en Indias, donde prefinió la citada Real Orden, que de consiguiente no se embarcaron con destino al Banco, y que tampoco pertenecen a vasallos americanos residentes en aquellos Reinos». Reiterándoles a continuación⁵⁹ que la libertad de derechos no comprendía la de fletes del dinero entregado en América, y remitido a España, pues precisamente se especificaba que el pago del mismo estaría en proporción con la distancia recorrida. Manifestaba al final el desagrado⁶⁰ del Rey, y la mala intención que se veía en aquella pretendida suscripción de acciones.

Naturalmente que la dirección del Banco se apresuró

⁵⁸ R. O. a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en el Pardo a 18-II-1784.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

“Quiere pues S. M. que V. E. y V. Sas procedan en la sucesivo en esta inteligencia, y que ahora hagan entender a los suscriptores referidos, el sumo desagrado con que ha visto su idea interesada e inadmisible; sobre la cual tomaría providencia mas severa a no venir recomendada y admitida por la Dirección del Banco”.

a dar toda suerte de explicaciones ⁶¹ a Gálvez, para que las hiciera llegar al Rey. Aceptaba humildemente la reprimenda, pero trataba al mismo tiempo de justificar la honrada intención de su actitud. Y así, el documento excusatorio de la actitud del Banco, hacía referencia a tres puntos fundamentales, al decir era «equivocado sin duda, pues S. M. lo declara así; pero inocente por su parte».

En primer lugar en lo referente a la condición jurídica de los suscriptores, de ser americanos, consideraba «que la gracia era respectiva a los caudales y no a las personas», interpretando como real el carácter personal de la concesión, y apoyándolo en otras «suscripciones otorgadas por sujetos establecidos en esta Península, sobre caudales existentes en Indias», admitidas por Gálvez, y ordenado su cobro por él mismo. A mayor abundamiento sobre este extremo, se citaban los casos previstos en la Real Orden de 21-VI-1783 de «que en caso de estar en camino para Europa los caudales de las suscripciones, se cobrarían por el Banco a su llegada».

El segundo punto era referente «a la franquicia de fletes», que reconocía «es cierto que sólo consta al Banco por la explicación que V. E. se dignó tener con el Director Don Francisco Cabarrús; pero no dudó de anunciarlo así al público en la Junta General, asegurándose antes de la aprobación de S. M.», «y distinguió con precisión la época de las dos concesiones», pues dice: «la franquicia de derechos, extendida posteriormente a los fletes». Con lo cual, y por la publicidad que el máximo instrumento del Banco, su Junta General, había dado a conocer de ello, se deducía la buena fe de los suscriptores, que al conocerlo habían concurrido para «aprovechar las ventajas que les ofrecía».

La tercera cuestión, referente al pretendido fraude en estas suscripciones, señalado por el Ministro de Indias a

⁶¹ Los Directores del Banco Nacional de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 25-II-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

la Dirección del Banco, «ha implorado las luces de V. E., y cree haber acreditado por todos términos cuánto dista de querer defraudar el Real Erario de los justos derechos que le pertenecen».

Es indudable que a Gálvez agradaron los términos de la anterior misiva de excusa que le dirigiera la Dirección del Banco. Al responder a ésta,⁶² comenzaba por expresar que el Rey «queda satisfecho del recto modo de pensar de la Junta de Dirección del Banco Nacional, y persuadido de que sólo fue una equivocación de concepto sobre la inteligencia de su Real Resolución de 26 de marzo de 1783». Y aclaraba lo referente a haber dado curso a las libranzas de ciertas personas, que no eran americanos, con anterioridad a los que ahora rechazaba, por «no haberse explicado por la Dirección, ni advertirse por esta vía reservada la calidad de las personas que las dieron». Finalmente «en orden al punto de fletes de que traté con el Director Don Francisco Cabarrús, le signifiqué, por el deseo que tengo de contribuir al mayor acrecentamiento del Banco, que me proponía impetrar de S. M. esta gracia en favor de los americanos, si no bastaba la de derechos que les había concedido; cuyo caso aún no ha llegado, porque lo han de acreditar los efectos de las anteriores providencias que se van ejecutando con celo y actividad, y prometen buen suceso».

Las consecuencias de esta equivocada interpretación de las cláusulas beneficiosas para los americanos suscriptores de acciones del Banco Nacional, dio origen⁶³ a una Real Orden dirigida al Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz, estableciendo, «en cuanto a los caudales que

62 José de Gálvez a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en Palacio a 13-IV-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

63 R. O. al Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz, en Madrid a 13-IV-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

Bartolomé Ortega, Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz a José de Gálvez, en Cádiz a 26-IV-1784. (A. G. I., Indiferente a 1849). Acusa recibo de la anterior y promete cumplimiento.

vengan de Indias, consignados a dicho Banco Nacional, por importe de acciones puestas en él, y no sean de Americanos, habitantes de aquellos dominios y los de Filipinas, quiere S. M. que se exijan los derechos establecidos en el último Reglamento».

La Caja de Descuentos de Cádiz

Finalmente se estableció en Cádiz una Caja de Descuentos,⁶⁴ dependiente del Banco de San Carlos, y cuyo reglamento, de 32 artículos fue hecho por la Dirección de éste. Propuso también la Dirección del Banco al Rey, y éste la aprobó, la formación de una Junta, «que inspeccione y culde de este útil establecimiento», «para que las operaciones de la Caja se hagan con la solidez y legalidad necesarias, y del modo más favorable a la industria y al comercio nacional». Dicha Junta estaba compuesta por el Depositario de los Caudales de Indias en ejercicio, el Prior del Consulado o uno de los Cónsules alternativamente, el Marqués de los Castillejos, Don Pedro Normand, y los Directores de la Caja, ejerciendo las funciones de Secretario el Tenedor de Libros.

Joaquín Cubells, Depositario General de Indias,⁶⁵ escribía poco después a Don José de Gálvez, pidiéndole instrucciones, y dándole cuenta de que no establecía otra prioridad en los cargos señalados, que el orden en el nombra-

⁶⁴ Pedro de Lerena a José de Gálvez, en Aranjuez a 3-IV-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

R. O. al Presidente interino de la Audiencia de la Contratación de Cádiz y Prior y Cónsules del Consulado, en Aranjuez a 5-IV-1785. (A.G.I., Indiferente 1849).

Bartolomé Ortega, Presidente Interino de la Audiencia de la Contratación de Cádiz, a José de Gálvez, en Cádiz a 12-IV-1785. (A. G. I., Indiferente 1849). Acusa recibo de la R. O. de 5-IV-1785. (A. G. I., Indiferente 1849). Acusa recibo de la R. O. de 5-IV-1785.

José de la Puente a Isidoro de la Torre, del Consulado de Cádiz, en Cádiz a 15-IV-1785. (A. G. I., Indiferente 1849). Acusan recibo de la R. O. de 5-IV-1785.

⁶⁵ Joaquín Cubells, Depositario General de Indias, a José de Gálvez, en Cádiz a 31-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

miento de los vocales. En el mismo sentido se dirigían también al Ministro de Indias los Directores del Banco,⁶⁶ presuponiendo que los Directores honorarios, como llamaba a los que no eran de la Caja, tendrían preferencia sobre éstos que llamaba dotados. La única duda que presentaban a consulta era sobre si la presidencia de las Juntas correspondía al Depositario de Caudales en Indias, o al Prior del Consulado. Hecha la consulta al Consejo de Estado,⁶⁷ resolvió éste que la presidente correspondía al Depositario por ser Juez Oficial de Contratación.

**Anticipo de 1.000.000 de pesos por la Casa
Cabarrús para urgencias de la guerra**

Para las urgencias de la guerra en Europa, la Casa Cabarrús y La Lanne⁶⁸ suplió un millón de pesos sencillos. En junio de 1784 la Tesorería de la Habana debía entregar a aquélla un millón de pesos fuertes para compensar el anticipo anterior. Finalmente, el Banco Nacional de San Carlos debía entregar en Francia dicha cantidad, debiendo reintegrarse de la misma con sus intereses durante todo el año 1785. Las negociaciones de esta operación fueron un tanto trabajosas, y en ellas el Banco hubo de suplir en tiempo y demoras ciertas eventualidades.

En primer lugar, y en virtud de Real Orden, se mandó descontar el 4 %⁶⁹ de todos los caudales que vinieran re-

66 Los Directores del Banco Nacional de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 14-VI-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

67 R. O. dirigida a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en Aranjuez a 21-VI-1785, y a Don Joaquín Cubells en 23-VI-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

68 Diciembre de 1782 y octubre de 1784. Expediente sobre que a la Casa de Cabarrús y La Lanne se entreguen por la Tesorería de la Habana en junio de 1784, un millón de pesos fuertes por otro sencillo que ha suplido para las urgencias de la Guerra. (A. G. I., Indiferente 1849).

69 R. O. a Bartolomé de Ortega, Presidente Interino de la Audiencia de la Contratación de Indias, en Aranjuez a 14-V-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

El Marqués de Tolosa y Juan Bautista Rocio, Directores en ejercicio del Banco de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 15-V-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

gistrados en la última Flota, con el fin de satisfacer al Banco Nacional de San Carlos los 900.000 pesos retenidos en la Habana. Se ordenaba igualmente que dicha cantidad la tendría el Depositario de Indias a disposición de dicho Banco, a cuyo Director se avisaba con la misma fecha para que arbitrara la cantidad que tuviera por conveniente.⁷⁰

Poco después, los Directores del Banco Nacional enviaban a Don José de Gálvez⁷¹ una cuenta liquidada de los dieciocho millones de reales de vellón, que en virtud de oficio comunicado por éste en 28 de noviembre de 1783, remitió el Banco, en 30 del mismo mes, al Depositario de Indias, Don Joaquín Cubélls, para reintegrar a aquel comercio en Vales Reales los 900.000 pesos fuertes tomados en la Habana para las urgencias de la Corona. De dicha operación resultaba, según los Directores del Banco, un saldo a favor de éste de 444.334 reales y 18 maravedises de vellón, procedentes de los intereses devengados desde el momento en que fueron hechas las entregas por el Banco, y por sus comisionados en Cádiz, hasta el día 9 de junio de 1784, en que el Depositario de Indias, Don Juan Rafael de Orta verificó el reintegro de los expresados 900.000 pesos fuertes.

Pedían a continuación los Directores, el reconocimiento y examen de la cuenta, para que si no se le encontraba reparo, dispusiera el Ministro de Indias se reembolsara dicha cantidad al Banco, por medio de la Depositaria de Indias, o en la propia Corte.

La cuenta fue enviada a la Mesa de Comercio,⁷² que consideró que en Cádiz,⁷³ donde se tomó el préstamo, y

⁷⁰ R. O. al Banco Nacional de San Carlos, en Aranjuez a 14-V-1784. (A.G.I., Indiferente 1849).

⁷¹ Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 31-VII-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁷² Nota al margen de la anterior, (A. G. I., Indiferente 1849).

"Vea la Mesa esta Cuenta, y note si hay o no reparo en ella".

⁷³ Nota en 10-VIII-1784. Con referencia a la de los Directores del Banco a José de Gálvez, en 31-VII-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

pagaron los réditos, podría repararse, si para ello había motivo. Fue enviada a la Casa de la Contratación de Cádiz,⁷⁴ «para que calificada por esa Contaduría principal, mande V. S. hacer el pago por la Depositaria de Indias». En el mismo sentido se dirigió el Ministro de Indias a los Directores del Banco Nacional,⁷⁵ los cuales agradecieron la resolución y lo comunicaron a los comisionados del Banco en Cádiz.

En el mismo mes, Don José de Gálvez tenía noticia de haber sido cumplimentada su orden y hecha la liquidación. Los Directores del Banco Nacional en 28 de septiembre de 1784⁷⁶ le comunicaban que con fecha 17 del mismo mes y año, «nos avisan los Sres. Magon Leser Hermanos y Cía., Comisionados del Banco en Cádiz, haberles entregado en efectivo el día 16 del mismo Don Juan Rafael de Orta, Depositario de los Caudales de Indias en dicha Ciudad, reales vellón 444.334,18, saldo de la cuenta de 18.000.000 de reales de la misma moneda, anticipados por este establecimiento a la misma Depositaria para reintegrar a aquel Comercio los 900.000 pesos fuertes tomados en la Habana para las urgencias de la Corona, quedando mediante ello finalizada esta cuenta, sólo nos resta tributar a V. E. las correspondientes gracias...».

A mediados del año siguiente de 1785⁷⁷ llegaban a Cádiz el navío «Santiago la España», y la Fragata de Guerra «Santa Rosalía», llevando el primero un millón de pesos suplido por el Banco Nacional al Ministerio de Indias. Con

74 R. O. a Bartolomé Ortega, Presidente Interino de la Audiencia de la Contratación de Indias, en San Ildefonso a 10-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Bartolomé Ortega a José de Gálvez, en Cádiz a 17-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente 1849). Enterado y dispuesto a cumplir la anterior R. O.

75 R. O. en San Ildefonso a 12-IX-1784. Comunica a los Directores del Banco Nacional la R. O. de 10-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente 1849). Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 13-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

76 Los Directores del Banco Nacional de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 28-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

77 Los Directores del Banco Nacional de San Carlos a José de Gálvez, en Madrid a 25-VII-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

dicho motivo Gálvez pedía al Banco nota del rédito o premio que se debía entregar en Cádiz con el millón de pesos, para dar la consiguiente orden al Presidente de la Contratación. Los Directores del Banco le hacían presente sin embargo «que todavía no han logrado nuestros comisionados en París, los Sres. Le Conteulx y Cía., ni los Agentes de aquella Corte, arreglar la liquidación de los varios puntos respectivos al particular, que con sujeción a la Real Orden de 3 de octubre de 1784, se deben recíprocamente agregar y deducir; y cómo pende esencialmente de este arreglo el de la cuenta formal de toda la operación que nos proponemos pasar a manos de V. E., luego que se halle debidamente liquidada, no nos es posible satisfacer en el día a sus deseos, franqueándole la nota que nos pide».

Pedían a continuación los Directores al Ministro que se entregara el millón de pesos a los Directores de la Caja de Descuentos establecida por el Banco de Cádiz, prometiéndole hacer por su parte «las prevenciones consiguientes sobre el recibo de esta partida, que se abonará a la Real Hacienda de Indias bajo la fecha del día en que se verifique la entrega, a fin de que disfrute de los intereses correspondientes», y prometiendo finalmente presentar la cuenta general respectiva en cuanto quedara establecida.

Inmediatamente fue dada la orden al Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz,⁷⁸ para que entregara el millón de pesos a los Directores de la Caja de Descuento del Banco en la misma plaza, comunicándose a los Directores del Banco.⁷⁹ Bartolomé Ortega, Presidente de la Con-

⁷⁸ R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en San Ildefonso a 26-VII-1785. (A. G. I. Indiferente 1849).

⁷⁹ Minuta de José de Gálvez a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en San Ildefonso a 26-VII-1785. (A. G. I., Indiferente 1849). Da cuenta de las de los Oficiales Reales de Veracruz de 17 y 18-III-1785, y que ha dado con este motivo orden al Presidente Interino de la Casa de la Contratación de Cádiz, para que entregue las cantidades anunciadas a los Apoderados del Banco Nacional.

tratación en Cádiz, preguntó a Gálvez⁸⁰ si la entrega del millón había de hacerse íntegra, sin deducción de derechos ni fletes, siendo afirmativa la respuesta.⁸¹

80 Bartolomé Ortega a José de Gálvez, en Cádiz a 2-VIII-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

81 R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en San Ildefonso a 8-VIII-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

CAPITULO III

LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN AMERICA

**Suscripción de acciones por las parcialidades
de indios de los pueblos de San Juan y Santiago.
Apoderamiento a favor de Jovellanos**

Es indudable que al deseo real y a las instigaciones directas e insistentes del Fiscal Ramón de Posada¹ respondieron en primer lugar las parcialidades de indios de San Juan y Santiago, pueblos inmediatos a México, y los primeros en suscribir las acciones del Banco Nacional de San Carlos. Depositaron en las Cajas Reales de México 20.000 pesos² para adquirir con ellos 200 acciones del Banco Nacional, y pagaron los gastos de conducción de los mismos hasta Veracruz. El Virrey de México, Don Matías de Gálvez,³ al dar esta noticia a su hermano y Ministro de Indias, Don José, subrayaba la prioridad de esta aportación, y manifestaba al propio tiempo la buena disposición de los indios para cualquier nueva aportación de derechos, o gastos que hubiera que hacer con aquel motivo. Al propio tiempo pedía se informase al Monarca, para que confirmase las gracias que él, por su parte, ya les había otorgado.

El Rey, no tardó en responder⁴ manifestando su gra-

¹ Véase capítulo II, notas 35 y 36.

² Matías de Gálvez a José de Gálvez, en México a 24-I-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

³ Ibid. "Han sido los primeros vasallos de estos Reinos que han franqueado sus caudales; por esto me ha parecido distinguirlos en la forma que verá V. E., teniendo en este asunto la principal parte el Fiscal D. Ramón de Posada, que le ha manejado con mucho celo y arte".

⁴ R. O. al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 14-V-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

titud, por hallarse «bien asegurado de la constante lealtad de los Indios de las Parcialidades de San Juan y Santiago, por la generosidad con que ofrecieron sus caudales para los gastos de la pasada guerra». Liberada ⁵ «por gracia especial de flete y contado, como de derechos», la cantidad remitida para la suscripción.

Dichas Parcialidades habían manifestado con anterioridad su fidelidad y afecto al Rey. Así lo expresaban los gobernadores de dichos Pueblos ⁶ al decir «que deseando manifestar a Nuestro Católico Monarca nuestra fidelidad y amor, le franqueamos de nuestros fondos la cantidad de 26.000 pesos para ayuda de los gastos que ocasionó la próxima pasada guerra. Y aunque su Real Magnificencia no permitió la oblación, le merecimos a su soberanía las más distinguidas gracias, que no serán dignamente correspondidas, aun sacrificando a sus reales plantas nuestras propias vidas, debiendo como debemos a su Real Protección cuantas felicidades disfrutamos por medio de los auxilios que la superior benignidad de V. E. a cada paso está difundiendo sobre nosotros, en conservación y aumento de nuestros fondos, y en los demás asuntos a que miran a nuestra utilidad y conveniencia...». A continuación añadían, «...como la que nuevamente nos franquea la Real Clemencia del Rey Nuestro Señor, dándonos participio en el establecido fondo, y Banco Nacional; siendo este un nuevo mérito que excita nuestros fidelísimos ánimos para reiterar a Su Majestad nuestras humildes gratitudes...». Con ello destinaban los dichos 20.000 pesos a la suscripción de 200 acciones del

⁵ R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en Aranjuez a 21-V-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

Bartolomé Ortega, Presidente Interino de la Contratación de Cádiz a José de Gálvez, en Cádiz a 1-VI-1784. (A. G. I., Indiferente 1850). Acusa recibo y queda enterado de la R. O. anterior.

⁶ Los Gobernadores de las Parcialidades de San Juan y Santiago, y demás Oficiales de República, sus adyacentes Pueblos y Barrios, a Matías de Gálvez, Virrey de Nueva España. Testimonio adjunto a la de Matías a José de Gálvez, en México a 24-I-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

Banco de San Carlos, porque «caben suficientemente en los caudales que residen en nuestras arcas, fuera de las cantidades que por superiores órdenes de V. E. se hallan depositadas en la Real Casa de Moneda».

La aplicación y distribución de los fondos era según el siguiente prorrateo: ⁷

De la Cabecera de San Juan	4.000 pesos
Del Pueblo de Yxtocalco	1.000 »
Del Pueblo de la Misiuca	1.000 »
Del Pueblo de Salinas	1.300 »
	<hr/>
	7.300 »
De la Cabecera de Santiago	8.000 »
Del pueblo de Xicotitlán	2.300 »
Del pueblo de Santa Ana Sacatlamalco	400 »
De Culhuacán	2.000 »
	<hr/>
	12.700 »

El total de las dos cantidades 7.300 y 12.700 pesos componían los 20.000 que se proveían para ser sacados de las arcas, y pasados al Real Consulado de México, como diputado para la remisión y percepción de los haberes que fueren concurriendo. Las comunidades, por boca de sus gobernadores, se comprometían a pagar de sus bien comunes el flete de tierra y mar, y los que devengara la entrada en Cádiz. Y a dicho efecto, y para no disminuir el íntegro importe de las 200 acciones del Banco Nacional, que deseaban suscribir, pedían se les informase de todos estos gastos para

⁷ Prorrateo de las cantidades que se sacan de las Parcialidades de San Juan y Santiago, y sus anejos Pueblos, para completar la de 20.000 pesos que se destinan al Banco Nacional de San Carlos. (A. G. I., Indiferente, 1850).

que siempre quedase íntegro el importe de las referidas acciones.

Matías de Gálvez ordenó⁸ se recibiesen los 20.000 pesos en las Cajas Reales, y que los Oficiales Reales de Veracruz los embarcasen en la primera ocasión, en buques de guerra que vinieran a España, para que fueran entregados en la Depositaria de Indias. Al propio tiempo, ordenaba «vinieran libres de derechos de Maestres y Fletes de Mar». Ello era como gracia a aquellos súbditos, y para ejemplo de los demás. En lo referente «al flete de tierra desde esta ciudad, se liquidará prontamente por estos Oficiales Reales».

Estos caudales, cuyo anuncio había sido hecho en enero de 1784, estaban en marzo del mismo año en Cádiz.⁹ Llegaron a bordo del navío de guerra San Felipe, registrados por los Oficiales Reales de Veracruz. Los Directores del Banco de San Carlos lo comunicaban a Don José de Gálvez a principios de septiembre del mismo año, diciendo que habían sido avisados por los Sres. Magon Leser Hermanos y Compañía, comisionados del Banco en Cádiz, que al propio tiempo pedían se les dijese, si, sobre dicha cantidad recaía la gracia de libertad de derechos, concedida por el Rey a los caudales de Indias para invertir en las acciones del Banco.

En la respuesta inmediata dada por el Rey,¹⁰ se con-

8 Testimonio adjunto a la de Matías a José de Gálvez, en México a 24-I-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

Decreto de Matías de Gálvez, en México a 8-XI-1783. (A. G. I., Indiferente 1850).

Los Oficiales Reales de Veracruz a Matías de Gálvez, en México a 19-XI-1783. (A. G. I., Indiferente 1850).

9 Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 3-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1850). "en ningún caso dispondremos que se llenen las acciones sin la correspondiente y positiva noticia de los términos en que se ha de verificar".

10 R. O. a los Directores del Banco Nacional, en San Ildefonso a 8-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

En la misma fecha al Virrey de Nueva España.

En 21-V-1784 al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz.

La Audiencia Gobernadora de México (por muerte de Matías de Gálvez) a José de Gálvez, en México a 27-XII-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

cedía a «este caudal por gracia especial libertad de flete y contado de derechos». Pocos días después se comunicaba a México el número de las acciones de las Parcialidades de San Juan y Santiago.¹¹

El representante de estas Parcialidades de Indios de San Juan y Santiago, que lo sería de todos los pueblos de Nueva España, fue Don Melchor Gaspar de Jovellanos,¹² Consejero de Ordenes a la sazón, y con potestad bastante para votar en las Juntas, representar las acciones, cobrar y recaudar las utilidades, sustituir y revocar sustitutos, etc.

En los comienzos de 1786, Jovellanos daba cuenta al Marqués de Sonora¹³ de haber recibido un oficio de los Directores del Banco Nacional, adjuntándole un plan, en el cual:

1.º—Se le informaba del caudal impuesto por los pueblos de indios, y el número de acciones que a cada uno pertenecían.

2.º—Se le informaba también que dispondrían el pago de los picos resultantes de reducir los capitales a acciones, significándole que si quería completar una acción cada uno, supliendo lo que faltaba hasta su importe del producto del actual dividendo, se podía hacer sin inconveniente.

3.º—Se acompañaba un estado, demostrativo del producto perteneciente a las comunidades de San Juan y Santiago, que por haber enviado antes sus caudales participa-

11 Los Directores del Banco Nacional a la Audiencia Gobernadora de México, en Madrid a 25-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1850). Las 200 acciones del Banco Nacional de San Carlos pertenecientes a las Parcialidades de Indios de San Juan y Santiago comprenden en su numeración del 73.095 al 73.294, ambos inclusive.

12 La Audiencia Gobernadora de México a José de Gálvez, en México a 27-III-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

“Poder cumplido, amplio, bastante, cual se requiera sea necesario, mas pueda y deba valer al Señor Don Gaspar de Jovellanos, caballero del Orden de Alcántara, del Consejo de S. M. en la Real de Ordenes, para que pueda votar en las Juntas del Banco, representar y tener derecho a todo lo demás que le corresponda, cobrar y recaudar las utilidades que les toquen, sustituir en la persona que quisiere, revocar sustitutos, etc.”

13 Jovellanos al Marqués de Sonora, en Madrid a 30-I-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

ron de los dividendos de 1784 y 1785, cuyo importe libraría el Banco sobre la Caja de Cádiz.

4.º—Finalmente se anunciaba que presentaría el estado de las demás acciones de los pueblos, cuando se llenaran, con el producto del dividendo de 1785.

Sonora dio cuenta a los Directores del Banco Nacional ¹⁴ de la anterior, y ordenó se librara a la Caja de Cádiz el importe de las acciones de San Juan y Santiago, para que en ella les fuese abonada sin el descuento correspondiente. Los Directores acusaron recibo de la anterior, ¹⁵ anunciando se habían «expedido los libramientos correspondientes a dichas parcialidades de San Juan y Santiago, con separación de los intereses devengados a favor de ellas en 1784 y 1785, que en todo ascienden a 61.355 reales y 19 maravedises de vellón líquidos». Pocos días después, Don Rafael de Orta, ¹⁶ Presidente de la Real Audiencia de Contratación de Cádiz, daba cuenta al Marqués de Sonora de tener a su disposición la cantidad antes indicada, correspondiente a los dividendos de los dichos años 1784 y 1785.

Esta noticia fue dada a conocer por Jovellanos a Sonora ¹⁷ al propio tiempo que le comunicaba que en ese día le habían entregado en la Secretaría del Despacho de Indias 19 acciones, que por su orden se llenaron para otras varias comunidades con los picos resultantes de las principales imposiciones, y los suplementos que sobre ellos se hicieron del producto de sus réditos en el dividendo del año anterior.

¹⁴ Sonora a los Directores del Banco Nacional, en el Pardo a 3-IV-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

Y para que vean los indios la liberalidad de S. M. pide que el Banco le pase cuenta o nota del total de las imposiciones, número de acciones, expresión de gastos respectivos, gastos de conducción de Veracruz a Cádiz, etc. Que los picos sobrantes se reduzcan a acciones.

Sonora a Jovellanos, en el Pardo a 3-IV-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

¹⁵ Los Directores del Banco Nacional a Sonora, en Madrid a 15-IV-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

¹⁶ Jovellanos a Sonora, en Madrid a 3-V-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

Los dividendos de las Parcialidades de San Juan y Santiago correspondientes a 1784 y 1785 ascendían a 61.355 reales y 19 maravedises.

¹⁷ Ibid.

Daba cuenta también Jovellanos de la existencia en el Banco del producto del mismo dividendo de 114.461 reales y 1 maravedí, pertenecientes a las mismas comunidades, estando disponibles para el oportuno libramiento, si el Ministro lo expedía.

Finalmente, se refería la comunicación, a que D. Juan Agustín Cean Bermúdez, que él había nombrado —a consecuencia de lo que le previno el Ministro en 16 de agosto de 1785 para entender en estas diligencias—, había practicado las necesarias con la mayor exactitud. Así parece ocurrió en efecto, pues por la actuación de Cean Bermúdez, como comisionado de Jovellanos,¹⁸ parece que aquél lo hacía todo. De ello dio cuenta detallada el propio comisionado, destacando la imposición que se había hecho posteriormente en acciones de la Compañía de Filipinas. Como en la mayoría de los casos solía ocurrir, acompañaba Cean Bermúdez una petición de sueldo anual, o gratificación, por no haber devengado interés en ninguna de estas funciones.

El Marqués de Sonora contestó a todos los puntos de la anterior comunicación de Jovellanos.¹⁹ Ordenaba en primer lugar, que de los 114.461 reales de los dividendos de los indios, se rebajaran 3.516, importe del 2 % de dicho líquido. Y que entregados en Cádiz los 61.355, pertenecientes a las Parcialidades de San Juan y Santiago, los restantes 110.945 reales de vellón se entregaran igualmente en la Caja de Descuentos de dicha ciudad.

Para recompensa de D. Juan Agustín Cean Bermúdez, nombrado para practicar las 19 parcialidades de indios, ordenaba se dedujera el 2 %, que eran 2.289 reales de vellón, y que los 1.227, correspondientes al 2 % de los 61.355 de las parcialidades de San Juan y Santiago, los percibiese con el mismo objeto Jovellanos. Dichas dos partidas sumaban los 3.516 reales que deducidos de los 114.461 daban los

¹⁸ Don Juan Agustín de Ceán Bermúdez, en Madrid a 19-IV-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

¹⁹ Sonora a Jovellanos, en Aranjuez a 12-V-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

110.945 que debían entregarse en la Depositaria de Caudales de Indias. Y que en lo sucesivo se siguiera deduciendo de los dividendos el dicho 2 % para que fuera percibido por Jovellanos.

En comunicación de la misma fecha de Sonora a los Directores del Banco,²⁰ les dice —tras repetir lo que antes vimos comunicó a Jovellanos— que los 114.461 reales de vellón eran el último repartimiento de 1785, correspondiente a las 1.124 acciones de 2.000 reales, pertenecientes a las Parcialidades de Indios. Las nuevas acciones de 2.500 reales corresponden a los picos sobrantes del caudal remitido por cada una de las diligencias respectivas a la imposición de estos caudales, y que el 2 % era 3.516 reales para Jovellanos.

Jovellanos envió inmediatamente a Cádiz 2 Letras a la Depositaria de Indias por un importe total de 172.300 reales y 20 maravedíes de vellón.²¹ Una de ellas en 18 de abril de 1786, por 61.355 reales y 19 maravedíes, correspondientes a los dividendos de las Parcialidades de San Juan y Santiago; la otra de 110.945 reales y 1 maravedí en 16 de mayo del mismo año. Orta pedía aclaración sobre si el cargo de dicho depósito, que se ordenaba, estaría como caudal de la Real Hacienda de Indias a disposición del Marqués de Sonora, o se había de formar por la Contaduría Principal de la Real Audiencia de la Contratación.

Una vez recibida por Sonora la anterior, dio cuenta al Virrey de Nueva España²² de tres Estados, en que se manifestaban:

1.º—Las utilidades correspondientes a 200 acciones de 2.000 reales de vellón, impuestas en el Banco por las Parcialidades de San Juan y Santiago, en los repartimientos

²⁰ Sonora a los Directores del Banco Nacional, en Aranjuez a 12-V-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

²¹ Juan Rafael de Orta a Sonora, en Cádiz a 23-V-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

²² Sonora al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 27-V-1786. (A. G. I., Indiferente 1850).

de 1784 y 1785. Las deducciones hechas, en los mismos términos que a los demás interesados, a más del 2 % de comisión, señalado por el Rey a Jovellanos, como Apoderado, sobre el líquido de cada repartimiento, quedando un residuo libre a favor de los expresados indios por un total de 60.128 reales y 19 maravedíes de vellón.

2.º—Las cantidades remitidas por cada uno de los pueblos que en él se individualizaban, con los gastos de conducción hasta Veracruz, el líquido de cada partida, y su inversión en acciones de a 2.000 reales de vellón en el Banco, los picos sobrantes de cada partida, y las utilidades que correspondían a cada pueblo en el repartimiento del año anterior. También se explicaba no haberse devuelto a los interesados los picos sobrantes, pues consultado su mayor beneficio, había dispuesto que con las utilidades se completase una acción más, de 2.500 reales a cada pueblo, que era el precio que en aquel momento tenían, y deducido también el 2 % de comisión de las utilidades libres, resultaba a favor de los expresados pueblos, 112.172 reales de vellón, como por menor se especificaba, cuya suma, y la anterior de los indios de San Juan y Santiago, se había puesto en la Depositaria General de Indias en Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto por la Real Orden de 28-VI-1785, se pagaría a los interesados por las Cajas Reales más inmediatas a los pueblos, con intervención del Fiscal Protector.

3.º—Manifestaba las acciones en que estaba interesado cada pueblo, y los números de ellas, que remitiría al Virrey con el correspondiente resguardo, para que se entregaran a las comunidades correspondientes y se archivaran con la debida custodia.

La respuesta a Sonora fue dada por la Audiencia Gobernadora de Nueva España,²³ cumpliendo con ello la de-

²³ La Audiencia Gobernadora a Sonora, en México a 25-I-1787. (A. G. I. Indiferente 1850).

Díaz-Trechuelo y López-Spínola, Lourdes; *La Real Compañía de Filipinas*, Sevilla, 1960, 445 fols. Original Mecanografiado Premiado por el Banco de España.

terminación del difunto Virrey, Conde de Gálvez. En dicha respuesta se daba cuenta de haber pasado al Fiscal de lo Civil en México, D. Lorenzo Hernández de Alba, la Real Orden de 28-VI-1785, referente a que los intereses correspondientes a las comunidades de indios, por resulta de las acciones impuestas de sus caudales en el Banco Nacional de San Carlos, se entregaran sin desfalco alguno en las Cajas Reales o Tesorerías del Reino. Y para que lograsen dicho beneficio, pedía que el Contador de Propios y Arbitrios informara lo que estimare conducente a su mejor ejecución y cumplimiento. Por cuerda separada, se pasó a dicho Contador el expediente formado en virtud de la Real Orden de 25-IX-1785 que prevenía «no se admitiesen más caudales de indios para imponer en el Banco, y si para hacerlo en la Real Compañía de Filipinas, y como él proponía, por menor, el arbitrio que le pareció más útil para la recaudación de las utilidades que en ella les correspondan, sin gravamen de los fondos de Comunidades».

El Contador se redujo a reproducir su informe «respecto a ser las reglas que propuso para la cobranza de los producto de la Real Compañía, adaptables a las de utilidades del mencionado Banco Nacional». Y el Fiscal, conociendo ser adaptables al asunto, pidió se diese cuenta al Rey para que resolviera lo conveniente.

Dicho expediente ²⁴ hacía referencia a «que no se admitieran en adelante más caudales de los Pueblos de Indios para imponer en el Banco Nacional de San Carlos, por no haber cabida en él para nuevas acciones: y que si quisiesen imponer sus fondos sobrantes lo ejecutaran en la Real Compañía de Filipinas». Por él se daba cuenta de haberse tratado de tres puntos relativos a aquel particular:

el 1.º «se contrajo a las cantidades en que podrán interesarse a las Repúblicas de los mismos Indios»;

²⁴ La Audiencia Gobernadora a Sonora, en México a 25-I-1787, núm. 119. (A. G. I., Indiferente 1850).

el 2.º «cómo se habían de enterar»;

el 3.º «acerca del método que debería establecerse para que aquéllas recaudasen a su tiempo las utilidades que las correspondiesen, y cuyo pago ha de hacerse precisamente en esta capital conforme al artículo 21 de la Real Cédula de erección».

En cuanto al punto 1.º, y no obstante que la Contaduría de Propios y Arbitrios opinó que las imposiciones debían ser proporcionales a los sobrantes que se hallaren en las Cajas Comunes, el Fiscal de lo Civil, Don Lorenzo Hernández de Alba juzgó no ser necesario se variase de las cantidades sobrantes para las necesidades que pudieran ocurrirles, y que se les habían asignado para imponer en el Banco. Se fundaba, en la reflexión de que aunque las acciones de la Real Compañía no importan lo mismo que las de aquél, está constante por varias reales órdenes, que sin embargo de la diferencia, muchas de las que se habían destinado por alguna de las jurisdicciones al Banco, se aplicaron a la Real Compañía.

Con respecto al 2.º punto, el propio Fiscal pidió se aprobase el método informado por el Real Tribunal del Consulado para las mencionadas imposiciones, conforme a las órdenes que tenía; reducido en sustancia a dar un recibo interino a los Oficiales o Justicias que hicieren los enteros, mientras llegaban las vitelas que remitía la Dirección de Madrid para entregarlas a ellos mismos.

En lo tocante al punto 3.º, la Contaduría expuso los graves inconvenientes que podían seguirse de que los indios, o los apoderados en su nombre, concurrieran a México a recaudar las utilidades, proponiendo para evitarlo que una vez liquidado «el legítimo haber de las Repúblicas, que comprenda cada jurisdicción en particular, con arreglo a las acciones que tengan en la referida Compañía, se ponga su importe en las Cajas Reales de esta Capital, y se pasen a los respectivos justicias notas individuales de lo que

hubiera tocado a cada una en el prorrateo. Que al propio tiempo se les acompañe orden, para que conforme a ellas, hagan inmediatamente los enteros en las solemnidades prescritas en las Arcas Comunes de los productos de la Renta de Tributos, recogiendo los correspondientes recibos, que deberán firmar los Gobernadores y Oficiales de República, para calificación de las partidas de Data por lo relativo a aquel Ramo, al cual se reintegrará con el caudal puesto en las Cajas de México, como perteneciente a las comunidades; y que encontrándose alguna dificultad en la ejecución por lo tocante a dicha Renta de Tributos, podría extenderse la providencia a los demás ramos de Alcabalas, Tabaco, Pólvora y Naipes, mediante que no hay provincia alguna en este Reino en que no se hallen establecidas Factorías y Administraciones, cuyos caudales se transportan igualmente a esta ciudad». Esta propuesta fue también considerada útil y conveniente por el Fiscal de lo Civil, que pidió se recomendase al Rey.

La respuesta real,²⁵ totalmente aprobatoria, era acorde con lo propuesto por la Contaduría, y que el Fiscal había ratificado.

Las utilidades de los caudales de las Parcialidades de Indios de Nueva España produjeron en 1786, 184.204 reales, 1 maravedí de vellón. El Presidente interino de la Contratación de Cádiz fue prevenido²⁶ de la aplicación que había de dar a dicha cantidad, y asimismo fue avisado el Virrey de Nueva España, para que ordenara se satisficiera a cada uno de los pueblos interesados el importe de sus respectivas acciones.

²⁵ R. O. al Virrey de Nueva España, en San Lorenzo a 25-X-1787. (A. G. I., Indiferente 1850).

²⁶ R. O. al Virrey de Nueva España, en El Pardo a 4-II-1787. (A. G. I., Indiferente, 1850).

El Arzobispo Virrey Alonso a Sonora, en México a 26-V-1787. (A. G. I., Indiferente 1850).

Jovellanos ²⁷ daba cuenta a Don Antonio Valdés —nuevo Ministro de Hacienda y Guerra—, ²⁸ que como apoderado de las Parcialidades de indios, sólo había cuidado de verificar y solemnizar las imposiciones de los caudales de las Parcialidades en el Banco Nacional, recaudar sus productos y pasarlos a la Depositaria de Cádiz. En este sentido había entregado en dicha Depositaria los dividendos de las Parcialidades de San Juan y Santiago de los años 1784 y 1785, y los de los demás pueblos de indios de 1785 y 1786. Y que en cuanto a la distribución de los productos entre los pueblos interesados, y la entrega efectiva de ellos, no era de su cargo, sino de la Secretaría de Indias, y que el método propuesto por la Audiencia Gobernadora de México y adoptado por el Ministerio, era a su juicio «el más sencillo, el más seguro, y el menos dispendioso para ellas mismas».

También Jovellanos remitía en 1788 ²⁸ 131.614 reales de vellón, que era la utilidad del año 1787, correspondiente a las acciones del Banco Nacional de 20 parcialidades de indios de Nueva España. Igual cantidad se repartía en 1789 ²⁹ por el dividendo de 1.343 acciones, correspondiente al año 1788 y que habían de ser las definitivas en cuanto al número.

²⁷ Jovellanos a Antonio Valdés, Ministro de Guerra y Hacienda, en Madrid a 4-IX-1787. (A. G. I., Indiferente 1850).

²⁸ Jovellanos a Valdés, en Madrid a 9-IV-1788. (A. G. I., Indiferente 1850).

R. O. al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 17-IV-1788. (A. G. I., Indiferente 1850).

Manuel Antonio Flórez, Virrey de Nueva España, a Valdés, en México a 27-VIII-1788. (A. G. I., Indiferente 1850).

²⁹ Jovellanos a Valdés, en Madrid a 4-V-1789. (A. G. I., Indiferente 1850).

R. O. al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 8-V-1789. (A. G. I., Indiferente 1850).

Manuel Antonio Flórez, Virrey de Nueva España, a Valdés, en México a 27-VIII-1789. (A. G. I., Indiferente 1850).

Suscripción de acciones por parte de otras Parcialidades:
Oaxaca, Tetela del Río, Tepexí de la Seda, Tentila, Zimatlán,
Teusitlán, Atempa, Chiouantla, Xutetelco, Atoluga, Pueblos
de Valladolid, Pueblos de Zamora y otras.

Poco tiempo después de la suscripción hecha por las Parcialidades de Santiago y San Juan, y quizás a ejemplo de ellas, o a instigación del Fiscal Posada, nuevas parcialidades de indígenas mexicanos acudieron a la suscripción de acciones del Banco Nacional de San Carlos.

Los primeros de que tenemos noticias son 63 pueblos de la Jurisdicción de Oaxaca, que en marzo de 1784, comunicaba Matías de Gálvez,³⁰ habían impuesto 19.025 pesos de los caudales de sus Arcas de Comunidad. El corregidor Don José Mariano de Llano había puesto ya en las Cajas Reales de Veracruz, 12.000 pesos para su embarque a España. Se estaba pendiente de la libranza de la restante cantidad que estaba pronta. Subrayaba el Virrey de México el celo del corregido Llano, así como reiteraba el de Ramón Posada, para que de ambos tuviera noticia el Monarca. Al propio tiempo adjuntaba el Poder de dichas parcialidades, otorgado también a favor de Jovellanos, y la distribución de los pesos en acciones correspondientes a cada uno de los 63 pueblos oaxaqueños.³¹

Pocos meses después, en julio del mismo año, el propio Don Matías daba cuenta a su hermano Don José, Ministro de Indias,³² de que en cumplimiento de «la orden que libré

³⁰ Matías de Gálvez a José de Gálvez, en México a 2-III-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez a Jovellanos, en San Ildefonso a 2-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez a Matías de Gálvez, en San Ildefonso a 2-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

³¹ Matías de Gálvez a José de Gálvez, en México a 2-III-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

³² Matías de Gálvez a José de Gálvez, en México a 14-VII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1850)

a varios justicias del Reino, para que extrajeran los caudales que existieran en las Cajas de Comunidades de los Pueblos de sus Jurisdicciones, a fin de imponerlos a rédito en el Banco Nacional de San Carlos», el Teniente de Alcalde Mayor de Tetela del Río Don José Nava le había remitido una libranza de 5.400 pesos, correspondientes a la extracción hecha en 11 pueblos de indios de aquella jurisdicción. Dicha libranza se cobraría por los Oficiales Reales de la capital al comerciante de México Don Pedro José de Berazueta, y su importe debería ser enviado en la primera ocasión a los Oficiales Reales de Veracruz, con destino a los Factores del Banco en Cádiz, para que fueran impuestos a nombre de las comunidades de dichos pueblos. La relación constaba en su Poder adjunto, también a favor de Jovellanos.

Fue Tepexí de la Seda la tercera jurisdicción, que ingresó 8.600 pesos en las Cajas Reales, procedentes de sus bienes de Comunidad,³³ para que fueron impuestos en acciones del Banco Nacional. También apoderó a Jovellanos. Al comunicar la nueva aportación, el Virrey destacaba «la eficacia y buen modo con que el Alcalde Mayor Don Antonio Molina desempeñó el asunto».

Posteriormente, en el año 1785, se embarcaron en Veracruz 9.000 pesos, procedentes de los pueblos de indios de la jurisdicción de Tentila, por obra de su Alcalde Mayor Don Narciso Muñiz,³⁴ y con idéntica finalidad que los cau-

José de Gálvez a Jovellanos, en el El Pardo a 12-I-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez al Virrey de Nueva España, en el Pardo a 12-I-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

³³ Matías de Gálvez a José de Gálvez, en México a 27-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez a Jovellanos, en el Pardo a 15-I-1785. (A.G.I., Indiferente 1850).

José de Gálvez al Virrey de Nueva España, en el Pardo a 15-I-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

³⁴ Los Oficiales Reales de Veracruz a José de Gálvez, en México a 18-III-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en San Ildefonso a 26-VII-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

dales anteriores. En este mismo año, la Audiencia Gobernadora comunicaba al Ministro de Indias ³⁵ que «previo consentimiento de los Indios de los Pueblos de Zimatlán», su Alcalde Mayor Don Ildefonso Sánchez Solache, había extraído de las arcas de comunidad 16.700 pesos para su imposición en el Banco de San Carlos. Deducidos los gastos de fletes, cajones, etc., se habían recibido 16.497 pesos, 3 tomines en las Cajas de Veracruz, para que sus Oficiales Reales los remitiesen a la Factoría del Banco. Con la misma fecha, y en idéntico sentido, se anunciaba la imposición ³⁶ de 2.000 pesos correspondientes a los pueblos de Teusitlán, Atempa, Chionautla, Xuitetelco y Atoluca. El Corregidor de los pueblos de la ciudad de Valladolid Don Policarpo Dávila ³⁷ había extraído 1.500 pesos de las arcas de los pueblos de Zinzunsan, Puruaíndaro, Tacambaro, Capula, Taziquaro, Ouanaxo, Paragaricutiro y Yingambato, después de haber «dado a entender a los indios de los pueblos de la misma, las ventajas que tendrían en la imposición de sus caudales en el Banco Nacional de San Carlos».

Poco después, los pueblos de la Villa de Zamora, en la jurisdicción de Maravatío, ³⁸ imponían en las Cajas Reales

³⁵ La Audiencia Gobernadora de Nueva España a José de Gálvez, en México a 27-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez a los Directores del Giro del Banco Nacional, en San Ildefonso a 1-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez a Jovellanos, en San Ildefonso a 1-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 2-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

³⁶ La Audiencia Gobernadora de Nueva España a José de Gálvez, en México a 27-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

R. O. a los Directores del Giro del Banco Nacional, en San Ildefonso a 1-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

Jovellanos a José de Gálvez, en Madrid a 4-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

³⁷ La Audiencia Gobernadora a José de Gálvez, en México a 27-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

R. O. al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 2-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

³⁸ La Audiencia Gobernadora a José de Gálvez, en México a 10-VI-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

de México, para su envío a Veracruz y embarque desde ésta a Cádiz, a la Factoría del Banco Nacional, 9.317 pesos, 4 tomines y 6 granos. Todos apoderaban a Jovellanos.

Los caudales procedentes de todas las jurisdicciones y pueblos referidos, cuyo importe total ascendía a 113.004 pesos, 2 tomines y 2 granos de plata doble, de la nueva estampa,³⁹ fueron embarcados en Veracruz, bajo partida

José de Gálvez a los Directores del Giro del Banco Nacional, en San Ildefonso a 26-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez a Jovellanos, en San Ildefonso a 26-IX-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Gálvez al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 26-IX-1785 (A. G. I., Indiferente 1850).

39 Francisco Antonio de Agudo, Juan Matías de Lacunza, José María Lasso, Oficiales Reales de Veracruz a José de Gálvez, en 17-III-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

- 18.987 pesos, 4 tomines, 2 granos; líquido de 19.025 pesos, deducido el flete de conducción a Veracruz, de los pueblos de la jurisdicción de Oaxaca.
- 8.582 pesos, 5 tomines, 8 granos; líquido de 8.600 pesos, de Tepexí de la Seda.
- 6.400 pesos O O de la Provincia de Huajuapala, agregado de Tonalá y Real de Minas de Zilacayuapa.
- 4.600 pesos O O de Santiago de Ometepepec, capital de la Provincia de Ygualapa correspondiente a 46 acciones.
- 7.558 pesos, 2 tomines, 10 granos; líquidos de 7.537 pesos, 4 tomines, bajado el flete, de las Cajas de Comunidad de la Ciudad de Querétaro, y Pueblo de San Juan del Río.
- 7.984 pesos O O líquidos de 8.000 pesos de las Cajas de la comunidad de la Jurisdicción de Mihaguatlan.
- 6.500 pesos O O entregados de Tentitlán del Camino Real, de 33 Cajas de Comunidad de otros tantos pueblos de su jurisdicción.
- 7.850 pesos O O remitidos por el Prior y Cónsules de México, correspondientes a las personas que se reseñan a continuación.
 - 1.150 pesos, a Don Pedro de Uzeta, natural de la Villa de Bernico (Alava), vecino de México.
 - 3.700 pesos a Don Antonio Villaurrutia y Salcedo, del Consejo de S. M., originario de Nueva España, y Oidor Decano de la Real Audiencia de México.
 - 2.000 pesos a D. Manuel Sánchez Navarro, nativo y vecino de Nueva Extremadura, provincia de Coahuila.
 - 1.000 pesos a doña María Micaela de Ortega y Escobedo, originaria de Puebla, y vecina del Pueblo de Hueitlaolpan.

68.462 p. 4 t. 8 g.

- 44.541 pesos, 5 tomines, 6 granos; líquido de 44. 630 pesos, 7 tomines. 6 granos de las jurisdicciones de:
 - 6.434 pesos. Jurisdicción de Tlasascalca.
 - 3.250 pesos. Jurisdicción de Acatlán.

de Registro en la Fragata Santa Rosalía, de acuerdo con la orden del Virrey Don Matías de Gálvez de 17-V-1784, y las de la Audiencia Gobernadora de 20-XII-1784 y 11-II-1785. En dicha cantidad se incluían también las partidas que no habían llegado a Veracruz el 16 de marzo, pero estaban de camino. Las de las Comunidades de Indios, incluidos los 20.000 pesos de las Parcialidades de San Juan y Santiago de México, que habían ido el año anterior en el navío de guerra San Felipe, alcanzaban a 167.539 pesos, 2 reales y 2 granos. Debían ser entregadas en Cádiz a los Factores del Banco Nacional, a disposición de los Directores en ejercicio, y para su imposición en el mismo.

La Audiencia Gobernadora ⁴⁰ exponía a José de Gálvez que con las providencias tomadas por el Fiscal Posada, aprobadas por Real Orden de 14-V-1784, sólo dos vecinos de Veracruz habían impuesto 500 pesos cada uno, y otros dos de México, habían concurrido a aquel Consulado con 10.000 pesos para su imposición en el Banco Nacional de San Carlos.

Con posterioridad se remitió a los Ayuntamientos, y publicó en la Gaceta, un resumen de los ejemplares impresos de la 2.ª Junta General de Accionistas. Y finalmente se pidió pasase al Contador de Propios el impreso de las acciones suscritas por los distintos pueblos de la Península, los

7.303 pesos, 3 tomines, 6 granos. Jurisdicción de San Juan Sitaguaro.
 3.152 pesos, 2 tomines. Jurisdicción de Tasco.
 6.600 pesos. Jurisdicción de Sacatlán de las Manzanas.
 5.400 pesos. Jurisdicción de Tetela del Río.
 2.900 pesos. Jurisdicción de Ystepexí.
 1.700 pesos. Jurisdicción de Orizaba.
 4.886 pesos, 2 tomines. Jurisdicción de Xiquilpán.
 3.000 pesos. Jurisdicción de San Luis de Potosí.

113.004 pesos, 2 tomines, 2 granos.

Ramón de Posada a José de Gálvez, en México a 27-III-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

40 La Audiencia Gobernadora a José de Gálvez, en México a 22-III-1785, núm. 299. (A. G. I., Indiferente, 1850).

R. O. al Virrey de Nueva España, en Madrid a 6-VII-785.

derechos que debían pagar aquellos caudales, y que los Oficiales Reales de México y Veracruz debían llevar un libro separado de entradas y salidas de aquellos caudales para poder dar razón de ellos.

Dicho Contador de Propios había propuesto como medio de simplificar las operaciones, que los Alcaldes Mayores remitiesen razón de lo que extrajesen de cada pueblo, y de lo que quedase en sus arcas.

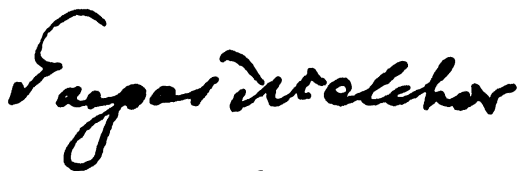
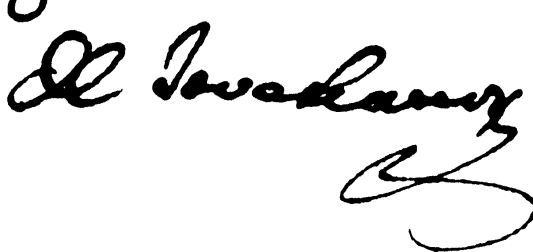
Al propio tiempo se enviaba relación de los poderes otorgados por doce jurisdicciones a favor de Don Melchor Gaspar de Jovellanos, así como de haberse anunciado al Conductor de Platas, pudiese en camino para Veracruz 92.295 pesos, 7 reales, 6 granos.

La distribución de esta cantidad, y los nombres de las dichas 12 jurisdicciones es el que sigue:

	PESOS	REALES	GRANOS
Tepexí de la Seda	8.600,	0,	0,
Oaxaca	19.025,	0,	0,
Tlasasalca (Tlaxcala?)	6.434,	0,	0,
Acatlán	3.250,	0,	0,
San Juan de Zitacuaro o			
Maravatío	7.302,	3,	6,
Tasco	3.158,	2,	0,
Zacatlán de las Manzanas	6.600,	0,	0,
Tetela del Río	5.400,	0,	0,
Ixtepexi	2.900,	0,	0,
Orizaba	1.700,	0,	0,
Giquilpan	4.886,	2,	0,
San Luis Potosí	3.000,	0,	0,
Parcialidades de S. Juan			
y Santiago	20.040,	0,	0,
	92.295,	7,	6,

José de Gálvez⁴¹ recibió la comunicación de Ramón Posada de 27-III-1785, con el anuncio de los caudales enviados en la fragata Santa Rosalía, y los poderes para Jovellanos, que fueron remitidos a éste. Pero en aquel momento todavía no habían llegado los anunciados caudales.

Jovellanos recibió los poderes antes indicados,⁴² y al tener también noticia de los envíos efectuados en la fragata Santa Rosalía, pidió información por menor de las cantidades ya enviadas, correspondientes a cada una de las parcialidades, y de las que en el futuro se fueran enviando, para recoger las oportunas y correspondientes acciones que representaba. Finalmente, y como estaba determinado que los réditos de las comunidades de indios debían pagarse en las Cajas o Tesorerías de América, poniéndolas en el Banco de Cádiz, a disposición del Rey a dicho efecto, pedía también se le comunicase al final de cada año la nota del dividendo correspondiente a cada Comunidad, para pasarla al Ministro de Indias, y que éste efectuase los oportunos pagos.

⁴¹ José de Gálvez a los Directores del Banco Nacional, en Aranjuez a 27-VI-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

José de Gálvez a Jovellanos, en Aranjuez a 27-VI-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

⁴² Jovellanos (firma autógrafa que se reproduce) a José de Gálvez, en Madrid a 5-VII-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

Los Poderes que obran en su poder son de Querétaro, San Juan del Río, Miahuatlán, Ynreguaro y Chilchota, Acatlán, Citaquaro, Tascó, Zacatlán, Ixtexpi, Orizaba, Xiquilpán, San Luis de Potosí.

Jovellanos a los Directores del Banco Nacional, en Madrid a 6-VII-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

Jovellanos⁴³ se quejaba del desorden con que se le enviaban los poderes y noticias de los caudales, así como el retraso de éstos en llegar a sus manos, y para evitarlo proponía:

- 1.º Que el Ministro de Indias dispusiera por medio del Virrey de Nueva España o de los Jefes de las Comunidades Propietarias de los capitales impuestos, se le pasasen avisos de la cantidad que cada una hubiese remitido al Banco, y de las órdenes correspondientes al uso de los poderes que le hubiesen conferido.
- 2.º Que los avisos fueran por mano del Ministro de Indias para evitar dispendios, y las contingencias del Correo.
- 3.º Que el Ministro de Indias determinara si las acciones de las Comunidades se habían de remitir a los Archivos de éstas, como se había hecho de las impuestas por los pueblos de España, o quedarían en el mismo Banco, librándoles certificados por su Secretaría, como se hacía por lo general en los referentes a vínculos, patronatos, y obras pías.
- 4.º Que respecto a haber ordenado el Rey que los réditos correspondientes a las acciones de dichas comunidades se paguen en sus respectivas tesorerías o cajas, él entendía que su obligación se reducía a recoger anualmente del Banco la nota del repartimiento hecho a cada parcialidad para dirigirla al Ministro de Indias.
- 5.º Que para el mejor desempeño de las obligaciones de Jovellanos, y en caso de que hubiera gestiones no compatibles con sus obligaciones, pedía autorización para nombrar a una persona que actuara en su nombre, y bajo su dirección.

La respuesta real fue tajante, y en su casi totalidad se

⁴³ Jovellanos a José de Gálvez, en Madrid a 6-VII-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

avenía a lo propuesto por Jovellanos.⁴⁴ La cobranza de los intereses de las acciones se haría en las respectivas Cajas o Tesorerías Reales, remitiéndose el original de las acciones para que se conservaran en sus respectivos archivos. Esto se haría a medida que Jovellanos las fuera remitiendo a José de Gálvez, pero para mayor claridad y prontitud se pedía a las Comunidades remitieran al apoderado relación puntual y precisa de los caudales aportados por cada uno, a fin de que no hubiera duda de los correspondientes al líquido impuesto por cada una de ellas. Con respecto al reparto de los dividendos anuales, se avenía también a lo propuesto por Jovellanos, e igualmente se le autorizaba para que pudiera «nombrar y conferir las facultades necesarias a la persona que fuese de su confianza y satisfacción» para desempeñar las diligencias incompatibles en aquellas circunstancias con sus ocupaciones.

Pocos meses después, los Directores del Giro del Banco de San Carlos⁴⁵ consultaban al Ministro de Indias si los caudales de las parcialidades de indios, venidos en la fragata Santa Rosalía, gozarían como los de las Parcialidades de San Juan y Santiago «libertad de flete y contado, como de Derechos». Ya a éstos les había rebajado el «flete, contado y almacenaje», pero pedían información sobre esta circunstancia, si había de tener efecto, «antes de destinar las acciones, a fin de evitar innovación en los asientos y en la aplicación de aquéllas». La respuesta Real autorizaba⁴⁶ la exención de fletes y derechos «pero no de almacena-

44 Extracto del Ministro de Indias al Director del Banco (?), a 24-VIII-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

R. O. al Virrey de México, en San Ildefonso a 26-VIII-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

R. O. a Jovellanos, en San Ildefonso a 26-VIII-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

45 Los Directores del Giro del Banco Nacional a Sonora, en Madrid a 2-IX-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

46 R. O. a los Directores del Banco Nacional y Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en San Ildefonso a 3-IX-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

R. O. al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 22-IX-1785. (A. G. I., Indiferente, 1850).

do y contado, por pertenecer al Consulado y al Maestre de Plata».

En 20 de mayo de 1786⁴⁷ Jovellanos daba cuenta a Sonora de haber remitido a D. Juan Rafael de Orta, Depositario de los Caudales de Indias en Cádiz, una letra por 110.945 reales y 1 maravedí de vellón, que con los 3.516 reales del 2 % abonados de comisión, sumaban los 114.461 reales del dividendo del año anterior de los pueblos de indios. Y añadía que estaba prevenido que las cantidades que fueran viniendo se colocaran en la Compañía de Filipinas, si no tenían cabida en el Banco, y representaba «que corriendo las acciones de éste en el día a 2.500 reales cada una, aun cuando le tengan, convendría referir por punto general la imposición de acciones de Filipinas, que ciertamente no ofrecen menores esperanzas de utilidad». La respuesta fue favorable a este punto de la inversión de acciones de la Compañía de Filipinas. De un lado por el aumento del 25 % en la cotización que en aquel momento tenían las acciones del Banco Nacional, y además, y esto es muy importante, «no ofrecen menores esperanzas de utilidad la Compañía, lo que prevengo a V. S. de su Real Orden para su inteligencia».

En la misma fecha⁴⁸ el propio Jovellanos pasaba a Sonora unos planes con sus duplicados, y agradecía al Rey la asignación del 2 % de los dividendos de las acciones de los pueblos de indios, para recompensar a su representante Don Juan Agustín Cean Bermúdez.

Dichos planes hacían referencia:

1.º A las utilidades de los pueblos de San Juan y Santiago en 1784 y 1785.

47 Jovellanos a Sonora, en Madrid a 20-V-1786. (A. G. I., Indiferente, 1850).

Sonora a Jovellanos, en Aranjuez a 27-V-1786. (A. G. I., Indiferente, 1850).

Jovellanos a Sonora, en Madrid a 30-V-1786. (A. G. I., Indiferente, 1850).

48 Jovellanos a Sonora, en Madrid a 20-V-1786. (A. G. I., Indiferente, 1850).

Sonora a Jovellanos, en Aranjuez a 31-V-1786. (A. G. I., Indiferente, 1850).

2.º A las nuevas imposiciones de otros pueblos, y a lo que les había correspondido en el último dividendo.

3.º A las acciones de cada pueblo y su número, y a las copias o duplicados que remitiría al Virrey de Nueva España para que vean los indios no sólo las ventajas logradas en cuanto a las utilidades, sino en la exención de los derechos, y que se pague a los interesados sus respectivos contingentes por las Cajas Reales más inmediatas a los pueblos. Las acciones, no obstante lo dispuesto, había estimado el Rey, para evitar cualquier contingencia o extravío, quedarán archivadas en el Banco, librán­doles la Secretaría de éste los respectivos certificados, como se hacía con las acciones pertenecientes a vínculos, patronatos y obras pías, devolviéndose por ello a Jovellanos las acciones, para que las pasase al Banco, para su archivo, y recoger los oportunos certificados.

Suscripciones de acciones por particulares en México:

López Dóriga y el Marqués de Cruillas

El primer suscriptor particular de acciones del Banco Nacional en América, de que hay noticias en este expediente, Don Antonio López Dóriga, de Oviedo, dio un libramiento de 1.600 pesos fuertes sobre la Habana,⁴⁹ importe de doce acciones. Los Directores del Banco Nacional consideraron el mejor medio de cobrar dicha partida, encargarlo al Administrador de Correos de la Habana. Para ello remitieron a Don José de Gálvez una carta y libramiento, dirigido al referido Administrador, rogándole siguiera las normas establecidas para las suscripciones en Indias, y para la recaudación y remesa a Europa de la citada partida. Pedían al propio tiempo, al Ministro de Indias, las disposiciones adoptadas para las suscripciones indianas. Consul-

⁴⁹ Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 22-V-1783. (A. G. I., Indiferente, 1849).

tados estos extremos,⁵⁰ se les recordó la Real Cédula de 26 de marzo de 1783, en virtud de la cual el importe de las acciones debería ser recibido por el Prior y Cónsules en México y Lima, y donde no hubiera Consulado, por los Intendentes y Oficiales Reales, respectivamente. Además se hacía ver que la letra estaba admitida en el Banco, por el propio Cabarrús, y endosada por sus Directores a favor del Administrador Onís. Sugeriase asimismo que éste podría encargarse de la cobranza, entregando su importe al Intendente, pero al final parece que se acordó que le entrega se hiciera en la Tesorería de la Habana. Enterados Francisco Cabarrús y Juan Bautista Rodríguez, Directores del Banco Nacional,⁵¹ de los beneficios que la resolución anterior llevaba aparejados para el Banco, agradecieron personalmente a José de Gálvez su «celo y buenas intenciones», «esperando continuara en franquear a este establecimiento su protección tan necesaria para su fomento y prosperidad».

Raimundo de Onís, Administrador de la Renta de Correos de la Habana, depositó en la Tesorería General de la misma, los 1.600 pesos producidos por la letra que le habían endosado los Directores del Banco Nacional.⁵² El Tesorero Don Ignacio Peñalver y Cárdenas, le había otorgado recibo por triplicado, y Juan Ignacio de Urriza, Intendente de Ejército de la Habana se comprometía a enviar dicho caudal en el primer Registro de Plata que saliera para Cádiz. Anunciaba Urriza, al propio tiempo, una libranza por

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Francisco de Cabarrús y Juan Bautista (sic) Rodríguez (sic), Directores del Banco Nacional de San Carlos, a José de Gálvez, en Madrid a 7-VI-1783. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁵² Juan Ignacio de Urriza, Intendente del Ejército de La Habana, a José de Gálvez, en La Habana a 10-VIII-1783. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Raimundo de Onís, Administrador de Correos de La Habana, a José de Gálvez, en La Habana a 13-VIII-1783. (A. G. I., Indiferente, 1849).

600 pesos,⁵³ dado por el propio José de Gálvez,⁵⁴ y a su cargo, a favor del Marqués de Cruillas, Capitán del Regimiento de Zamora, para que remitiese dicha cantidad al Banco, en ocasión segura. Los Directores del Banco estaban enterados de que ambas cantidades se hallaban en poder del Intendente de la Habana, y pedían a José de Gálvez, probablemente por la impaciencia del tiempo transcurrido sin que llegaran, si tenía conocimiento de los correspondientes Maestros a quienes se había conñado su conducción. La respuesta del Ministro de Indias era negativa.⁵⁵ En vista de ello debieron preguntarle al Intendente de Ejército de la Habana,⁵⁶ quien a fines de 1784 les anunciaba que los 2.200 pesos se habían embarcado por tercias partes en la fragata de guerra Santa Clara, navío Septentrión, y fragata Loreto, capitana, almirante y patache, respectivamente, que habían salido de la Habana al mando del Capitán de Navío Don Fernando Angulo. Así lo había participado al Presidente de la Contratación de Cádiz, Don Francisco Manxón, en 2 de enero de 1784, incluyéndole tres testimonios de Partidas de Registro, para que dispusiese el desembarco y recibo del caudal, y lo comunicase a Don José de Gálvez, encargándole, que como podía verse por su gestión, no había tenido demora por su parte.

Pedían en la misma los Directores del Giro⁵⁷ se expidieran las órdenes oportunas para que el Presidente de la Contratación entregara a los Sres. Magon y Leser Hermanos y Compañía, comisionados del Banco, la referida partida

53 Juan Ignacio de Uriza, Intendente de Ejército de La Habana, a José de Gálvez, en La Habana a 10-IX-1783. (A. G. I., Indiferente, 1849).

54 José de Toro y Pedro Bernardo Casamayor, Directores en ejercicio del Banco Nacional, a José de Gálvez, en Madrid a 12-VII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

El capitán era hijo del Virrey de México, Marqués de Cruillas.

55 R. O. a los Directores del Banco Nacional, en San Ildefonso a 31-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

56 Los Directores del Giro del Banco Nacional, Pedro de Casamayor y Antonio Galaborti, a José de Gálvez, en Madrid a 7-I-1785. (A. G. I., Indiferente, 1849).

57 Ibid.

de 1.600 pesos fuertes, o su líquido. En este sentido se dictó una Real Orden,⁵⁸ contestando Bartolomé Orta, Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, que se declarara⁵⁹ a quién pertenecían los 2.200 pesos de que se hablaba, y si eran los 2.200 pesos fuertes que se providenciaba, fueran entregados, y si se les habían de exigir los Reales Derechos y Fletes que parecía corresponderles. Finalmente una Real Orden, aclaraba⁶⁰ la distribución de los 2.200 pesos fuertes: 1.600 correspondientes a López Dóriga, y 600 al Marqués de Cruillas, y mandaba su inmediata entrega a los comisionados del Banco en Cádiz.

**Suscripción de acciones por D. Matías de Gálvez
y otras personas de México y La Habana**

Don Matías de Gálvez, Virrey de Nueva España,⁶¹ «para dar un testimonio público de la eficacia con que procuro el fomento de este importante establecimiento, remito a V. S. de mi caudal 52.000 pesos, por mano de Don Pedro de Vértiz, según consta del documento que es adjunto, de los que V. S. me dará recibo en forma, y a su tiempo las acciones; siendo mi ánimo se pongan en el Banco 50.000 pesos fuertes, y que si hubiere sobrante, se devuelva en Cádiz a mis Apoderados, Don Jacobo y Don Eduardo Gough». Para mayor publicidad y ejemplaridad de su actitud, ordenó su publicación en la Gaceta del Virreinato,⁶² con idea de que

⁵⁸ R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en El Pardo a 12-I-1785. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁵⁹ Bartolomé Ortega a José de Gálvez, en Cádiz a 21-I-1785. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁶⁰ R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en El Pardo a 25-I-1785. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁶¹ Matías de Gálvez, al Real Tribunal del Consulado, en México a 21-I-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁶² Matías de Gálvez a José de Gálvez, en México a 1-II-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

R. C. al Virrey de México, en Aranjuez a 14-V-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

el público se animara a tomar parte en el nuevo establecimiento bancario.

Probablemente, fue con motivo de esta suscripción, hecha por el propio Virrey, por lo que el Real Consulado de México comunicó unas reglas dadas por el propio Don Matías de Gálvez a la Dirección de Caudales, para su conducción hasta el Banco en la península.⁶³ Eran éstas:

- 1.ª Las cantidades objeto de la imposición las pondría el Consulado en poder del Conductor de Platas, el cual las debía entregar a los Oficiales Reales de Veracruz, y éstos para liberar a los dueños de pagar la comisión de recibo y embarque, las dirigirían, bajo partida de registro, a los factores del Banco de Cádiz.
- 2.ª En dicha partida de registro se debía consignar el nombre del accionista, por cuya cuenta y riesgo navegasen los caudales, y el destino, para la franquicia de derechos, haciéndose igual especificación en los conocimientos.
- 3.ª El Consulado, al recibir los caudales, se obligaba a dirigirlos al Banco, otorgando en este sentido una obligación que quedaba cancelada al entregar la acción al interesado. Hacía al final referencia a la imposición de 50.000 pesos fuertes por parte de Matías de Gálvez, que habían sido remitidos a los Oficiales Reales de Veracruz, para que fueran embarcados en el navío San Felipe, al propio tiempo que se pedía al Banco la remisión de las correspondientes acciones.

Con la misma fecha, los Oficiales Reales de Veracruz⁶⁴

63 El Consulado de México a los Directores del Banco Nacional, en Veracruz a 22-IV-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

64 Francisco Antonio de Agudo, Juan Matías de Lacunza, José María Lasso, Oficiales Reales de Veracruz, a José de Gálvez, en 22-IV-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Don Lucas de Gálvez fue en 1788 Intendente de Yucatán, y en 1789 fue nom-

anunciaban haber embarcado en dicho navío de guerra, que salía para Cádiz con tesoro y frutos preciosos del Rey y del comercio, 62.000 pesos consignados a los Factores de la Casa del Banco Nacional de San Carlos. El Comandante del navío era el Capitán de igual clase Don Lucas Gálvez, y el caudal iba en poder del Maestre de Plata y Permisión, Don Pedro del Puerto Vicario.

La distribución de los 62.000 pesos era la siguiente:

- 1.º 52.000 pesos en oro, que remitía de su propio caudal el Virrey de Nueva España, Don Matías de Gálvez, para que 50.000 pesos fuertes fueran introducidos en el Banco y el sobrante, si resultaba, se entregara a sus apoderados Don Jacobo y Don Eduardo Gough en Cádiz.
- 2.º 10.000 pesos en plata de doble cuño, correspondientes por mitad a Don Juan Francisco de Aldunzín y Don Juan Antonio de Guruceaga, compañeros, que los entregaron con el mismo objeto, comprometiéndose en primer lugar a satisfacer allí los fletes y demás gastos que se causaran. Vemos que lo que especialmente interesaba en este caso era que los 10.000 pesos habían de imponerse íntegros,⁶⁵ y los fletes de mar y tierra y demás costes se pondrían en Cádiz por los interesados, o sus representantes. Estos eran Don Rafael Vicario Iñigo, y en su ausencia Don Miguel de Esparza, conforme a la orden que ambos tenían anticipadas.

Por Real Orden,⁶⁶ se dio a conocer la llegada a Cádiz

brado Gobernador y Capitán General de aquella península, alcanzando en 1791 el grado de Brigadier. Murió en Mérida víctima de una agestión.

Molina Solís, Juan Francisco: *Historia de Yucatán durante la dominación española*. Tomo III. Mérida, 1913, págs. 303-320.

65 Francisco de la Rivera, Marqués de Rivas Cacheo y Francisco Antonio de Ravago, Prior y Cónsules del Real Consulado de México, en 13-II-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

66 R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en San Ildefonso a 4-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

R. O. a D. Jacobo y D. Eduardo Gough de Cádiz, en San Ildefonso a 4-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

del navío San Felipe, llevando los 62.000 pesos, con la distribución antes indicada, y ordenándose al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, se entregaran los 60.000 pesos a Magon Leser Hermanos y Compañía, comisionados del Banco, «pagando los interesados, o quienes los representan, los derechos y fletes según está prevenido por punto general para los españoles europeos, con la inteligencia de que lo que faltare para cubrir los gastos sobre los 2.000 pesos remitidos a este efecto por dicho Virrey, lo entregara puntualmente la casa de Gough, en esa ciudad a quien lo avisó». Es interesante consignar aquí, cómo se establece, que los fletes y derechos se pagarían en atención a la condición de españoles europeos de los suscriptores. En este sentido, incluso José de Gálvez, ordena por su cuenta a la casa Gough que supla por encima de los 2.000 pesos, si es que no alcanza la cantidad prevista por su hermano Don Matías. Debíó ser un cambio de concepto en la condición jurídica y exención de derechos exigibles a los imponentes puesto que, no obstante reconocerse ser Aldunzín y Guruceaga, residentes en México, y el Virrey Don Matías haber previsto si había algún sobrante de sus 52.000 pesos se entregara a la casa Gough, José de Gálvez al hacer la interpretación, dice que la casa Gough suplirá lo que falte en concepto de derechos, gastos y fletes debidos. En este momento, y al recibirse la Real Orden anterior en Cádiz,⁶⁷ el poder de la

67 Bartolomé Ortega, Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, a José de Gálvez, en 13-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Pedro Domecq, Por poder de los Sres. Gough, en Cádiz a 13-VIII-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849). Firma autógrafa de Pedro Domecq en 1784.

casa Gough en dicha ciudad lo tenía Don Pedro Domecq.

Por Boer celos^{re} Gough -
Pedro Domecq

Poco después de la Real Orden anterior, Don Diego Paniagua, Agente del Número de Indias, hacía presente a José de Gálvez ⁶⁸ «que habiendo sustituido el Excmo. Sr. Conde de Gálvez, el poder que tenía del Excmo. Sr. D. Matías de Gálvez, su padre, para la imposición de 50.000 pesos fuertes en el Banco Nacional de San Carlos, y teniendo noticia de haber llegado esta cantidad, ocurrió a los Directores, solicitando se le entregasen las correspondientes acciones, a lo que se excusaron, con motivo de cierta obligación constituida por los Oficiales Reales de México, en quienes se depositó la competente cantidad, y se obligaron a entregar las respectivas acciones a dicho Excmo. Sr. D. Matías, en cuya atención, y no pareciendo regulares se expongan dichas acciones a las contingencias de una dilatada navegación, y otros inconvenientes; suplica a V. E. se sirva pasar la orden correspondiente a los Directores del Banco, para que dejando depositadas dichas acciones en él, como la practican con otras, remitan por duplicado la certifica-

⁶⁸ Don Diego Paniagua, Agente de Número de Indias, a José de Gálvez, en Madrid a 7-IX-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

ción correspondiente a los Oficiales Reales de México, para solvencia de su obligación, entregándole otra igual por triplicado al exponente, para mayor resguardo de su principal en que están convenidos y recibirá merced».

Es curioso el giro que se le dá al destino de estas acciones que acaba de suscribir el Virrey de Nueva España, un tanto en plan de ejemplaridad, y precisamente por parte de su hijo, el futuro virrey de aquel territorio, Don Bernardo de Gálvez, militar valeroso, y hombre cuya hoja de servicios americanos acrecentaba notablemente el historial familiar en el Nuevo Mundo.⁶⁹

El propio Ministro de Indias, su tío Don José debió quedar un tanto perplejo ante la pretensión de su sobrino. En las mismas exposiciones de Paniagua, y al margen, hay una serie de notas curiosas. Con letra del propio Ministro se expresa sencillamente: «Como pide». Más abajo, y de otra letra diferente, pero que parece la misma de la de las minutas de Reales Cédulas y Reales Ordenes, y por tanto es quizás del propio amanuense se dice por el contrario: «la pretensión adjunta es contraria a lo mismo que el Virrey de México supo y aprobó, es inútil lo que se propone, y tal vez contra lo que quisiera el dueño de las acciones». Finalmente y también de letra de Don José de Gálvez, se dice: «Pregúntese al Banco sobre lo que pide este Agente». Esta debió ser la resolución real, pues fueron preguntados los Directores⁷⁰ para que expusieran lo que se les ofreciere en orden a la representación de Paniagua. La respuesta de éstos,⁷¹ inmediata, y tajante, dice «no hallar reparo alguno en que se ejecute el depósito de las 500 acciones en la Caja General del Banco, ni en que se den del mismo las 3 certi-

69 Caughey, John Walton: *Bernardo de Gálvez in Louisiana*. Berkeley, 1934. Es la mejor biografía sobre el Conde de Gálvez, Virrey de Nueva España, 17-VI-30-XI-1786.

70 R. O. a los Directores del Banco Nacional, en San Ildefonso a 12-IX-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

71 Los Directores del Banco Nacional, a José de Gálvez, en Madrid a 22-IX-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

ficaciones que se solicita». La Real Orden, expresiva de la real resolución,⁷² a la vista del informe anterior de los Directores, dice que «ha resuelto el Rey, que poniendo en mi poder la dirección del Banco las 500 acciones pertenecientes al Virrey de México Don Matías de Gálvez, por los 50.000 pesos que destinó a ellas, y depositó en los Oficiales Reales de México, dé yo los avisos correspondientes al citado Virrey, y a los Oficiales Reales para la solvencia de su obligación».

Los Directores del Banco, pasaron a manos de José de Gálvez las 500 acciones de Don Matías⁷³ bajo los números de 66.064 a 66.563, prometiendo dar aviso correspondiente al Prior y Cónsules de México para satisfacer el encargo que les habían hecho al remitírselas. José de Gálvez ordenaba⁷⁴ se avisara al Virrey de México y a los Oficiales Reales

⁷² R. O. a los Directores del Banco Nacional, en San Ildefonso a 25-IX-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

⁷³ Los Directores del Banco Nacional, a José de Gálvez, en Madrid a 1-X-1784. (A. G. I., Indiferente, 1849).

Acusan recibo a la R. O. de 23-IX-1784, y "en consecuencia de todo, pasamos a manos de V. E. las referidas 500 acciones, bajo los número 66.064 a 66.563, y de haberlo ejecutado así, daremos por nuestra parte el aviso conveniente al Prior y Cónsules del Consulado de México para satisfacer el encargo que nos hicieron de remitírselas.

Con este motivo deebemos manifestar a V. E. que nuestro comisionado en Cádiz los Sres. Magon Leser Hermanos y Cia. percibieron íntegros y libres de todos derechos en 17 del ppdo. los 20.000 pesos fuertes que vinieron registrados por los Oficiales Reales de Veracruz a bordo del Navío de Guerra, el San Felipe, pertenecientes a los Indios de las Parcialidades de San Juan y Santiago de la Capital de México, y que en consecuencia hemos dispuesto que se destinen a favor de estos interesados bajo los números 73.095 a 73.294, las correspondientes 200 acciones, las cuales es nuestro ánimo hacer extender en los términos expresados, y esperar los avisos de que carecemos, respecto del destino o dirección que haya de dárselas".

Al margen de una letra: El recibo, y que en cuanto a las acciones de los indios de las Parcialidades de México, se entienda el Banco con Don Gaspar de Jovellanos, su apoderado".

R. O. a los Directores del Banco Nacional, en San Lorenzo a 2-X-1784. (A.G.I., Indiferente 1849).

La Audiencia Gobernadora a José de Gálvez, en México a 23-II-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁷⁴ Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 1-X-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

R. O. al Virrey de Nueva España, en San Lorenzo a 2-X-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

R. O. a los Oficiales Reales de México, en San Lorenzo a 2-X-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

de aquellas Cajas que las acciones quedaban en su poder. La razón era que muerto entonces Don Matías, su hijo Don Bernardo, conde de Gálvez, había ido a desempeñar la plaza de Virrey que su padre dejara vacante. Por ello, añadía Don José: «y que dicho Virrey disponga de sus acciones y que deba cobrar el producto de ellas». Poco después se sabía que el difunto Don Matías no había depositado el importe de las acciones en poder de los Oficiales Reales de México, sino en el de los de Veracruz, que eran por lo tanto los obligados a entregar las acciones.⁷⁵

Al margen de la carta de los Directores a José de Gálvez, y probablemente de la misma letra de ésta, había una nota que ordenaba se previniera al Banco⁷⁶ «que con motivo de haber muerto el Virrey Don Matías de Gálvez, dejando vinculadas las acciones a favor de su hijo único, el Conde de Gálvez, he dispuesto se devuelvan al mismo Banco para que queden en él, y se dé el correspondiente certificado por duplicado para remitirlo a dicho Conde; y que el producto de las citadas acciones quede también por ahora en el Banco hasta nuevo aviso mío».

Por nueva Real Orden⁷⁷ se mandaba al Virrey de Nueva España, que «en vista de la disposición testamentaria del Virrey Don Matías de Gálvez, y del estado de pobreza que queda reducida su viuda Doña Ana de Zayas, se ha servido el Rey mandarla socorrer con medio año de sueldo de su difunto marido, para que se venga a España. Al mismo

⁷⁵ Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 1-X-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

Los Oficiales Reales de México, Francisco de Sales Carrillo y Luis Gutiérrez a José de Gálvez, en México a 26-II-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁷⁶ Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 1-X-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁷⁷ R. O. al Virrey de Nueva España, en el Pardo a 22-II-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

Expediente del Mayorazgo de Don Matías de Gálvez, y papeles de Doña Ana de Zayas, su esposa. (Archivo del Banco de España, en Madrid. Legajo 536, núm. 30).

D. Bernardo de Gálvez era hijo de D. Matías de Gálvez y de su primera esposa, Doña Josefa Gallardo.

tiempo se dignó S. M. resolver que V. E. la contribuya anualmente desde el día en que murió el expresado Virrey con 2.000 pesos fuertes sobre las acciones del Banco Nacional que dejó vinculadas: cuya pensión ha de durar hasta el fallecimiento de la Virreina Viuda, como carga inseparable del Mayorazgo fundado por su marido, que así es la voluntad de S. M., de cuya orden le prevengo a V. E. para su cumplimiento». Vemos aquí cómo Bernardo de Gálvez, heredero del patrimonio personal de su padre, lo era también por las circunstancias de sus empleos y altos cargos políticos. Y no se nos oculta, cómo Don José, el forjador de la familia, ordenaba las cosas de tal manera que su cuñada, Doña Ana de Zayas, viuda de Don Matías, tuviera asegurado de por vida una cantidad con cargo al hijo de su esposo. Don Bernardo, a quien la fortuna y el porvenir sonreía en aquel momento en que llegaba a la cúspide de su carrera política y militar, contesta a la anterior Real Orden ⁷⁸ lisa y llanamente: «por lo primero rindo a S. M. las debidas gracias, pues el paso que se digna usar de su acostumbrada piedad, me franquea S. M. un testimonio nada equívoco de que le fueron gratos los servicios de mi Padre; y en cuanto a lo segundo, me lisonjeo de que se me proporcione obedecer a S. M., aun en aquello mismo que yo juzgo de mi propia obligación».

Poco después, el Marqués de Sonora ⁷⁹ devolvía al Banco las 500 acciones que su hermano Don Matías había dejado vinculadas por testamento a su único hijo el Conde de Gálvez, Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba

⁷⁸ El Conde de Gálvez, Virrey de Nueva España a José de Gálvez, en México a 26-VI-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

R. O. a los Directores del Banco Nacional, en Palacio a 30-XII-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

Acciones del Conde de Gálvez que pasan a la Condesa Vda. de Gálvez, Doña María Feliciano de Maxent y La Roche, D. Miguel de Gálvez, Conde de Castro Torreño, etc. y demás descendientes. 1784-1828 (Archivo del Banco de España, en Madrid, Legajo 536, núm. 28).

⁷⁹ Sonora a los Directores del Banco Nacional, en Aranjuez a 22-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

y de las Provincias de la Luisiana y La Florida, y pedía se le remitiera el correspondiente certificado por duplicado de la devolución, para dirigírselo al Consejo, y que el producto de las acciones citadas quedara de momento en el Banco hasta nuevo aviso suyo. Los Directores del Banco Nacional, al acusar recibo de la Real Orden, en que se les ordenaba entregar a Doña Ana de Zayas, Viuda de Don Matías de Gálvez 40.000 reales anuales, producto de las acciones de éste, manifestaban tener dicha cantidad a disposición de la viuda.⁸⁰

Otro incidente, de distinto tipo, pero expresivo de las iniciales vacilaciones que existieron en la legislación y reglamentación de las imposiciones hechas por americanos, o residentes en América, con respecto al Banco Nacional, es lo ocurrido con Alduncin y Guruceaga. Dichos «socios del comercio de la ciudad de México, y residentes en la Villa de Madrid», según propia declaración,⁸¹ decían al Rey haber sido los primeros en tener noticias del Banco Nacional, y que habían movido a otras personas, al conocerse el Bando de 18 de junio de 1783, en que se insertaba la Real Orden de erección del Banco de San Carlos de 2 de junio de 1782. En dicho Banco se señalaba al Real Consulado como lugar para el recibo del importe de las acciones, e igualmente la promesa hecha por el Virrey de México, que en nombre del Rey, prometía que «las cantidades que se pudiesen con este objeto en el Consulado, se enviarán en la primera ocasión de Registros sin la menor retardación, y libres de derechos a la entrada en España, pagando solamente el flete establecido según las distancias». Alegaban a continuación Alduncin y Guruceaga, que por ello, y por

80 Los Directores del Banco Nacional a Sonora, en Madrid a 5-I-1786. (A.G.I., Indiferente 1849).

Expediente del Mayorazgo de Don Matías de Gálvez y papeles de Doña Ana de Zayas su esposa. (Archivo del Banco de España en Madrid, Legajo 536, núm. 30).

81 Juan Francisco de Anduncin y Juan Antonio de Guruceaga al Rey, en Madrid a 17-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

estar empeñada la Real Palabra, avivaron las diligencias con la mayor actividad, «por haber encontrado este medio de remitir a estos Reynos libremente, y con utilidad los caudales de aquél, y con esta confianza entregaron en dicho Consulado la cantidad de 10.000 pesos fuertes con destino al Banco, lo que libres de fletes se pusieron en manos de Don Pedro de Vértiz para su conducción a Veracruz, a efecto de que se embarcaran en el Navío San Felipe, para Cádiz, «a la consignación de los Factores de la Casa del mismo Banco en Cádiz, bajo las seguridades acordadas, y con la condición de que habían de ser de cuenta de los suplicantes todas las costas hasta poner íntegros en el Banco dicho 10.000 pesos fuertes, según más por menor resulta de la carta de recibo que acompaña firmada por el Prior y Cónsules de México a 13 de febrero de 1784». A su llegada a Madrid, encuentran Alduncin y Curuceaga que los 10.000 pesos fuertes se hallan en el Banco Nacional, pero tienen aviso de su corresponsal en Cádiz, que al llegar dichas cantidades a aquel puerto se le exigieron derechos reales y otros, de tal manera que quedan desfalcados y reducidos a 8.874 pesos, 2 reales y 2 maravedíes. Y que con ello, estaban obligados a pagar el desfalco que consideran justo en lo referente al coste de conducción y comisión de su corresponsal, y que no creen lo sea en lo referente a derechos. Alegan además el principio de la irretroactividad de la ley, pues las disposiciones posteriores al envío no le alcanzan a éste, que se hizo acogándose al Bando del Virrey antes mencionado, y «sobre el seguro de la fe y Palabra Real», que les decían venían libres de derechos. Finalmente pedían la restitución de las cantidades exigidas.

Otras suscripciones de particulares

De otras suscripciones, no importantes en cuanto a su volumen, pero sí interesantes por las incidencias que presentan, es curioso reseñar aquí también el depósito hecho

por el Capitán del Regimiento de Infantería de Aragón, Don Raimundo Andrés, en la Tesorería de la Habana, por un total de 2.800 pesos fuertes, equivalentes a 28 acciones del Banco Nacional,⁸² y que debían partir para España cuando se proporcionara un Registro de Caudales que pudiera conducirlo con la franquicia y requisitos prevenidos por las disposiciones vigentes. Así lo participaba Juan Ignacio de Urriza, Intendente de la Habana, a José de Gálvez, para que éste lo comunicara a su vez a los Directores del Banco.

Pocos meses más tarde, Don Fernando Lozano, Teniente del Regimiento de Aragón, en nombre y comisionado por Don Raimundo Andrés, se dirigía a José de Gálvez, desde Madrid,⁸³ diciéndole que la cantidad impuesta hubiera venido a España en la fragata de guerra Santa Dorotea, que salió de la Habana al tiempo de hacerse el depósito de Andrés, «si el Intendente no la hubiera detenido por urgencias del Real Servicio; según previno en oficio que pasó al interesado». Después de dicha fragata habían salido otras, y seguía sin remitirse dicho caudal por la misma causa. Pedía Lozano los intereses correspondientes al dinero desde el tiempo que la Dorotea había llegado a la península, y que el Banco no quería abonar, sino desde el momento en que las acciones llegaran a España. Recababa de Gálvez la más justa providencia sobre el particular, para que a Andrés no se le siguieran perjuicios por falta de percepción en los intereses devengables.

Ya entrado el año 1786, casi dos después de hecho el depósito por Andrés, la cuestión había empeorado conside-

⁸² Juan Ignacio de Urriza, Intendente de Ejército de la Habana a José de Gálvez, en la Habana a 10-VII-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

R. O. al Intendente del Ejército en la Habana, en San Ildefonso a 21-IX-1784. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁸³ Fernando de Lozano Teniente del Regimiento de Aragón a José del Gálvez, en Madrid a 10-I-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

rablemente.⁸⁴ Un nuevo apoderado de éste, Don Francisco de Santiago, volvía a dirigirse a José de Gálvez diciéndole que no habiendo salido en julio de 1784 los 2.800 pesos fuertes depositados por Andrés, sino en 30 de mayo de 1785 en el navío La España las acciones del Banco Nacional habían tenido un aumento del 25 %, es decir 500 reales, solicitando que pasara oficio a los Directores del Banco para que no se vieran incrementadas con esta cantidad por haber sido entregado el caudal con la correspondiente anticipación, según constaba en el oportuno recibo que obraba en poder del interesado.

Otro ingreso, procedente también de militar de servicio en Indias, es el del Brigadier Don José de Ezpeleta,⁸⁵ que también en la Tesorería de la Habana depositó 3.000 pesos fuertes, correspondientes a 30 acciones del Banco Nacional de San Carlos, para que fueran enviados a Cádiz cuando se proporcionase Registro de Caudales, y con los requisitos prevenidos.

Posteriormente hay noticia de una operación de giro, de que da cuenta Don Pedro Borbalán, Intendente de la Provincia de Veracruz⁸⁶ al Ballío Frey Don Antonio Valdés, Ministro de Indias. En el navío de guerra San Julián, a cargo del Contador Don José García Galindo, se habían registrado por los Ministros de la Real Hacienda de la Caja de Veracruz, en virtud de orden al efecto, 1.516 pesos, 5 reales y medio en plata doble nueva, por cuenta y riesgo del Banco Nacional de San Carlos, a cuyos factores se iban a entregar a Cádiz, como procedentes del cobro de 5 letras

84 Francisco de Santiago por Poder de Raimundo Andrés a José de Gálvez, en Madrid a 26-IV-1786. (A. G. I., Indiferente 1849).

85 Juan Ignacio de Urriza, Intendente de la Habana a José de Gálvez, en la Habana a 19-II-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

R. O. a los Directores del Banco Nacional y al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en Aranjuez, a 8-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

Bartolomé Ortega, Presidente Interino de la Audiencia de la Contratación de Cádiz a José de Gálvez, en Cádiz a 3-VI-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

86 Pedro Corbalán, Intendente de la Provincia de Veracruz al Ballío Fray Don Antonio Valdés, en Veracruz a 19-VI-1788. (A. G. I., Indiferente 1849).

que dirigió a aquel Virreinato, cobradas por el Real Tribunal del Consulado, para que los tuvieran a disposición de los Directores del Giro en Madrid.

**Las suscripciones de acciones del
Banco Nacional en Lima**

En Lima no debió ser popular la noticia de la creación del Banco de San Carlos. No tenemos noticias de suscripciones hechas por parte de los pueblos de indios, y sí por el contrario de altas autoridades, y cargos de elevada alcurnia y jerarquía. Probablemente el estado social del interior del Perú contribuyó a ello.⁸⁷ La información más exacta sobre este particular se debe precisamente a José González Gutierrez y Antonio de Elizalde, del Tribunal del Consulado de Lima,⁸⁸ quienes al informar a José de Gálvez sobre la difusión en aquel Virreinato de la Real Cédula de erección del Banco de 2 de junio de 1782, y la Real Orden de difusión del mismo por América de 26 de marzo de 1783, dicen: «Aunque en el mismo día, 18 de septiembre de 1783, hizo el Excmo. Sr. Virrey publicar por Bando estas Reales Disposiciones, este Tribunal mandó convocar a Junta General de Comercio, para hacerle presente a sus individuos (como lo hizo) las mayores ventajas, y adelantamientos, que lograrían en el pronto curso de sus negocios con tan útil establecimiento, induciéndoles con el mayor esfuerzo, a que por su parte concurriesen a interesarse en sus acciones. En la firme inteligencia de la seguridad de la Real Palabra, que se expresa en la Real Orden. Siéndole a este Tribunal de gran complacencia, ver que sin embargo de los muchos atrasos, y adelantos que se han padecido con las revoluciones

87 Lewin, Boleslao: *La rebelión de Tupac-Amaru y los orígenes de la emancipación americana*. Buenos Aires, 1957.

Valcarce, Daniel: *La rebelión de Tupac-Amaru*, México, 1947.

Macedo, María Rosa: *Pasión y gloria de Tupac Amaru II*. Lima, 1945.

88 José González y Antonio de Elizalde del Tribunal Real Consulado de Lima a José de Gálvez, en Lima a 10-IV-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

ciones pasadas de sus Provincias Internas; en el corto espacio de 6 meses y medio, se hayan acopiado la cantidad de 79.062 pesos, que caminan, divididos sus riesgos en los 2 navíos de guerra San Pedro Alcántara y San José el Peruano, que están a salir de este puerto del Callao, a ese de Cádiz, destinados al Banco, en que son interesadas las personas contenidas en la adjunta nota, y van libres de 1 ³/₄ de derechos en la Plata pertenecientes a este Tribunal».

Se adjuntaba la Relación de las personas que habían enviado el dinero de su propio peculio, encabezando la lista el Virrey y el Regente de la Audiencia de Lima,⁸⁹ y notándose cómo en muchos casos se había remitido el caudal por mitad en el Peruano y el San Pedro Alcántara para dividir el riesgo del envío.

Una incidencia curiosa es la suscripción de acciones hechas por Don Tomás de Irizarri y D. José Matías de Eli-

89 "Razón del Dinero que se ha registrado por parte de este Real Tribunal del Consulado para el Banco Nacional de San Carlos, en los dos Navios de Guerra Peruano y San Pedro Alcántara, por cuenta de los sujetos que abajo se expresan, a saber:

	PERUANO	SAN PEDRO	TOTAL
De cuenta y riesgo del Excmo. Sr. D. Agustín de Jáuregui, Virrey, Gobernador y Capitán General de Estos Reynos. Pesos de Plata doble de cordoncillo .	5.200		5.200
De...del Sr. D. Melchor Jacobo Ortiz Rojano, Regente de esta Real Audiencia. Pesos en Plata doble de cordoncillo	2.600	2.600	5.200
De... del Sr. D. Pedro Sta. María, Deán de la Santa Iglesia de la Ciudad de Arequipa. Pesos en Plata doble de Cordoncillo	13.000	13.000	26.000
De... Don Ambrosio Díaz, Cura de la Doctrina de Viraco, en el Obispado de Arequipa	5.200	5.200	10.400
De... Don José Antonio Pando, Administrador General de la Real Renta de Correos de este Reino . . .	2.600	2.600	5.200
De...el Sr. D. Antonio de Elizalde, Cónsul del Real Tribunal del Consulado de este Keyno	5.200		5.200
De... Don Matías de Elizalde		5.200	5.200
De... Don Juan de Goyeneche, vecino de Arequipa.	2.600	2.600	5.200
De... Don Saturnino García y Aranzuri, Presbítero y Secretario del Imo. Sr. Obispo de Arequipa . .	780	780	1.560
Perteneciente a Don Tomás de Yrizarri	4.951	4.951	9.902
	<u>42.131</u>	<u>36.931</u>	<u>79.062</u>

zalde⁹⁰ que los Cónsules de Lima explican a José de Gálvez.

Los Directores del Giro del Banco acusaron recibo de la «Razón de los Caudales» enviados desde Lima por el Tribunal del Real Consulado con cerca de un año de retraso.⁹¹ Así lo expresaban a Don José de Gálvez, diciéndole que el Tribunal del Consulado limeño les había dirigido los respectivos conocimientos para el percibo de los expresados caudales, «y siendo nuestro ánimo endosarlos a favor de los S. S. Magon Leser Hermanos y Compañía», comisionados del Banco de Cádiz, suplicamos a V. E. que a fin de procurar a los interesados el mayor beneficios posible, proporcionando el más pronto ingreso de sus fondos en poder de dichos comisionados, se sirvan mandar expedir las órdenes correspondientes para que no sufra demora la entrega del dinero que ha conducido El Peruano, y para que a la llegada del San Pedro Alcántara pueda efectuarse también sin dilación el percibo de las cantidades que nos trae».

90 José González Gutiérrez y Antonio de Elizalde, del Tribunal del Real Consulado de Lima a José de Gálvez, en Lima a 10-IV-1784. (A. G. I., Indiferente 1850).

“En esta cantidad se incluyen 9.902 pesos, pertenecientes a Don Tomás Irizarri, vecino de esta Corte. El mismo por quien V. E. en su carta orden de 22-VI-1783, que acompaño con la de la Libranza, previene a este Tribunal practique las más vivas diligencias para el cobro de 10.000 pesos que ese sujeto había destinado al Banco, y los remitiése en primera ocasión. En cuya virtud, reconvenidos que fueron los consignatarios, para que diese razón del estado de este caudal, expuso Don Juan Miguel de Marticorena, consignatario de los 7.500 pesos que Yrizarri había destinado al Banco, tener registrados, divididos los riesgos en estos Navíos de Guerra, 43.412 pesos 4 reales, pertenecientes a Yrizarri, consignados a D. Vicente Marticorena, como lo acreditó manifestando los dos conocimientos, de cuya cantidad debería deducirse en Cádiz los predichos 7.500 pesos y Don José Matías de Elizalde, que lo es, de 2.500, cumplimiento a los 10.000 igualmente hizo presente con otros dos conocimientos, tener ya registrados en los mismos Navíos 1.201 peso en cada uno, que ambas partidas componen 2.402 pesos, que con 98 de encomienda, gastos y derechos, ascendía a los 2.500 pesos de la Libranza, que van de cuenta y riesgo de Yrizarri. Que es la razón de no ir completos los 10.000 pesos. Y aunque se les previno diesen noticias a sus correspondientes, que en atención a ir destinados al Banco esas cantidades, hiciesen el entrega de ellas a sus Directores. Con todo, para el mayor seguro, ocurrió este Tribunal al Sr. Superintendente General de la Hacienda, para que providenciase que en la Real Aduana, se anotase al margen de cada una de las respectivas partidas de registro; ir a entregar a los Directores del Banco las predichas cantidades, como así se mandó y verificó”.

91 Los Directores del Giro del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 5-III-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

La respuesta, dirigida a la Contratación de Cádiz,⁹² encarecía la inmediata entrega de los caudales para que no sufrieran dilación, y subrayaba al propio tiempo, que «las cantidades pertenecientes a europeos paguen los derechos del caudal, y en su consecuencia, que las partidas del Virrey Don Agustín de Jáuregui, Don Melchor Jacobo Ortiz, Don José Antonio de Pando, y Don Saturnino García de Arazuri, y demás que sean de España deben contribuirlos, libertándose de ellos, y no los fletes los demás que sean de Americanos, haciéndolo constar los Apoderados o correspondientes de ellos».

Seguía claro el sentido que hemos visto reiteradamente expresado, que la exención de los derechos era de carácter personal, es decir para los españoles americanos, indígenas o criollos, pero en modo alguno para los españoles europeos residentes en las Indias, así como tampoco para los indios, es decir para los americanos residentes en Europa. Y en tal sentido es fácil colegir cómo ello se debía al propósito por un lado de beneficiar e interesar a los súbditos americanos en este establecimiento español, y en segundo término facilitar la exportación de caudales de Indias, sin que ello fuera determinante de un tráfico en favorables condiciones por parte de españoles europeos con negocios o residencia en el Nuevo Mundo.

Particular interés tiene al llegar a este punto, la interpretación de Don José Baquijano y Carrillo, Conde de Vista Florida, y amigo del Virrey Jáuregui,⁹³ que en una repre-

92 R. O. al Presidente Interino de la Contratación de Cádiz, en el Pardo a 6-III-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

Idem. a los Directores del Banco Nacional.

Bartolomé Ortega a José de Gálvez, en Cádiz a 15-III-1785. (A. G. I., Indiferente 1850).

93 Maticorena Estrada, Miguel: *José Baquijano y Carrillo, reformista peruano del siglo XVIII*, Estudios Americanos núm. 76-77, Sevilla, 1958, págs. 53-60.

El "tercer Conde de Vista Florida" (1751-1817) "entre otras actividades, figuró como Catedrático de la Universidad, Oidor, Procurador del Ayuntamiento, protector de los naturales, Consejero de Estado, miembro de la Orden de Carlos III. Como escritor es conocido por las disertaciones sobre el comercio peruano, las minas de

sentación dirigida al Rey ⁹⁴ pide que para los vecinos del Reino del Perú, y en vista de no haber salido desde la creación del Banco Nacional más Registros de Caudales que El Peruano, San Pedro Alcántara y fragata Santa Paula (cuyo viaje había sido especialmente desgraciado), es por lo que dichos vecinos no se podían beneficiar del plazo de 18 meses dado por el Rey para que los americanos pudieran suscribir las acciones sin el gravamen del 10 % con que se hallaban ya en aquella fecha.

La Representación de Vista Florida fue enviada por el Rey a los Directores del Banco de San Carlos, para que informaran sobre ella. ⁹⁵ El Informe del Banco, concreto y preciso, sobre materia en la que ya había aconsejado con anterioridad, por haberse repetido el planteamiento de la cuestión que ahora suscitaba Vista Florida, es tajante a este particular. Empieza por decir, que «Esta representación se dirige a que S. M. declara, que han de ser libres del aumento impuesto a todos los accionistas con la real aprobación, las acciones que este interesado quiera adquirir con los caudales, que justificare haber registrado en los buques San Pedro de Alcántara, Peruano y fragata Santa Paula».

Funda esta solicitud sobre el plazo de 18 meses contados desde la publicación de la cédula, concedido para suscribir a todos los vasallos del Rey en ambas Américas, cuya concesión ha observado religiosamente el Banco». Esta es pues la situación jurídica que el Banco reconoce y respeta, «Pero

Potosí, la historia de la Universidad y la Audiencia, otros varios opúsculos, y sobre todo por su famoso "Elogio del Virrey Jáuregui".

Tuvo especial simpatía por el Padre Feijoo y por Jovellanos, siendo el más aprovechado discípulo de este en el Perú. Fue amigo también de Pablo de Olavide, limeño y Asistente de Sevilla.

"Baquijano es el jefe del grupo liberal, o peruano español, que propugnaba un programa regionalista y constitucional como solución de la crisis política". Combatió las medidas políticas de Areche en el Virreinato peruano, y puso de relieve el descontento producido por la represión de Tupac Amaru.

⁹⁴ El Conde de Vista Florida al Rey, en Lima. (A. G. I., Indiferente 1849).

⁹⁵ Los Directores del Banco Nacional a José de Gálvez, en Madrid a 8-VI-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

el Conde de Vista Florida y otros individuos, que han suscitado la misma pretensión, y constantemente negada por la Junta, se desentienden de que la misma autoridad que prefinió el tiempo de la suscripción, señaló también las condiciones y formalidades de ella, y mandó que los Consulados de México y Lima, y los Oficiales Reales donde no existen estos Cuerpos, habían de admitir los Caudales destinados al Banco, libertándose de derechos los que fueren de naturales moradores en aquellos dominios, y sujetando a ellos los que fueren de Europeos o de Indianos establecidos en Europa». Pasa entonces a definirse exactamente el sentido informador del precepto jurídico: «La previsión que dictó esta ley, que separó los auxilios y facilidades concedidas a los que quisieren ser verdaderamente accionistas del Banco, de abuso que podrían cometer en vista del éxito, los que nunca habían pensado en serlo, sólo se puede esconder a la ilusión del interés propio». Y preguntan con fina intención, adivinando el interés especulador de los que pretendían acogerse a los beneficios otorgados a los primeros suscriptores de acciones del Banco Nacional. «¿Cómo en efecto poderse persuadir, que el Gobierno autoriza una pretensión destituida de pruebas, y fundada sobre la mera intención del que pretende? ¿Cómo habrá de autorizar con semejante ejemplo millares de personas, que esperan caudales por los navíos del Perú, a los que lograsen acciones del Banco a la par para volverlas a vender aquí inmediatamente con un 25 % de utilidad a los vasallos europeos, que los toman ansiosamente con este aumento? ¿Cómo, por fin, se ha de reconocer por suscriptor, y se ha de hacer gozar de los términos de la suscripción a quien no suscribió, o cómo ha de reclamar el beneficio de la ley quien en nada la obedeció?». Y acaba con un párrafo definitivo, demostrando que es el interés y el propósito de los suscriptores el que define las ventajas de la suscripción: «La razón, que corrobora estos argumentos, combate más victoriosamente aún los

débiles pretextos con que el Conde de Vista Florida esfuerza su solicitud. Nada tiene que ver con ella la dilación de los navíos del Perú, porque ni el Rey, ni el Banco, se han gobernado en esta parte por el tiempo de la llegada de caudales, pero por el de la suscripción; y así como en cualquier tiempo la Junta hará entregar sin aumento las acciones, cuyo importe se hubiera registrado en los términos prefijados, así se negará a admitir los que hubieren llegado ya, pero no tuviesen la señal característica que demuestra haberse destinado al Banco».

Este razonado informe, determinó la resolución real,⁹⁶ denegatoria de lo pedido en su Representación por el Conde de Vista Florida.

⁹⁶ R. C. a los directores del Banco Nacional de San Carlos, en Aranjuez a 6-V-1785. (A. G. I., Indiferente 1849).

CAPITULO IV

LAS CORTES DE CADIZ EN 1810: DISPOSICIONES A FAVOR DE LOS INDIOS

La guerra de independencia española, y los primeros brotes de la emancipación americana, traen como consecuencia una importante serie de trastornos y alteraciones en la organización político-social española en Indias. Las bases jurídicas de la ordenación de la monarquía indiana sufren un grave quebranto al quedar vacante el trono. Los indios, sobre los que la Corona había ejercido siempre una tutela directa y dilectísima, quedaban también un tanto desamparados, y sus derechos estaban expuestos a sufrir fáciles desgarres.

Sin embargo, las Cortes de Cádiz, en 1810, empiezan a preocuparse por la situación de los indígenas ¹ «los más miserables habitantes de sus dominios». A este respecto, una legislación proteccionista, más eficaz aún que la anterior, dice que ² «son los Yndios, especie muy privilegiada por nuestras santas leyes, cuyo gobierno y buen tratamiento nos está muy recomendado y encargado por ellas, y así lo hemos jurado cumplir». El Supremo Consejo de Regencia, en consideración ³ «a que los Yndios son una parte, la más principal de aquellos dominios, a los cuales se ha dado la debida

¹ Real Decreto en la Real Isla de León a 26-V-1810. Dirigido a D. Nicolás María de Sierra. Firmado por Xavier de Castaños, presidente; Francisco de Saavedra; Antonio de Escaño; Miguel de Lardizábal y Uribe. (A. G. I., Indiferente 1851).

² Ibid.

³ Ibid.

representación para solemnizar y legalizar más las Cortes que deben celebrarse», los libera en nombre de la Real Voluntad de todas las contribuciones, excepto un 3 % de alcabala por los frutos que comercien de Castilla, prohibiendo a los Gobernadores indios, Caciques y Encomenderos, cualquier otro tributo o diezmo que pudiera exigírseles. Y para el pago del premio de cobranza, correspondiente a Subdelogados (5 %) y Gobernadores indios (1 %), manda se obtengan de los tributos de las demás castas que no lo fueran. Finalmente, con respecto a los gravámenes existentes sobre los dichos indios, correspondientes al medio real del Hospital de San Lázaro y de Ministros, se ordena que cada Intendente, Gobernador, o Corregidor estudie la manera de abolirlos o subrogarlos, según se estime oportuno. También se prevén unas oportunas y beneficiosas disposiciones en orden al reparto de tierras y aguas entre los pueblos de indígenas.

**Primer intento de disponer de las acciones
de los indios de Nueva España**

Pero estos propósitos y deseos no eran todo lo inmutables que fuera de desear. Los avatares de la guerra de independencia, y las distintas actitudes que el Rey Deseado adoptó a su regreso al Trono, no eran fácilmente previsibles por nadie, ni en cada momento, para un futuro más o menos inmediato. Y así ese propósito, loablemente proteccionista que manifestó el Supremo Consejo de Regencia, interpretando con ello la Real Voluntad, tuvo años más tarde un quiebro notorio, al ordenarse por la Gobernación de la Península al Secretario de Despacho de la Gobernación de Ultramar,⁴ que «hablándose reconocido unánimemente por

⁴ Gobernación de la Península. Sección de Gobierno Político. Ramón Feliu al Secretario de Despacho de la Gobernación de Ultramar, en Palacio a 6-VIII-1821. (A. G. I., Indiferente 1851).

Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

la Junta de los Señores Secretarios del Despacho la necesidad de un gasto secreto que exigía el bien del Estado, y teniendo igualmente en consideración las continuas y graves urgencias de la Tesorería General, que no le permiten cubrirlo con la prontitud necesaria, se ha servido S. M. mandar que se pague el referido gasto secreto de los fondos de las parcialidades de Indios que existe en la Secretaría del cargo de V. E., en acciones del Banco Nacional de San Carlos, en calidad de reintegro de la partida de gastos eventuales señalada en el presupuesto del Ministerio de Hacienda».

Al día siguiente de esta Real Orden, el 7 de agosto de 1821, se ordenaba la entrega de las acciones⁵ endosadas a la orden de Don José Viton, y que se comunicara a la Secretaría del Despacho de Hacienda, para disponer su «reintegro en esta Secretaría con la posible brevedad». ⁶ El expediente que se hallaba en la papelería del Oficial Mayor de la Secretaría de la Gobernación de Ultramar, se devolvió a la Mesa, después de reconocido. ⁷

**El acuerdo de las Cortes de 1 de abril de 1822:
informe de Urquinaona**

Las acciones de las Parcialidades de Indios en el Banco Nacional de San Carlos, que vimos en el apartado anterior sufren el primer embate estatal, aunque todavía con carácter excepcional y transitorio, van a experimentar en el futuro una serie de vicisitudes, que acabarán finalmente con su existencia, y su titulación jurídica propia y original.

⁵ Ibid.

⁶ Gobernación de Ultramar. Reservado. Secretario de Estado para la Gobernación de Ultramar al Secretario del Despacho de Hacienda, en Palacio a 8-VIII-1821. (A. G. I., Indiferente 1851).

Gobernación de Ultramar, Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General núm. 119. Madrid 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁷ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General. núm. 119. Madrid 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

En la sesión de las Cortes de 1 de abril de 1822,⁸ se aprobó el Dictamen de la Comisión del Crédito Público, referente a admitir la «adición propuesta por los Diputados al Decreto sobre Incorporación al Estado de las Acciones del Banco Nacional de San Carlos, impuestas de caudales de propios y pósitos de la Monarquía, en la cual solicitaron se hiciese extensiva esta resolución a las acciones y créditos pertenecientes a las Comunidades de Indios».

La aludida Comisión del Crédito Público, estimó «justa y digna de adoptarse esta declaración, mediante a ser los fondos de que se trataba de naturaleza igual a los comprendidos en el decreto que acababa de dictarse».

Los fundamentos de la Resolución, expuestos por uno de los autores de la adición,⁹ señalaban que «estos fondos proceden de un tributo que se paga en las Américas para gastos municipales, pero en último resultado, ellos o los

⁸ Ibid.

“Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1822”. Tomo I, pág. 606. Sesión de 28-III-1822. Presidente Riego. Sobre Propios y Pósitos.

Pág. 671: Sesión de 1-IV-1822. Presidente Riego. Sobre Comunidades de Indios:

“La misma comisión de Visita del Crédito Público presentó su dictamen acerca de la adición hecha por los Sres. Ferrer y Gil de la Cuadra en la sesión de 28 de marzo anterior, dirigida a que se declarasen incorporados a la Nación las acciones del Banco y demás créditos pertenecientes a las comunidades de indios; cuya declaración consideraba justa la comisión y digna de que se adoptase por las Cortes, mediante ser aquellos fondos de naturaleza igual a los comprendidos en el decreto a que se refería la adición.

Leído este dictamen dijo el Sr. Ferrer (D. Joaquín): Debo decir alguna cosa sobre este particular, porque he visto con sentimiento que cuando en los periódicos de esta capital se ha hablado de esta proposición, han dicho solamente que era relativa a las acciones pertenecientes a comunidades, sin expresar que se limitaba a las de Indias. Como algunos Sres. Diputados ignorarán tal vez el origen de estos fondos, me tomo la libertad de decir que procede de un tributo que se paga en las Américas para gastos municipales; pero estos fondos en último resultado, o los sobrantes de ellos, iban a la capital del Virreinato, en la que había un magistrado regularmente de la Audiencia, que era juez nato de estos fondos, y los manejaba sin intervención alguna, compraba fincas y las administraba a su placer. Parte de estos fondos han venido a parar a España, y existen en el Banco de San Carlos y en otros establecimientos. Estas cantidades, por lo mismo que no pertenecen a ningún particular ni a ninguna familia, deben considerarse como bienes nacionales, y el Estado debe hacerse cargo de ello y no dejarlos abandonados como están en la actualidad.

En seguida fue aprobado el dictamen de la comisión”.

⁹ Ibid.

sobrantes iban a la capital del Virreinato, en la que había un Magistrado, regularmente de la Audiencia, que era juez nato de estos fondos, y los manejaba sin intervención alguna: compraba fincas y las administraba a su placer. Parte de estos fondos han venido a parar y existen en el Banco Nacional de San Carlos y en otros establecimientos. Estas cantidades, por lo mismo que no pertenecen a ninguna familia, deben considerarse como bienes nacionales, y el Estado debe hacerse cargo de ellos y no dejarlos abandonados, como lo están en la actualidad».

La fundamentación jurídica formulada por la Comisión del Crédito Público, de los fondos correspondientes a los bienes de las Parcialidades de Indios de Nueva España, que habían sido invertidos en acciones del Banco Nacional de San Carlos, no parece que satisfizo al personal técnico del Banco. Interviene entonces un nuevo personaje, Don Pedro de Urquinaona y Pardo,¹⁰ Oficial Primero de la Se-

10 González Sabariego, Rosario: *Pedro de Urquinaona y Pardo (Un colombiano al servicio de España)*. Revista de Indias, Madrid, julio-diciembre 1959, núms. 77-78, págs. 435-448.

Esta debe ser el personaje autor del informe histórico-jurídico, cuya biografía es la que sigue: Nació en Santa Fe de Bogotá en 1778, hijo de Ignacio de Urquinaona, Contador Mayor de Cuentas de Quito. Luchador inquieto, y aficionado a la política, sirvió a España en el campo realista, y militó en las filas liberales. En América tuvo influencias, dinero y amistades. Se doctoró en ambos derechos y obtuvo el título de abogado.

Escribió la "Relación documentada del origen y progresos del trastorno de las provincias de Venezuela, hasta la exoneración del Capitán Don Domingo Monteverde", Madrid, 1820. Este libro se reeditó en 1917 con el título de *Memorias de Urquinaona*.

En 1835 publicó en Madrid otro libro titulado *España bajo el poder arbitrario de las Congregaciones Apostólicas*, en el que el propio título denota su tendencia liberal. Ese mismo año y en Madrid publicó otra obra titulada: *Resumen de las causas principales que prepararon y dieron impulso a la emancipación de la América Española*.

Llegó a España en 1809, comisionado por el Gobierno de Caracas para presentar a la Junta Central el proceso de los encartados en la primera sedición de 1808. La designación se debió a los méritos contraídos por Urquinaona en dicho año, cuando llegaron a la Guaira los emisarios de Napoleón para que se reconociera a José Bonaparte rey de España, y a Murat lugarteniente del Reino. Las principales personas de Caracas se reunieron en su casa, y el dijo que "el carácter de los españoles se distinguió siempre por el odio a toda dominación extranjera, concluyendo con

cretaría de Despacho de la Gobernación de Ultramar, que hace un informe histórico-jurídico sobre la naturaleza y propiedad de dichos fondos, en el que, con innegable cono-

calificar de falsos y sediciosos los papeles introducidos por los emisarios para someter a aquellos países al yugo de Napoleón".

Partió en la goleta de su propiedad "Ursula", desembarcando en Jamaica, e informando al gobernador inglés de los acontecimientos, y pidiéndole libertad a los prisioneros españoles, por ser Inglaterra entonces nuestra aliada. En su proceso, Urquinaona declaró también ser promotor de suscripciones para obtener la causa del Estado Español.

Regresa a América en 1811, volviendo nuevamente a la península con el designio de establecerse aquí definitivamente. Había perdido la mayor parte de sus bienes, y estaba en desacuerdo con los movimientos emancipadores, y los sucesos ocurridos en Caracas el 19-IV-1810. Antes de partir escribió un "Manifiesto a los Americanos del Sur".

Naufraga frente a Sanlúcar de Barrameda, donde tenía familia, no consintiendo en doblegarse a los representantes de Napoleón que le ofrecieron la libertad, y respetarle la carga del buque si reconocía la soberanía de José Bonaparte. Puso a disposición del gobierno español en Cádiz un bergantín de su propiedad, el "Wellington", para transportar soldados y artillería a Venezuela. El gobierno español le recompensó en 24-VIII-1812, nombrándole Oficial Quinto de la Secretaría de la Gobernación de Ultramar.

Conocedor de los sucesos de América, se ofreció al Gobierno español para actuar de intermediario al frente de una comisión de pacificación con los disidentes de Santa Fe, por haber visto en la Constitución de Cundinamarca los principios de la Monarquía española, y la vuelta de aquel país de su independencia. El gobierno aceptó su ofrecimiento y le nombró como comisionado.

Salió de Cádiz en enero de 1813, y llegó a la Guaira en marzo, pasando a Caracas. El Comandante General de Venezuela, D. Domingo de Monteverde se puso a su disposición, pues los rebeldes llegaban ya a Barinas y Maracaibo. Con ello el Comandante cumplía las órdenes del gobierno, aún cuando aumentaba la rivalidad con Urquinaona, y entre ambos se cruzaron impresos y libelos que este recogió en sus "Memoria".

Monteverde acusó repetidamente a Urquinaona de sembrar la sedición, y proponer incluso la libertad de Miranda. A ello respondió el comisionado alegando que el olvido era una de las bases que le habían sido comunicadas en la instrucción. También informó Urquinaona al gobierno del mal ejemplo que Monteverde daba con su conducta, y el incumplimiento que daba a la Capitulación de San Mateo.

Ante tan contradictorios informes el gobierno ordenó el cese de la comisión de Urquinaona, y su regreso a la península en 1814, pasando a ocupar la plaza de oficial de Secretaría del Ministerio Universal de Indias, por haberse extinguido el de la Gobernación de Ultramar.

Aparece entonces en escena D. Andrés Level de Goda, Fiscal de la Audiencia de Caracas. Este y el secretario Calomarde, protegidos por el ministro Lardizábal, sacan a relucir las olvidadas representaciones de Monteverde y Fierro contra Urquinaona. Hay un informe de Level que fue íntegramente leído por Lardizábal al Rey. En él se difamaba a Urquinaona, para que fuese despojado de su plaza de Oficial de Secretaría, porque desde ella podía impedir que Level obtuviera la de Fiscal Togado de Caracas, su aspiración de entonces. Despojado Urquinaona de la plaza,

cimiento de la cuestión, y sobre una base cimentada en el derecho histórico de los bienes de las parcialidades, refuta el Dictamen antes citado, y afirma cuál era la verdadera

fue Level complacido en sus aspiraciones. Años después se pudo ver que la razón asistía a Urquinaona, y Level tuvo que ser separado de su cargo de Fiscal.

Aunque se quiso dar a Urquinaona una plaza de Oidor en Granada, Lardizábal desistió de ello, diciendo que era "malo y pariente del de Cádiz", y tampoco se le dió en Valladolid, donde a la sazón había vacante. Tampoco se quiso que siguiera en la Secretaría, "porque allí los liberales pueden hacer mucho mal". Se pensó después, "para no dejarlo desairado y perdido", hacerlo Comisario de Guerra de los Reales Ejércitos, con sueldo de 18.000 reales, preguntándole a que provincia quería ser destinado.

Urquinaona rechazó esa proposición, diciendo que había salido del Ministerio por maquinaciones de los enemigos, y pedía se nombrasen tres ministros para examinar lo que había escrito contra él. Pedía también se le instruyera la correspondiente causa, y si no resultaban cargos contra él, se le rehabilitase.

El Rey en 30-I-1815 pidió a Lardizábal los antecedentes de la salida de Urquinaona del Ministerio. Cumplido lo anterior por Lardizábal, en 1-II-1815 se le ordena a éste pasase los documentos al Presidente del Consejo de Indias, para que nombrase al Conde de Torremuzquiz y a Don José Hevia Bolaños para que examinasen los documentos. Se instruyó causa a Urquinaona, según su expresa voluntad, examinándose por dichas personas 94 expedientes de la Secretaría del Despacho Universal de Indias.

El examen de los documentos dió origen a que los ministros emitiesen por separado y secretamente su dictamen. Urquinaona rechazó el carácter secreto que le impedía conocer de quién provenían las calumnias, y pidió también se le socorriese con el sueldo de que disfrutaba en Secretaría. El Rey mandó se le escuchase en justicia, pasándole mientras tanto el sueldo. Urquinaona reclamaba que no se cumpliera lo mandado por el Rey. Lardizábal se disculpaba de la acusación de no cumplir el mandato real. Finalmente, en 12-I-1818 se tomó una declaración muy extensa y detallada a Urquinaona sobre su actuación en Venezuela. Después de ella la causa quedó en suspenso. El motivo debieron serlo las conmociones políticas de los gobiernos de España. Urquinaona, con gran tesón, seguía presentando escritos y representaciones al Rey. Por ellos se conoce lo ocurrido a Urquinaona los años siguientes.

Separado en 8-I-1815 con el sueldo íntegro de 3.600 reales, concedidos por el Rey como indemnización, pidió licencia para trasladarse a Sevilla a concluir la causa para el reintegro de sus bienes confiscados por los franceses en 1811. La Junta de Sevilla condenó a los detentadores, demandandos desde 1812. Los detentadores recurrieron, consiguiendo la suspensión del proceso, con gran perjuicio de Urquinaona, que se veía interrumpido en sus acciones y excepciones.

El 3-III-1818, estando Urquinaona "postrado de un accidente espasmódico con el facultativo a la cabecera de mi cama", se le notificó que en el plazo de veinticuatro horas saliese de Madrid confinado a Zamora, encargando al Gobernador de ésta la observancia de su conducta.

No obstante haber acreditado su situación, salió escoltado por alguaciles a sufrir la pena de destierro, ignorando el delito sobre que recaía.

Permaneció en Zamora hasta 1820, prodigando desde allí sus peticiones. "Allí supe el manifiesto del Rey que mandaba que le siguiesen todos por la senda consti-

situación de dichos fondos, su pertenencia y propiedad por parte de los indios que integraban dichas Comunidades, y finalmente el carácter inalienable de los mismos.

Empieza su informe Urquinaona señalando que, al decir las Cortes de modo vago e indeterminado, que las acciones del Banco de San Carlos proceden de «un tributo que se

tucional”. Restablecida la Secretaría de Despacho de la Gobernación de Ultramar, fue llamado a desempeñar su antigua plaza, haciendo presente al Secretario D. Antonio Porcel el impedimento que tenía para desempeñar sus funciones, y disponiéndose a ejercerlas, sin perjuicio de seguir la causa de su vindicación pendiente en el Consejo de Indias. Entra en la Secretaría, y por escala rigurosa asciende a Oficial Primero con el sueldo de 5.200 reales de vellón anuales, la Gran Supernumeraria y Distinguida, después de Carlos III.

Exonerados los Secretarios del Despacho por orden de 13-II-1823, fue encargado Urquinaona del de la Gobernación de Ultramar, que dejó cuando fueron repuestos los ministros. Separados después en Sevilla, el Rey le honró con el mismo cargo, y lo desempeñó hasta el mes de mayo, en que solicitó y obtuvo el relevo y traslado del despacho al Secretario de Marina, en cuyas manos estuvo hasta la disolución del gobierno.

Urquinaona siguió escribiendo desterrado en Zamora. Recogió datos y documentos que publica en el libro titulado *“Relación Documentada”*. Monteverde le ataca furiosamente, con lenguaje y acusaciones verdaderamente incalificables. Urquinaona responde con moderación y pruebas. Pero en ellas Monteverde sale mal parado, aunque en algunos casos se pueda observar que Urquinaona tampoco tenía razón en sus juicios.

Otro folleto impreso por Urquinaona es el que titula *“Manifestación de las calumnias producidas por el Excmo. Sr. D. Domingo Monteverde, el Sr. D. Andrés Level de Goda, contra D. Pedro Urquinaona y Pardo, Oficial de la Secretaría de Estado del Despacho de la Gobernación de Ultramar”*, Madrid, 1821. Urquinaona publica aquí íntegras las representaciones que contra él hicieron Monteverde, la contestación que dio el Gobierno, el informe de D. Manuel Fierro, la proclama de Andrés Level de Goda y el informe de Level al Rey.

Unido a éste iba otro folleto titulado *“Epítome de la vida política de D. Andrés Level de Goda, Fiscal de la Hacienda Pública de Venezuela”* (Madrid, 1822). Es la historia de la actuación de Level, su proceso y fuga de Madrid.

La causa de Urquinaona quedó pendiente varios años. El insistía de vez en cuando. En 10-V-1826 se dirigió al Tribunal Supremo pidiendo procediera de oficio al feneamiento de la causa. Luego se dirigió al Rey, lamentándose de su situación, padecimientos y privaciones, lo que motivó una Real Orden mandando se procurase la terminación de la causa.

En 1834 se dio la sentencia definitiva que dice: “se absuelve a Don Pedro de Urquinaona y Pardo de los cargos formados por el ministerio fiscal en su acusación de 25 de febrero de 1818, y se le declara con derecho al reintegro de los sueldos que haya dejado de percibir y le correspondan con sujeción a las reglas que rigen en la materia, sin que la formación de esta causa pueda ofender su opinión y concepto público, ni menos hacerle desmerecer de las gracias que S. M. tenga a bien dispensarle; y se le reserva su derecho para que use de él donde y contra quien viene convenirle”.

paga en las Américas», se referían a un tributo pagado por los indios. Pero los indios nunca habían estado sujetos a más tributo que el personal, consistente en una verdadera capitación, designada así por las leyes, y que no fue establecida «para gastos municipales», sino en reconocimiento del Señorío, que deben como súbditos, y que tenían costumbre de satisfacer a sus Tecles y Príncipes.¹¹ Este tributo era más antiguo que la conquista de América. Moctezuma mismo tributó en reconocimiento a la Corona de Castilla, y los pueblos que le estaban sometidos, y que le tributaban más de la tercera parte de los frutos de sus labranzas, ganados y mercancías, comenzaron desde el principio a contribuir con una módica cantidad en señal de sumisión y adhesión a la Corona española. Al principio, esta contribución no tenía señalada cantidad ni materia, sino que se pagaba en frutos y especies.¹² Por esta razón, en cada provincia o distrito era diversa la especie y la cantidad del tributo. En 1601,¹³ se redujo en todo el Virreinato de Nueva España, y en otras provincias a 32 reales de plata anuales por cada indio que no gozara de exención legal, siendo este número crecidísimo. En América Meridional, era todavía más notable la variedad en la cantidad y administración

¹¹ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente, 1851).

“Mandamos que se les persuada a que por esta razón nos acudan con algún tributo en moderada cantidad de los frutos de la tierra, como, y en los tiempos que se dispone por las leyes de este título”. Ley I. Título V. Libro VI, folio 225. “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias”. Tomo II. Madrid, 1791.

¹² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (Indiferente, 1851). “Sin embargo de estar ordenado que cese, y se quite del todo el servicio personal de los Indios, y hagan tasas de los tributos, reduciéndolos a dinero en los casos permitidos, trigo, maíz, yuca, gallinas, pescado, ropa, algodón, grana, miel y otros frutos, legumbres y especies que hubiere, y cómodamente se cogieren, y pudieren pagar por los Indios, según el temple, calidad, y naturaleza de las tierras, y lugares en que habitan, pues ninguna dexa de llevarlos tales, que no puedan ser estimables, y de algún provecho a la necesidad, uso y comercio humano”. Ley XXV, título V, libro VI, fol. 232. “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias”, tomo II, Madrid, 1791.

¹³ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente, 1851).

de los tributos. En las provincias de Coyaime y Natagaimas se pagaba en oro, sin que gravasen el interés individual de los indios, cuando los de Quito se veían atropellados por los recaudadores, y arruinados con la capitación y cuota, desproporcionada a su estado miserable.

Posteriormente se encargó a las Audiencias la tasación de este tributo en el distrito de su territorio. Resultó de ello una desigualdad general, pues en las provincias de aquel Virreinato de Nueva España, pagan los indios desde un peso fuerte y medio real, hasta 3 pesos, aunque lo más común era pagar 16 reales y medio de plata.

La Ordenanza de Intendentes de Nueva España, de 1786,¹⁴ procuró unificarlo en 2 pesos por cada tributario, desde los 18 a los 50 años, lo que nunca llegó a verificarse, y sí el nuevo sistema de recaudación, establecido a cargo de los justicias, con un 6 % de asignación para ellos.

El «destino primario»¹⁵ de esta capitación fue «asegurar la civilización y doctrina de los indígenas, y atender a la fábrica de las iglesias, vasos sagrados y ornamentos, como que estaba ordenado que no se aplicasen a la hacienda pública, sino lo que sobrase a las cantidades necesarias a tan importantes objetos».

Aparte de este impuesto, directo y personal, no conocieron los indios otro de ningún género, si no es el aumento, con motivo de las necesidades públicas, se decretó para éste en 1591,¹⁶ y que se llamaron Leyes Requinto y Tostón, variando después de nombre y cantidad, y reduciéndose a 4 reales de plata con el del servicio personal.

Después de este certero análisis del tributo, o servicio

¹⁴ Ibid.

Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España. De orden de Su Majestad. Madrid, año de 1786. Arts. 132 y 137.

¹⁵ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente, 1822).

¹⁶ Ibid.

Ley XVI, título V, libro VI, fol. 228. "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", tomo II. Madrid, 1791.

personal del indígena, para distinguir su naturaleza de la de los fondos de Comunidades, pasa Urquinaona a analizar la de éstos, que a su juicio, certero y fundado, «aparece confundida en el extracto que se ha hecho al Diario de Cortes en su sesión de 1 de abril último». ¹⁷

Los fondos de las Cajas de Comunidades, dice Urquinaona, ¹⁸ «proceden de una contribución que se empezó a exigir a los indígenas desde la misma conquista, y que como sólo tenía por objeto obligarlos a adquirir el hábito del trabajo, consistía en el producto que rindiesen 10 brazas de tierra al año, sembradas de maíz, o en lo que se creyó ser su equivalente en dinero, esto es real y medio de plata». ¹⁹

Destacada ya por Urquinaona la diferencia esencial entre los fondos de los tributos y los de las Cajas de Comunidad, siendo aquéllos una señal de reconocimiento y sumisión a la Corona de Castilla, y establecidos éstos para aprovechamiento de los mismos indios, todavía resalta más esta diferencia, si se observa, que entre los muchos destinos que tienen estos últimos, uno es ayudar al pago de los tributos, «cuando la miseria de los contribuyentes les haya impedido pagarlos con exactitud». ²⁰ La Recopilación de Indias decía,

¹⁷ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente, 1851).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

«que cada Indio haya de labrar diez brasas de tierra al año para maíz, en lugar del real y medio, que pagaban a sus Comunidades». Ley XXXI, título IV, libro VI, fol. 222. «Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias», tomo II. Madrid, 1791.

«Debe el Visitador procurar quanto sea posible, que los Indios tengan bienes de comunidad, y planten árboles de estos y aquellos Reynos, porque no se hagan holgazanes, y se apliquen al trabajo para su aprovechamiento y buena policía».

Ley IX, título XXXI, libro II, fol. 483. «Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias», tomo I, Madrid, 1791.

²⁰ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente, 1851).

«Hase de gastar la plata, que resultare de los bienes, censos, y rentas de Comunidad, solamente en lo que se dirigiere al descanso, y alivio de los Indios, y convertirse en su provecho y utilidad, y en lo que hubieren menester para ayudar a pagar la plata de sus tributos, en la forma y cantidad que hasta ahora se ha hecho, sin ser molestados, de forma que de aquellas Caxas no se saque ninguna, si no fuere de consentimiento de los Indios, y para la distribuir y gastar en sus necesidades, y

de forma puntual y pormenorizada, que la plata resultante de los bienes, censos y rentas de la comunidad se gastaría solamente en lo que redundase en descanso y alivio de los indios, y conviniere a su provecho y utilidad en lo que hubiere menester para ayudar a pagar la plata de sus tributos, sin que pudiera sacarse dicha plata sin consentimiento de los indios, y para distribuir y gastar en sus necesidades, y en las otras cosas, para cuyo efecto y fin se fundaron, pero si no fuera para ello, aunque ellos lo consientan no se puede hacer. Lo que tengan que pagar en especies no se les debe suplir de estos fondos, para que con esto acudan al trabajo, y no estén ociosos ni sean vagabundos. Finalmente, los gastos de misiones para extirpar la idolatría de los indios, casas de reclusión, y seminarios de los hijos de los caciques, se podrán sacar de las Cajas de la ciudad donde se hiciesen.

Por todo ello, Urquinaona, al interpretar el Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1822, en su artículo 1.^o²¹ en que declara: «Aplicados de hecho a los establecimientos literarios todos los fondos, acciones y derechos que estaban destinados a la enseñanza activa, cualquiera que sea su origen, naturaleza, cantidad, aplicación anterior, y cualquiera que fuese el establecimiento, colegio, corporación o pueblo a que correspondiesen», considera que pueden «comprenderse en la extensión de este decreto los Seminarios de los hijos de los Caciques, y los colegios de misiones des-

en las otras cosas para cuyo efecto, y fin se fundaron; y si no fuere con estas calidades, aunque ellos lo consientan, no se puede hacer; pero lo que debieren pagar en especie, no se les ha de suplir de estos socorros regularmente, y así se ha de dar a entender a los Indios Caciques, y Corregidores, para que con estos acudan al trabajo, labranza y crianza, y no anden ociosos y vagabundos". Ley 14, título IV, libro VI, fol. 217.

"Los gastos de Misiones para extirpar, y desarraigat la idolatría de los Indios, Casas de reclusión, y Seminarios de los hijos de los Caciques, se podrán sacar de los bienes de Comunidad de la Caja de aquella Ciudad donde se hicieren". Ley XV, título IV, libro VI, fol. 218. "Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias", tomo II, Madrid, 1791.

21. Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente, 1851).

tinados a la instrucción de los indios, y sostenidos por los fondos de comunidades, no parece ilegal ni repugnante aplicarlos al importantísimo ramo de la instrucción pública en aquellas provincias».

Pero es el mismo Urquinaona quien afirma que ²² «los fondos de las Comunidades fueren a la capital del Virreinato, donde un magistrado de la Audiencia, sin intervención ninguna, compraba fincas y las administraba a su placer (así lo expuso el Diputado Don Joaquín Ferrer en la sesión citada), es una aserción que carece de todo fundamento legal». Y esto era cierto, porque se faltaba a dos preceptos legales importantes: a) la voluntad de los indios en orden al destino de dichos fondos; y b) la permanencia de los mismos en la localidad a cuyas parcialidades pertenecían. Más adelante, el propio Urquinaona prosigue: «Los fondos debían ponerse y se ponían en la Caja de cada pueblo, donde hubiese Corregidor, y de lo cual podían imponerse a réditos de una parte, después del reconocimiento hecho por el Oidor Juez, el Fiscal y los Oficiales Reales», prosiguiendo después a transcribir la legislación en orden a los libros que se debían de llevar para los asientos de dichos bienes, la claridad y deslinde de las cuentas e inventarios, en orden a los indios, pueblos y comunidades, y de los censualistas, rentas, etc.

De todo ello se deducía que no podía haber un «juez nato que manejase estos fondos sin intervención alguna, comprando y administrando fincas a su placer». ²³ Los Virre-

²² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822 (A. G. I., Indiferente, 1851).

Leyes IV, V VI. Título IV. Libro VI, fols. 214-215. "Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias", tomo II. Madrid, 1791.

²³ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851). "Conviene que haya Juez particular ante quien pasen las diligencias judiciales de esta cobranza, y tenga cuidado de que los bienes, censos y réditos se recojan y remitan a las Casas, y que los Virreyes del Perú, y Nueva España, en los distritos de su gobierno, y los Presidentes Pretoriales, nombren el Oidor que les pareciere más propósito, al qual podrán remover, y quitar, con causa, o sin ella, todas las veces que convenga

yes o Gobernadores debían nombrar al Oidor que consideraban más idóneo, pudiendo removerlo siempre que por conveniencia del caudal conviniera hacerlo. Pero este Oidor era sólo Juez de primera instancia de los pleitos ordinarios que sobre cobranza y paga de dicha hacienda estuviesen pendientes.²⁴ Lo que sí había era un abogado nato,²⁵ el Fiscal de la Audiencia, defensor y promotor de los negocios de Comunidades, cuya obligación era pedir en las causas de éstas, cuanto creyese conveniente al aumento y seguridad de sus caudales. Así pues, lejos de haber un juez nato que entendiase de estos caudales sin intervención, existía una especie de Tribunal²⁶ compuesto de: Oidor Juez, los Oficiales Reales (para entender en estos negocios daban una fianza especial fuera de la acostumbrada para obtener la tesorería o contaduría), y el Fiscal de la Audiencia. Debían utilizar un escribano nombrado al efecto por el Acuerdo (que no podía llevar derechos a los indios). También debía haber un Alguacil nombrado por el Acuerdo, que no debía entender en otra cosa, y un Cobrador, con igual nombramiento, con conocimiento de censos y comunidades, y que debía depositar 2.000 pesos fuertes de fianza. Este Cobrador debía dar cuenta mensual ante los Jueces y el Fiscal de las

a la buena administración de justicia, y cobro de este caudal". Ley XX, título IV, fol. 219. "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", Tomo II, Madrid, 1791.

24 Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851). "Interviniendo el Oidor en la administración de justicia para el buen cobro de los bienes de Comunidad, tenemos por conveniente concederle toda la facultad, y autoridad necesaria: y así mandamos, que sea Juez en primera instancia de todos los proyectos ordinarios, y ejecutivos, civiles, y criminales, que sobre la cobranza, y paga de esta hacienda estuvieren pendientes, y se ofrecieren; Ley XXI, Título IV, Libro VI, fol. 219. "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", tomo II, Madrid, 1791.

25 Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851). Ley XXII, Título IV, Libro VI, fols. 219-220. "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", tomo II, Madrid, 1791.

26 Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119. Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

Ley XXV, título IV, libro VI, fols. 220-221. "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias", tomo II, Madrid, 1791.

entradas y salidas de la Caja. Liquidadas así las cuentas se pasaban a los Corregidores, que anualmente las pasaban a su vez al Virrey o Gobernador. Estos las trasladaban «al Fiscal, para que manifestase a la Audiencia los defectos que notara, de modo que resultando algún alcance contra el Corregidor, se le juzgaba y condenaba hasta en pena capital por la sustracción de dinero de las Cajas de Comunidad, dice la ley 35, es propiamente hurto». ²⁷

No obstante «lo claro y terminante de estas disposiciones, relativas todas al amparo y protección del caudal propio de los Indios», ²⁸ el Diputado en cuestión, terminó su discurso, al decir de Urquinaona, afirmando «que los caudales impuestos en el Banco, por lo mismo que no pertenecen a ningún particular ni a ninguna familia, deben considerarse como bienes nacionales, y el Estado debe hacerse cargo de ellos, y no dejarlos abandonados, como lo están en la actualidad».

Así pues, tanto del expediente e informe de Urquinaona, como de la legislación indiana, se collige que no existe la menor duda sobre la propiedad de los indios en los bienes de comunidad, y la actitud proteccionista de la Corona con aquéllos. Y así la Ley 10.ª, ²⁹ prohíbe (con cargo de conciencia y apercibimiento, de proceder criminalmente contra

²⁷ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

“La sustracción, que los Corregidores hacen del dinero público, y de Comunidades, con pretexto de sus oficios, es propiamente hurto, y como tal se ha de castigar hasta pena de la vida”. Ley XXV, título IV, libro VI, fol. 35. “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias”, tomo II, Madrid, 1791.

²⁸ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

²⁹ Ibid.

“la hacienda de Comunidad no se defraude, ni embarace a los Indios, y por ningún caso, pensado, o no pensado, extraordinario o fortuito, se pueda librar, ni sacar dinero de sus Cajas en mucha, o poca cantidad, a título de préstamo, aunque se haya de volver luego a ellas, ni para la paga de guardas, edificios públicos, ayudas de costa, ni obras qualesquier necesidades que sean, o se llamen públicas, pues ninguna puede haber mas universal, y privilegiada, que la de los Indios cuya es esta hacienda”: Ley X, título IV, libro VI, fol. 216. “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias”, tomo II, Madrid, 1791.

los transgresores; y de ser condenados a la pena del cuatro tanto), defraudar ni embarazar a los indios la hacienda de comunidad, librar o sacar dinero de sus cajas en mucha o poca cantidad, a título de préstamo, aunque se haya de volver luego a ellas por ningún caso pensado, o no pensado, extraordinario o fortuito, ni para la paga de guardas, edificios públicos, ayudas de costa, ni otras cualesquiera necesidades que sean o se llamen públicas, pues de ninguna puede haber más universal ni privilegiada; ordenándose al mismo tiempo que de esta resolución haya siempre una copia en cada Caja de Comunidad. La Ley 37.^a ³⁰ encarecía a los Virreyes, Presidentes, Oidores y Oficiales Reales la puntualidad en el cobro de réditos de los censos y haciendas de indios.

Finalmente, la Ley 38.^a ³¹ ordenaba que por los Virreyes, Presidentes y Gobernadores, se hiciese restituir en las Cajas de Censos todas las cantidades debidas, y añadía, «que la hacienda pública es en algunas partes el mayor deudor y en más gruesas cantidades, por empréstitos que le han hecho de los bienes de comunidad, no se tome en adelante ninguna cantidad de ellos, y en cuanto a los réditos corridos de las cantidades que se han tomado, se vayan reintegrando hasta quedar libre la hacienda pública de esta obligación».

Pero además de todos los datos que arroja este expe-

³⁰ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

“se consignan con puntualidad las cobranzas ordinarias y corrientes de los censos, y hacienda de Indios, sino que se hagan con efecto de todas las deudas atrasadas, pues no es justo que por omisión, descuido, y fines particulares se hagan de mala calidad, o pierdan las grandes cantidades, que se deben de este género de hacienda”. Ley XXXVII, título IV, libro VI, fol. 223-224. “Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias”, tomo II, Madrid, 1791.

³¹ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

Ley XXXVIII, título IV, libro VI, fol. 224. “Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias”, tomo II, Madrid, 1791.

diente, sigue diciendo Urquinaona,³² «el detenimiento y la escrupulosa circunspección con que desde la misma erección del Banco se ha procedido en esta materia, prueba hasta la evidencia que nunca se había suscitado la más ligera duda sobre la propiedad de las acciones impuestas en aquél por los Indios». Y así en la circular de 26 de marzo de 1783, en que se previno a los Virreyes excitasen a las ciudades, villas y pueblos, para que se interesasen en el establecimiento del Banco en proporción de sus haberes propios y comunes, se mandó:

- 1.º Que el Prior y los Cónsules que recibían los caudales, dieran a los interesados los recibos correspondientes, con la obligación de entregarles a su tiempo las acciones que remitiese el Banco, y que dichos caudales viniesen libres de derechos.
- 2.º Que se le remitieran a los indios los oportunos certificados.
- 3.º Que se les pagara el dividendo correspondiente.
- 4.º Que se dieran providencias encaminadas a que no se practicara exacción alguna sobre dichos valores, sin el consentimiento de los indios.
- 5.º Que para facilitar el reintegro del producto de las acciones a las Cajas de Comunidad, se estableció (Real Orden de 25-X-1787) que se satisficiera de las rentas de alcabalas, tabaco, pólvora y naipes, en caso de que faltaran fondos en las de tributos, donde estaban consignados los pagos.

Por todo ello Urquinaona llegaba a la conclusión de que:

- 1.º Los fondos de las Cajas de Comunidades no proceden de un tributo que los indios acostumbran a pagar para

³² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

- gastos municipales, sino de una contribución imperceptible, establecida con el doble y filantrópico objeto de vencer la natural propensión de los indios al ocio y a la embriaguez, y establecer un fondo para su aprovechamiento, como establecía la ley.
- 2.º Que no eran los capitales, sino los réditos y ganancias los que se enviaban a la cabeza del Virreinato, donde no los manejaba un juez nato, sin intervención alguna, sino un tribunal compuesto por un Oidor de la Audiencia, los Oficiales Reales, el Fiscal Togado, con su Cobrador, Escribano y Alguacil.
 - 3.º Dichos fondos no sólo pertenecen a una familia, sino que son propiedad incuestionable y sagrada, exclusiva de una familia compuesta de miserables, y favorecida por las leyes con privilegios, como ninguna otra disfruta en la Monarquía Española, y que deberán mirarse eternamente como justísima compensación de su estado.

De lo anteriormente expuesto, deducía Urquinaona ³³ que para la completa instrucción del expediente era indispensable:

- 1.º Pedir al Ministerio de Gracia y Justicia los antecedentes correspondientes a la inversión o depósito de los dividendos de las acciones del Banco en 1800 y 1801, cobrados, y no satisfechos a las Cajas de Comunidad.
- 2.º El testimonio por los Directores del Banco de los dividendos correspondientes a 1789, 1802, 1803 y 1804.
- 3.º Reclamar en la Secretaría del Despacho de Hacienda el reintegro de 1.343.000 reales de vellón en inscripciones de la deuda consolidada, con los réditos correspondientes al tiempo que han subsistido en la Hacienda Pública, es decir desde agosto de 1821.

³³ Ibid.

Sólo así pensaba Urquinaona, podrá presentarse a las Cortes con claridad y exactitud debida, no sólo la propiedad de los indios, sino el estado y cantidad de sus fondos.

El informe, parece fechado en 25 de septiembre de 1822,³⁴ y el 1 de octubre del mismo año hay una nota al margen que dice: «Como se propone». El día 17 del mismo octubre, los Directores del Banco de San Carlos evacuaban el informe que se les había solicitado.³⁵

Distribución de las acciones del Banco Nacional de San Carlos entre los pueblos de indios de Nueva España

La distribución de las acciones entre los pueblos de indios de Nueva España, al recibirse la Real Orden de 25 de septiembre de 1785, en que se mandaba suspender la remisión de caudales para imponer en el Banco, era la siguiente:³⁶

	ACCIONES
San Juan y Santiago y pueblos adyacentes a la capital de México	200
73 pueblos de Oaxaca	189
Los pueblos de Tepejé de la Seda	86
Los pueblos de Huajuapa	64

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

El informe decía:

a) en 1783 el Banco no hizo repartimiento alguno.

b) en 1802 lo verificó de 85 reales en efectivo por cada año acción, e importe 114.155 reales de vellón, lo cobró en septiembre de 1803 Don Alonso Cenón.

c) en 1803 fue de 85 reales por acción en vales, y ascendió a 114.155 reales, los percibió el Tesorero General en mayor partida de 3-VI-1809.

d) en 1804 se hicieron 2 repartos, uno de 40 reales y otro de 45 por cada acción en efectivo, ascendiendo el primero a 93.720 reales y se pagó a Don Basilio Antelo y Llorente en 17-IV-1816, y el segundo importó 60.435 reales y los cobró en 30-X-1817 él mismo.

e) en 1805 se dieron 30 reales por cada acción, ascendiendo a 40.290 reales que percibió en 27-III-1819 Don Basilio Antelo Llorente.

³⁶ Ibid.

Los de la Provincia de Yhualapa	46
Los de Santiago de Querétaro	60
Los de Zacatlán de las Manzanas	66
Los de Tetela del Río	54
Los de Yxtepexí	29
Los de Orizaba	17
San Juan del Río y sus anexos	16
Las Repúblicas de Miahuatlán	80
Las Repúblicas de Hosasalca y Chulchota	65
Los pueblos de Acatlán	33
Los de Maravatío y San Juan de Zitaquaro	73
Los de las Minas de Tasco	32
Los de Xiliquilpan	49
Los de San Luis de Potosí	30
Los de Tentila	90
Total acciones	1.343

**Rendimiento de las acciones de las comunidades
de indios desde 1784 hasta 1819**

Los rendimientos de las 1.343 acciones de las Comunidades, y su distribución desde 1784 a 1819 es la que sigue, señalándose también la forma de hacerse efectivas, y las distintas vicisitudes que cada una de ellas experimentó.³⁷

RS. MRS.

1784-1785:

- a) Las ganancias correspondientes a las Parcialidades de San Juan y Santiago, ascendieron a: 61.355.19
- b) Se rebajó el 2 % de comisión para Don Agustín de Cean Bermúdez, a propuesta de Jovellanos.

³⁷ Ibid.

RS. MRS.

- c) La cantidad se libró por los Directores del Giro del Banco contra la Caja de Descuentos de Cádiz, cuyos encargados pusieron el dinero a disposición del Depositario General de Indias, para que lo remitiese a las Parcialidades.
 - d) La mayoría de las Comunidades hicieron sus imposiciones con posterioridad, por lo que muy pocas alcanzaron dividendos en estos dos primeros años.
 - e) Parte de este dividendo se empleó en completar más acciones, resultando a favor de las Comunidades: 114.461 depositados en la Depositaria General de Indias.
 - f) Por resolución real de 1786, se archivaron en el Banco las acciones originales, remitiéndose al Virrey certificados autorizados por los Directores del Establecimiento, como se había hecho siempre con las acciones pertenecientes a vínculos, patronatos y obras pías.
 - g) En 31 de mayo de 1786 se avisó al Virrey de Nueva España, previniéndole hiciese pagar a las parcialidades interesadas sus respectivos contingentes por las tesorerías más inmediatas a los pueblos accionistas, con intervención del Fiscal de la Audiencia, y Protector de Indios.
- 1786: a) La totalidad de acciones de los indios produjeron: 180.204

RS. MRS.

- b) La Caja de Descuentos de Cádiz entregó al Depositario General esta cantidad, que el Rey mandó aplicar al fondo de la Fábrica de Artillería de Ximena, con calidad de reintegro que se mandó efectuar al Virrey de Nueva España, previniéndole en R. O. de 4-II-1787 repartiese igual cantidad entre las Parcialidades de Indios interesadas con puntual arreglo a los estados que se le remiten.
 - c) Con R. O. de 8-VII-1787 se enviaron 20 reconocimientos o certificados de las acciones, quedando los originales archivados en el Banco.
- 1787: a) El dividendo de las acciones ascendió a: 131.714
- b) El Banco lo libró a favor del Depositario General de Indias, y éste en virtud de R. O., lo endosó a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, para que incluyesen esta cantidad en los caudales de la Hacienda Pública de Indias.
 - c) Por Real Orden de 17-IV-1788 se previno al Virrey de Nueva España hiciese el reparto del caudal entre los interesados, conforme al estado que se le acompañaba.
- 1788: a) Dividendo de las acciones: 131.614
- b) Se ejecutó igual que en 1787, enviándosele al Virrey el estado descriptivo con Real Orden de 8-V-1789.
- 1789: No hay noticia en el expediente, ni se sabe si hubo producto este año.

RS. MRS.

- 1790: a) Dividendo de las acciones: 131.614
- b) Se ejecutó como en años precedentes, remitiéndose al Virrey la Real Orden en 27-III-1792, con el estado acostumbrado.
- c) Se giró letra³⁸ contra la Caja de Descuentos de Cádiz a favor de Don Rafael de Orta, Tesorero de la Real Hacienda en esta ciudad.
- d) Se ordenó al Virrey de Nueva España que las Cajas del Virreinato entregaran dicha cantidad a las parcialidades.
- 1791: a) Dividendo de las acciones: ³⁹ 131.614
- b) Se negoció el dividendo con el Conde de Tepa, cuyo apoderado recibió en Cádiz esta cantidad, y la libró con el premio de 8 % a favor del Virrey contra los administradores de sus rentas en México, a cuyo efecto se remitió a aquél la libranza con Real Orden de

³⁸ Marqués de Bajamar a Diego Gardoqui, en Aranjuez a 8-II-1792. (A.G.I., Indiferente 1849).

Marqués de Bajamar a Don Francisco Montes, Tesorero General, en Aranjuez a 11-II-1792. (A. G. I., Indiferente 1849). Francisco Montes a Diego Gardoqui, en Madrid a 28-II-1792. (A. G. I., Indiferente 1849).

Diego Gardoqui a Marqués de Bajamar, en Aranjuez a 1-III-1792. (A. G. I., Indiferente 1849).

Minuta de Real Orden al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 1-III-1792. (A. G. I., Indiferente 1849).

Estadillo de 26-I-1792, en Madrid, por José Cifuentes, sustituto de Jovellanos, con el detalle de las ganancias de 1.343 acciones en 1790, nombre de los pueblos, cantidades, etc. (A. G. I., Indiferente 1849).

Real Orden al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 17-III-1792. (A. G. I., Indiferente 1850).

El Conde de Revillagigedo, Virrey de México, al Rey, en México a 30-VI-1792. (A. G. I., Indiferente 1850).

³⁹ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

RS. MRS.

22-III-1793, por 142.143 reales de vellón.

- 1792: a) Dividendo de las acciones: 131.614
- b) Se negoció igual que en 1791, es decir con el premio de 8 % del Rey, alcanzando 142.143 reales de vellón.⁴⁰
- c) Se resolvió por el Rey⁴¹ la creación de la Universidad de Mérida de Yucatán. La Junta de Comisión para la formación de Estatutos propuso gravar las rentas o fondos de las Comunidades de Indios de toda la provincia con 1.825 pesos anuales. Se supo por los Oficiales Reales que habían remitido 50.000 pesos para imponer en el Banco Nacional de San Carlos, Compañía de Filipinas u otra parte. En el Consejo de Indias se carecía de noticias sobre el particular, así como de los productos rendidos, y de los rendimientos anuales, pidiendo se le comunicara lo que hubiere sobre el particular.
- 1793: a) Dividendo de las acciones:⁴² 118.452.21
- b) El Banco los giró a favor del Obispo Electo de Puerto Rico, Fr. Juan Bautista de Zengotita, de la Orden de la Merced Calzada,⁴³ que dio letra de

⁴⁰ Real Orden al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 22-III-1793. (A.G.I., Indiferente 1850).

⁴¹ Antonio Ventura de Taranco al Marqués de Bajamar, en Madrid a 15-II-1792. (A. G. I., Indiferente 1850).

Molina Solís, Juan Francisco: *Historia de Yucatán durante la dominación española*, tomo III. Mérida, 1913, págs. 549-592.

⁴² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁴³ Real Orden al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 26-IX-1795. (A. G. I., Indiferente 1850).

Marqués de Branciforte, Virrey de Nueva España a Don Eugenio Ilaguno y

RS. MRS.

igual cantidad, con premio de 10 % contra Don Antonio Basoco, su Apoderado en México, Caballero de la Orden de Carlos III, Prior entonces del Consulado de aquella capital.

- c) Se remitió al Virrey un Libramiento de 6.514 pesos fuertes, 9 reales, 4 cuartos, contra el mismo Basoco, para que el Virrey dispusiera su cobro y entregara a cada Parcialidad lo que correspondiere según la nómina de sus acciones.
- d) El Consejo de Indias,⁴⁴ en 1793, elevó en Pleno de 3 Salas una Consulta al Rey, proponiendo se nombrase apoderado de las Parcialidades de Indios a un ministro de dicho Consejo, en atención a que las Leyes de Indias le encomendaban el cuidado de la Hacienda de sus naturales, ya que era práctica de otros Consejos, señaladamente en el de Castilla. El Rey no se conformó con la dicha Consulta.

- 1794: a) Dividendo de las acciones: 118.452.21
- b) El Banco los libró contra el Depositario General de Indias, y éste endosó a favor del Conde de Casa Flores, que exhibió libranza de igual cantidad contra el Apoderado de sus rentas en México Don Gabriel Gutiérrez de Te-

Amirola, Ministro de Indias, en México a 26-II-1796. (A. G. I., Indiferente 1850).

Vínculo fundado por Don Eugenio y Don Andrés Llaguno y Amirola. Poseedora Doña Ignacia Llaguno y Amirola, 32 Acciones del Banco Nacional de San Carlos, 1786. (Archivo del Banco de España, en Madrid, Legajo 597, núm. 3).

44. Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

RS. MRS.

rán⁴⁵ con el premio de 10 %, alcanzando 130.297 reales, 21 maravedíes de vellón.

- c) En Real Orden de 10 de febrero de 1796 se remitió letra al Virrey⁴⁶ para que repartiese el dividendo entre los accionistas, según el estado que se le remitió.

1795: a) Dividendo de las acciones: 118.871.31

- b) Se adjudicó este dividendo al Conde de Castro Torreño, vecino de Madrid y marido de la Marquesa de Sonora,⁴⁷ por haber ofrecido el 18 % de premio. La diferencia del premio con el año anterior estaba en la guerra con los ingleses, que dificultaba el tráfico marítimo. Don José María Fagoaga había ofrecido el 12 % de premio.

- c) Por Real Orden de 14-VII-1797 se libraron 131.908 reales, 24 maravedíes de vellón contra Don Francisco Fer-

⁴⁵ Llaguno y Amirola, Ministro de Indias al Conde de Casas Flores, en Aranjuez a 17-I-1796. (A. G. I., Indiferente 1850).

Casa Flores a Llaguno y Amirola, en Badajoz a 1-I-1796. (A. G. I., Indiferente 1850).

Real Orden al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 10-II-1796. (A. G. I., Indiferente 1850).

Marqués de Branciforte, Virrey de Nueva España, a Llaguno y Amirola, en México a 26-VI-1796. (A. G. I., Indiferente 1850).

⁴⁶ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁴⁷ Real Orden al Virrey de Nueva España, en Madrid a 14-VII-1797. (A.G.I., Indiferente 1850).

Expte. de 105 acciones del Banco Nacional de San Carlos, dejadas por Don José de Gálvez a su viuda la Marquesa de Sonora, Doña María de la Concepción Valenzuela, y a su hija Doña María Josefa de Gálvez y Valenzuela. Sobre que estaban empeñadas y su amortización. (Archivo del Banco de España, en Madrid, Legajo 641, núm. 234).

Marqués de Branciforte a Llaguno y Amirola, en Orizaba a 30-X-1797. (A.G.I., Indiferente 1850).

RS. MRS.

nández de Córdoba, Superintendente de la Casa de la Moneda de México, para que lo cobrara y distribuyera entre las Parcialidades correspondientes.

- 1796: a) Dividendo de las acciones: ⁴⁸ 118.452.21
- b) Se entregaron al Apoderado de la Real Academia de San Carlos de México, librándose por Real Orden de 27 de diciembre de 1798, para que el Virrey pagase a los indios de los fondos académicos, con arreglo al estado que se le remitió. ⁴⁹

⁴⁸ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁴⁹ Antonio Porcel, Oficial Mayor que fue de la Secretaría de Despacho de Gracia y Justicia, y Depositario de los Caudales que tenía en ella la Real Academia de San Carlos de México, al Ministro de Indias, en San Lorenzo a 12-XII-1798. (A. G. I., Indiferente 1850).

Examinadas las cuentas se hallaron corrientes y justificadas las partidas de cargo por lo que fueron aprobadas. El alcance de 489 reales y 10 maravedies de vellón lo entregó el Oficial Mayor D. Juan Antonio de León, comisionado para este encargo.

Obligaciones de la Academia: 10.000 reales anuales por alquiler casa habitación del Director Don Cosme de Acuña, y los pensionados que han de venir; 20 reales diarios de sueldo de Acuña; 10 reales diarios de pensión de Pablo de la Vega; 15.000 reales que debe a Don Francisco Javier Ramos, pintor de Cámara del Rey, de un cuadro que le encargó y ya se le remitió. Carrillo y Gariel, Abelardo: *"Las Galerías de Pintura de la Academia de San Carlos"*, México, 1944, pág. 23. "no fue este el único cuadro pedido a Ramos Francisco Javier, pues en 1793, y por conducto de Tolsá, la Academia encargó a ese artista que pintase una pintura de 10 pies de alto por 7½ de ancho, cuyo asunto dejó a su elección, habiendo escogido la segunda aparición del Señor a sus Apóstoles. Esta obra fue valuada por Maella en 15.000 reales vellón, por lo que liquidados por la Academia, el lienzo fue remitido de Cádiz en el navío de S. M. San Ildefonso, el año de 1799.

Otras deudas dimanadas de varios encargos. Para todos estos gastos son precisos fondos que no pueden enviarse por razón de la presente guerra. Para proporcionarlos puede ordenar el Ministro se tomen del Banco Nacional los 118.428 reales, 21 maravedies de vellón, dividendo de 1796 de las Parcialidades de Indios de Nueva España.

De letra del Ministro: "S. M. aprueba todo lo que propone la mesa y quiere que así se ejecute".

Real Orden al Virrey de Nueva España, Viceprotector de la Academia de San Carlos, en Madrid a 27-XII-1798. (A. G. I., Indiferente 1850).

RS. MRS.

- 1797: a) Dividendo de las acciones: ⁵⁰ 111.871.21
- b) Se libró el dividendo de las acciones a Don Rafael de Orta, Depositario de Indias ⁵¹ sin que se encuentre en el expediente información de haberse librado la cantidad a las Parcialidades. ⁵²
- 1798: a) Dividendo de las acciones: ⁵³ 120.870
- b) Fue percibido en Madrid por el Coronel Don Andrés López, Director del Real Seminario de Nobles de Madrid.

Miguel José de Azanza, Virrey de Nueva España, a José Antonio Caballero, Ministro de Indias, en México a 26-VI-1799. (A. G. I., Indiferente 1850).

Angulo Iñiguez, Diego: *La Academia de Bellas Artes de México y sus pinturas españolas*, Sevilla, 1935, 113 págs.

⁵⁰ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁵¹ Ganancias de las 1.343 acciones de las Parcialidades de Indios en 1796 y 1797. En Madrid a 30-X-1798. (A. G. I., Indiferente 1850).

José Antonio Caballero, Ministro de Gracia y Justicia a Miguel Cayetano Soler, en Palacio a 26-XII-1798. (A. G. I., Indiferente 1849).

Comunicarle acaban de depositarse en Arcas Consejo Indias, a disposición del Ministerio 266.855 reales, 1 maravedí de vellón, cantidad líquida correspondiente a varias Parcialidades de Indios de Nueva España, por los intereses correspondientes a 4 dividendos de la Compañía de Filipinas, cantidad que ha resuelto el Rey pase a la Tesorería General, satisfaciéndose a las Parcialidades por las Reales Cajas sin aumento.

Miguel Cayetano Soler a José Antonio Caballero, en Palacio a 27-XII-1798. (A. G. I., Indiferente 1849).

Nota adjuntando libranza a Felipe González Vallejo, Tesorero General, en Palacio a 27-XII-1798. (A. G. I., Indiferente 1849).

Carta de Pago expedida por Francisco de Paula Rodríguez, Tesorero Mayor de Hacienda, en Madrid a 15-I-1799. (A. G. I., Indiferente 1849).

Francisco de Paula Rodríguez pasa carta de pago a Miguel Cayetano Soler, en Madrid a 21-I-1799.

⁵² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁵³ Real Orden al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 26-IX-1799. (A. G. I., Indiferente 1850).

El Virrey de México Don Félix Berenguer de Marquina a José Antonio Caballero, en México a 15-V-1800. (A. G. I., Indiferente 1850).

José Antonio Caballero a Miguel Cayetano Soler, Ministro de Indias, en San Ildefonso a 26-IX-1799. (A. G. I., Indiferente 1849).

RS. MRS.

El Rey mandó que dicha cantidad se distribuyera entre las Parcialidades, sin la rebaja del 2 % que se hacía a beneficio del apoderado.

- c) En consulta al Consejo de Indias se comunicó que el Virrey de Nueva España había dado cuenta de la providencia acordada por la Junta Superior de Propios de México, para que se reintegraran los 120.870 reales de vellón entregados en Madrid al Director del Seminario de Nobles, pertenecientes a las Parcialidades de Indios de Nueva España, a razón de peso fuerte por peso sencillo, habiéndose mandado depositar el exceso hasta la resolución real. Pedido informe al Director del Seminario, lo evacuó el segundo, Don Manuel Balbuena, que hizo presente la anterior resolución debía entenderse sin descuento alguno contra el Seminario, puesto que en ella nada de esto se expresaba. Alegaba además los privilegios a que es acreedora una casa de educación, que ha perdido grandes cantidades con el atraso en el cobro de sus rentas.
- d) El Rey resolvió se entregara la cantidad al Coronel Don Andrés López, Director del Real Seminario de Nobles de Madrid. Dicha cantidad se habría de sacar de los caudales pertenecientes al Seminario existentes en las Reales Cajas de México, por la pensión

RS. MRS.

de 12 pesos fuertes que goza el ramo de las Vacantes Mayores y Menores eclesiásticas de México para que se reparta entre las expresadas Parcialidades en la debida proporción.

- 1799: a) No hubo utilidades.⁵⁴
 b) Se nombró a Don Antonio Porcel Apoderado de las Parcialidades de Indios.
- 1800: a) Dividendo de las acciones: 134.300
 b) Se mandaron entregar en Vales Reales 100.000 reales al Director del Seminario de Nobles de Madrid, Don Andrés López.⁵⁵ El resto de 34.300 quedaron en la Secretaría de Gracia y Justicia, a disposición del Ministro en vales.
 c) Por Real Orden de 25 de septiembre de 1801 se encargó al Virrey reintegrarse los 100.000 reales a los interesados.
 d) Reconocido el Archivo⁵⁶ no apareció documento que acreditara la inversión ni el pago de los 34.300 reales resultantes.
- 1801: a) Dividendo de las acciones 114.155
 b) Por Real Orden de 17 de abril de 1803,⁵⁷

⁵⁴ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁵⁵ Real Orden al Virrey de Nueva España, en San Ildefonso a 25-IX-1801. (A. G. I., Indiferente 1850).

El Virrey de México Berenguer de Marquina a José Antonio Caballero, en México a 27-III-1802. (A. G. I., Indiferente 1850).

⁵⁶ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁵⁷ Real Orden al Virrey de Nueva España, en Aranjuez a 17-IV-1803. (A. G. I., Indiferente 1850).

José de Yturriagaray, Virrey de México, a Miguel Cayetano Soler, en México a 27-VII-1804. (A. G. I., Indiferente 1850).

Acusa recibo de la anterior y dice: "Hecha por la Contaduría General de Propios la operación correspondiente, la mandó pasar al Fiscal de la Real Hacienda

RS. MRS.

dirigida al Virrey de Nueva España, la cantidad asignada en dicho año era de 120.870 reales. A ella se unen 34.300 reales, cobrados en vales por acuerdo de la Junta de accionistas y depositados en la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias. Con ello la cantidad ascendía a 155.170 reales de vellón.

- c) Se entregaron ⁵⁸ 60.000 reales al Director del Seminario de Nobles de Madrid, y 40.000 al Apoderado de la Real Academia de San Carlos de México.
 - d) Reconocido el Archivo, no aparece documento alguno que acredite la inversión, ni el pago de los 14.155 reales que resultan a favor de las Parcialidades de Indios.
- 1802: a) Dividendo de las acciones: ⁵⁹ 114.155
- b) Se deposita el dividendo en el Ministerio de Indias, con excepción de 40.000 reales de vellón que se toman en calidad de reintegro por cuenta de la Real Academia de San Carlos en el Ministerio de Gracia y Justicia. Dicha cantidad se entregue en México por la

encargada de la Protectoría de Indios, y en su vista pidió, que mediante a hallarse en vales reales dichas utilidades, hiciese yo presente al Rey Nuestro Señor la miseria de los infelices indios interesados en estos bienes para que en consideración a ella se dignase su Real Piedad concederle la gracia de que se les abonen en dinero o se conviertan a él los vales con la menor pérdida posible, librándose su importe a las Cajas Reales de esta capital para que se distribuya lo que corresponde a cada pueblo en sus respectivas Arcas de Comunidad".

Yturriary a José Antonio Caballero, en México a 27-VII-1803. (A. G. I., Indiferente 1850).

⁵⁸ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁵⁹ Yturriary a José Antonio Caballero, en México a 26-II-1804. (A. G. I., Indiferente 1850).

RS. MRS.

Academia, y reparta entre los accionistas.

- c) En el expediente ⁶⁰ no hay noticias de este dividendo.

1803: No hay noticias del dividendo.

1804: a) No hay noticias del dividendo.

- b) Sin duda existía una demora en el reintegro de las cantidades percibidas por particulares e instituciones. Así en Real Orden dirigida al Director del Seminario de Nobles de Madrid, ⁶¹ de acuerdo con lo propuesto por el Fiscal Protector de Indios sobre «las necesidades que padecen las Parcialidades interesadas en el Banco Nacional, por el considerable atraso de las remesas de sus respectivos dividendos, y queriendo que esta parte privilegiada de sus amados vasallos reciba con puntualidad unos auxilios que además de debérseles en justicia pueden contribuir mucho a la prosperidad y fomento de aquellos pueblos; se ha servido resolver se prevenga a V. S. que a la mayor brevedad ponga en la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia los 60.000 reales de vellón en metálico, que percibió en 2 de marzo de 1804, con calidad de reintegro en México, para ocurrir a las urgencias de la

⁶⁰ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁶¹ Real Orden al Director del Seminario de Nobles, en Aranjuez a 15-II-1805. (A. G. I., Indiferente 1850).

Andrés López de Sagastizábal a José Antonio Caballero y al Virrey de Nueva España, en Madrid a 18-II-1805. (A. G. I., Indiferente 1850).

RS. MRS.

casa con motivo del fuego que padeció, y caso de no poder verificarlos, me remita por triplicado el correspondiente libramiento». Con él se comunicaría la correspondiente orden al Virrey, para que sacara la cantidad de lo existente en Cajas Reales, de lo devengado de la pensión que goza el Seminario en el Ramo de Vacantes, y lo reparta proporcionalmente entre las parcialidades. El Director del Seminario de Nobles, Don Andrés López de Sagastizábal, al acusar recibo de la R. O. anterior y promete ponerla en ejecución, «no obstante la extrema escasez de dinero y recursos en que se halla esta Real Casa».

1805-1820:

- a) Los Directores del Banco Nacional ⁶² pidieron en oficio de 12-XII-1820 se nombrase un representante de las Parcialidades de Indios.
- b) Se nombró representante a Don Fernando Méndez Queipo de Llano.
- c) Méndez Queipo de Llano concurrió a la Junta de accionistas de 18 de enero de 1821. En ella se convino y acordó la Resolución Real por la que se repartía a cada acción 1.000 reales de vellón en crédito liquidado contra el estado procedente de deuda con interés, en la siguiente forma:

⁶² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Registro General, núm. 119, Madrid, 1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

RS. VON.

1805:	Por el resto del dividendo acordado ya, correspondiente a dicho año	37
1806:	Por cada acción	84
1807:	» » »	90
1808-1819:	60 reales cada año por acción	720
1820:	los restantes	69
completándose así los		1.000

En esta proporción cupo, y se adjudicaron 1.343.000 reales de vellón ⁶³ a las 1.343 acciones de los indios, en 67 inscripciones de 20.000 reales cada una, y otra de 3.000 de la Deuda Consolidada, que se entregaron al referido Méndez Qulepo de Llano.

Por Real Orden de 30 de mayo de 1821 fueron trasladadas al Ministerio de Ultramar, y endosadas a la orden del Oficial Mayor Don Antonio Guillemán. Se acusó recibo a las referidas inscripciones en 14 de junio de 1821.

Los dividendos anotados de 1784 a 1820, con exclusión de 1789, 1803 y 1804, de que no hay noticias en el expediente, ganaron a las Cajas de Comunidades en el Banco de San Carlos: 3.130.09 reales, de los cuales, 1.626.471 fueron librados, y 1.503.626 no resultaron satisfechos ni librados.

Don Basilio Antelo, ⁶⁴ Oficial Mayor de la Secretaría de Gracia y Justicia, dejó el 18 de mayo de 1820, 34.925 reales y 12 maravedíes de vellón, procedentes de estos fondos, en poder de Don José Martínez, portero, el cual entregó al portero Zarauza, de Gracia y Justicia 3.000 reales, y al Oficial Mayor, Don Antonio Guillemán, 30.000 reales. Quedaban en poder de Martínez 1.925 reales, como constaba de los recibos que tenía en su poder.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

También se reconocía ⁶⁵ que de los 248.455 reales de vellón a que ascendían los dividendos correspondientes a 1800 y 1801, sólo se libraron a favor de las comunidades interesadas 200.000 reales, quedando el resto a cargo de la Secretaría de Gracia y Justicia, con la distribución que arriba se hace.

Don José Manuel de Vadillo, Secretario de la Gobernación de Ultramar, ⁶⁶ al reconocer el expediente de 1.343 acciones de las Comunidades de Indios, impuestas en el Banco de San Carlos, nota la falta de los dividendos correspondientes a 1789, 1802, 1803 y 1804. Y comunica a los Directores del mencionado Banco que el Rey ha pedido se informe lo que resulte de los libros del mismo sobre el particular.

**Intento de disponer de las acciones de
las Comunidades para un gasto secreto**

El propio Vadillo se dirigió en la misma fecha al Secretario interino del Despacho de Hacienda, ⁶⁷ diciéndole: «Para ocurrir a la necesidad de un gasto secreto, y por Real Orden de 6 de agosto de 1821, comunicada a esta Secretaría por la del Despacho de la Gobernación de la Península, el Rey se sirvió disponer de 1.343.000 reales de vellón, que las comunidades de indios de Nueva España tenían depositadas en este ministerio de mi cargo en inscripciones de la Deuda Consolidada, previniendo al mismo tiempo su reintegro de la partida de gastos eventuales señalada en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y resultando ser estos fondos una propiedad de las Cajas de Comunidad,

⁶⁵ José Manuel de Vadillo, Secretario de la Gobernación de Ultramar, Sección de Gobierno, Negociado Económico, Cajas de Comunidades, núm 119; al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, en Palacio a 1-X-1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁶⁶ José Manuel de Vadillo a los Directores del Banco Nacional de San Carlos, en Palacio a 1-X-1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁶⁷ José Manuel de Vadillo al Secretario interino del Despacho de Hacienda, en Palacio a 1-X-1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

inherentes a las atribuciones de este Ministerio, espero que V. E. se sirva disponer el reintegro de las referidas inscripciones, según se previno en la citada Real Orden».

Todo ello se verificó, como estaba previsto,⁶⁸ comunicándose al Ministerio de Hacienda para que dispusiese el reintegro a la Secretaría de la Gobernación de Ultramar, a la mayor brevedad. Siguiendo este criterio, las Cortes de 1 de abril de 1822 aprobaron la incorporación al Estado de las acciones del Banco de San Carlos, impuestas de caudales de Propios y Pósitos de la Monarquía, haciéndose extensiva esta resolución a las acciones y créditos de las Comunidades de indios. Con este motivo se hizo por la Secretaría de la Gobernación de Ultramar una reseña histórica de la naturaleza y propiedad de dichos fondos, impuestos en dicho Banco de San Carlos, que las Cortes creyeron un tributo destinado a gastos municipales.

En 14 de diciembre de 1822⁶⁹ se repitió el oficio de 1 de octubre de 1822, pidiendo el reintegro de 1.343.000 reales de inscripciones equivalentes a 1.343 acciones del Banco de San Carlos, pertenecientes a las Comunidades de Indios. Y se encareció la urgencia de la contestación de dicho Ministerio, para dar la correspondiente a la Junta Directiva del Crédito Público que reclamaba dichas inscripciones. Así se esperaba quedarse terminado dicho incidente.

La contestación del Ministerio de Hacienda⁷⁰ daba cuenta de haber pedido informe a la Tesorería General y Contaduría de Distribución, que manifestó, conformándose con el Dictamen del Contador General de Indias, que las Comunidades se interesaron en la erección del Banco Na-

68. Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. El Secretario de Ultramar, en Palacio a 8-XII-1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

69. Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Secretario de Despacho de Ultramar al Secretario Interino del Despacho de Hacienda, en Palacio a 14-XII-1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

70. Ministerio de Hacienda. Sección 5.ª Secretaría del Despacho de Hacienda al Secretario de Despacho de la Gobernación de Ultramar, en Palacio a 22-XII-1822. (A. G. I., Indiferente 1851).

cional, y de ahí provenían las citadas inscripciones. En aquel momento nada interesaba que se depositaran dichas inscripciones en la Secretaría de Despacho de la Gobernación de Ultramar, sino que quedaran en la Tesorería General de la Nación, caso de pensarse en su reintegro, innecesario entonces por las circunstancias políticas de Nueva España. Cuando éstas mejorasen la nación debería responder a los dueños del capital, sin tener que hacer en aquel mismo momento negociaciones inútiles, que le obligaban a distraer los escasos fondos para cubrir atenciones de larga espera. Para ello se consideraba suficiente adoptar las oportunas disposiciones acreditativas de que la Nación era deudora a las Comunidades de Indios de la cantidad producida en efectivo o papel por las referidas inscripciones, para reintegrarlo en su caso o lugar, y pasar noticia de todo ello al Ministerio, para su debida formalidad. Antes de resolver sobre la materia, el Rey quiso que se oyera a la Secretaría de Despacho de la Gobernación de Ultramar. Esta respondió ⁷¹ haciendo historia de la cuestión, e indicando a la Junta Directiva del Crédito Público ⁷² la dificultad de la decretada incorporación de las acciones, «si las Cortes, a cuya nueva decisión tiene que someterse el asunto, reconocen estos fondos como una propiedad de las parcialidades de Indios».

La Junta Directiva del Crédito Público respondió al Secretario de Despacho para la Gobernación de Ultramar, ⁷³ diciéndole había recibido una exposición del Comisionado

⁷¹ Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Secretaría de Despacho de Ultramar al Secretario Interino del Despacho de Hacienda, en Palacio a 3-I-1823. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁷² Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. El Secretario de Despacho de Ultramar a los Señores de la Junta Directiva del Crédito Público, en Palacio a 3-I-1823. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁷³ La Junta Directiva del Crédito Público. Jacobo María de Parga, Ramón de Llano y Chavarri, Joaquín de Yrazabal, al Secretario de Despacho de la Gobernación de Ultramar, en Madrid a 5-III-1823 (A. G. I., Indiferente 1851).

Especial de Incorporación,⁷⁴ reclamando con urgencia el traslado de las acciones de las Parcialidades de Indios a dicho establecimiento. Las razones alegadas eran que «si en todas las ocasiones deben los empleados públicos poner a cubierto los bienes de la nación, cuyo manejo se ha puesto a su cargo, en ninguna, con más razón, que cuando éstos se ven expuestos a caer en manos de enemigos, sin motivo ni causa alguna que impida su salvación».

Este era el caso de las dichas acciones del Banco de San Carlos, reclamadas reiteradamente por el Ministerio de Hacienda y la Junta Directiva del Crédito Público a los Ministerios de Gobernación de la Península y Ultramar, y que hasta aquella fecha no habían sido recogidas. El Comisionado de Incorporación añadía: «el que nunca pueda formarse en cargo al Crédito Público si llegaran a perderse; el interés de ponerlas en seguridad por ser ya fondos aplicados al establecimiento, y la premura que es necesario atender a esta operación», obligaban a pedir la reiteración de las antedichas peticiones.

El Ministerio de la Gobernación de Ultramar respondió,⁷⁵ que en tanto no estuvieran evacuados los informes pedidos, para someter nuevamente el asunto a las Cortes, no podía accederse a entregar dichas acciones de las Parcialidades de Indios al Comisionado de Incorporación.

Inmediatamente, la Comisión de Visita del Crédito Público de las Cortes, instada por la Junta Directiva del mismo⁷⁶ reiteraba a la Gobernación de Ultramar la entrega de las acciones ya solicitadas. Y nuevamente la contestación de la Secretaría de la Gobernación de Ultramar era

74 Exposición del Comisionado Especial de Incorporación dirigida a Don Juan de Pardo, en Madrid a 5-III-1823. (A. G. I., Indiferente 1851).

75 Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Secretaría de Despacho para la Gobernación de Ultramar a los Señores de la Junta Directiva del Crédito Público, en Palacio a 6-III-1823. (A. G. I., Indiferente 1851).

76 Cortes, Comisión de Visita del Crédito Público. Pedro Surra y Rull, José Canga Argüelles, Lorenzo Villanueva, al Secretario de Despacho de la Gobernación de Ultramar, en Madrid a 7-III-1823. (A. G. I., Indiferente 1851).

que seguía preparándose el expediente para nueva consideración por las Cortes.⁷⁷

**Los representantes Omulryan y Beratarrechea.
Final de la Real Compañía de Filipinas. Creación
del Banco Español de San Fernando**

Al año siguiente de 1824,⁷⁸ era designado Don Ignacio de Omulryan representante en las Juntas del Banco Nacional de San Carlos de las 1.343 acciones de las Parcialidades de Indios de Nueva España. El valor de las acciones era de 1.343.000 reales, correspondiendo por lo tanto a 1.000 reales por cada acción.

Pocos días después se celebraba Junta General del Banco.⁷⁹ Al dar cuenta de ellas Omulryan al Ministro de Gracia y Justicia de Indias, le comunicaba que la Junta de Gobierno del Banco, en su exposición, había manifestado «que el Rey Nuestro Señor había salvado al Banco restableciendo sus derechos». Y además había expuesto, entre otros extremos, que el Rey había concedido al Banco la inscripción de cien millones del capital, o sea, cinco en Renta Perpetua del Gran Libro que era lo que el Banco había pedido.

Al año siguiente era designado Don Juan José Beratarrechea representante de las acciones de las Parcialidades en el Banco.⁸⁰ Al mismo tiempo, se le designaba represen-

77. Gobernación de Ultramar. Sección de Gobierno. Negociado Económico. Secretario del Despacho de Ultramar a los Señores de la Comisión de Visita del Crédito Público de las Cortes, en Palacio a 9-III-1823. (A. G. I., Indiferente 1851).

78. Real Orden de 15-IV-1824, en Toledo, dirigida a Ignacio Omulrryan. (A. G. I., Indiferente 1851).

79. Ignacio Omulrryan al Ministro de Gracia y Justicia de Indias, en Madrid a 28-IV-1824. (A. G. I., Indiferente 1851).

80. Real Orden, en Palacio a 15-XI-1825, designando a Don Juan José Beratarrechea, representante de las 1.343 acciones de las Parcialidades de Indios de Nueva España, para la Junta General del Banco de San Carlos de 24-XI-1825. (A. G. I., Indiferente 1851). Ignacio Omulrryan al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, en Madrid a 10-XI-1825. (A. G. I., Indiferente 1851).

tante de las 513 acciones de 250 pesos, pertenecientes a la Real Compañía de Filipinas, que eran también propiedad de dichas Parcialidades, y de cuyo estado y expectativa había de informar al Rey.

Vistas las atribuciones y encargos hechos a Beratarrechea, éste se dirigió a los Directores de la Compañía de Filipinas,⁸¹ formulándoles las siguientes preguntas:

- 1.º Si tenían en custodia en dicha Dirección las 513 acciones de los indios.
- 2.º Dividendo y socorro de dichas acciones desde su imposición.
- 3.º Fecha y personas a quienes habían sido entregados los intereses repartidos.
- 4.º Suerte futura del presente estado y dirección de la Compañía y resultados que se consideraban al capital de dichas acciones.

Pocos días después contestaban los Directores a Beratarrechea⁸² en el mismo orden en que éste se les había dirigido.

A la 1.ª pregunta respondieron diciendo que las 513 acciones se hallaban en el Arca de tres llaves de la Compañía, lo que se había acreditado oportunamente con certificaciones.

A las 2.ª y 3.ª la respuesta era la siguiente:

- a) En 1793, 1795, 1796 y 1797 se repartieron 4 dividendos de 5 % cada uno, pagados a Joaquín de Cifuentes, vecino de Madrid, por poder sustituido en Gijón por el Apoderado General de las Parcialidades, Don Gaspar

⁸¹ Juan José Beratarrechea a los Directores de la Real Compañía de Filipinas, en Madrid a 14-XII-1825. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁸² Julián de Fuentes y Cesáreo María Sáenz, Directores de la Real Compañía de Filipinas a Juan José de Beratarrechea, en Madrid a 19-XII-1825. (A. G. I., Indiferente 1851).

de Jovellanos. El importe de dichos dividendos ascendió a 274.550 reales de vellón, 1 maravedí.

- b) En 1804 se repartió un dividendo de 7 %, pagado a Don Cenón Alonso, Oficial Mayor 2.º de la Secretaría de Indias. El importe de este dividendo fue de 134.662 reales de vellón, 17 maravedíes.
- c) En 1815 se repartió un socorro de 3 %, pagado a Don Basilio Antelo Llorente, Oficial Mayor de la Secretaría de Estado. El importe de dicho socorro fue de 57.712 reales de vellón, 17 maravedíes.
- d) En 1818 se repartió un socorro de 2 %, pagado a Antelo Llorente. El importe de este socorro fue de 38.475 reales de vellón. El total de lo repartido hasta aquel momento ascendía a 505.400 reales de vellón, 1 maravedí, correspondientes al 32 %.

A la 4.ª pregunta contestaron que, consultada la Junta de Gobierno de la Compañía, ésta les autorizó a decir «sería muy aventurado cualquier pronóstico sobre la suerte futura del establecimiento, cuando destruido éste por la revolución, no tiene otra esperanza halagüeña que la piedad y munificencia soberana del Rey Nuestro Señor, si cabe más suerte que la que S. M. se digne señalar, en vista de la Nueva Memoria que la Junta está preparando, con la solicitud de los medios más oportunos y capaces de reanimar la Compañía; porque respecto a su estado actual, reconociendo ser desde luego el más triste y decadente, o el de una parálisis casi completa, no puede fijarse con posterioridad a la última sesión de la Junta General, celebrada en 27 de febrero de 1822, hasta que se disponga y estén concluidos los trabajos para otra nueva Junta General».

Más adelante, Beratarrechea completaba su información al Monarca.⁸³ Le decía que sólo había encontrado un

83 Juan José de Beratarrechea al Rey, en Madrid a 24-VI-1826, (A. G. I., Indiferente 1851).

borrador de las acciones de los indios en el Banco, y una indicación de las de la Compañía en el Arca de tres llaves. No existía antecedente ni noticia del destino dado a los fondos repartidos por estas entidades, ni los sujetos que los recibieron; y en aquel momento no se podía averiguar por estar incomunicados con Nueva España, lo que impedía saber si habían sido recibidos en todo o en parte. Suponía, no obstante, Beratarrechea, que los 270.550 reales de vellón, 1 maravedí, cobrados por Cifuentes, habían sido remitidos a los indios, porque había hecho las remesas hasta 1799 con toda puntualidad y celo. Los dividendos cobrados por Alonso Cenón y Basilio Antelo, cuya cuantía ascendía a 230.850 reales de vellón no debían haber sido situados, pues las remesas habían cesado en 1803.

Además exponía Beratarrechea, que expirado el 25 de junio de 1825 el plazo de 25 años de la Real Cédula de establecimiento de la Compañía de Filipinas, se había debido convocar nueva Junta de accionistas. En lugar de ello se pedía una ampliación del término caducado, «lo cual parece vicioso e ilegal, pues es apropiarse de atribuciones que competen a los accionistas, y hacerse intérpretes de los deseos e intenciones que manifestarían éstos en la Junta General». No cabe duda que Beratarrechea era un fiel y leal intérprete, y exponente de los derechos de sus representados. El Rey le encargaba⁸⁴ redoblar el celo para que los indios cobrasen lo que les pertenecía. Ello, no obstante la fecha en que estaban, y la resolución definitiva que por aquel entonces había alcanzado la guerra emancipadora americana. Y añadía el Rey, que se esperara en lo principal el resultado de los trabajos de una Junta creada por el Ministerio de Hacienda.

Años más tarde, Beratarrechea, a quien se había encargado nuevamente informase sobre la situación de la

84: El Rey a Juan José de Beratarrechea, en Madrid a 24-IV-1826. (A. G. I., Indiferente 1851).

Compañía, decía: ⁸⁵ «el establecimiento se halla en tal confusión e ilegalidad que hace temer pierdan acaso las Parcialidades de los Indios hasta el capital que bajo vuestra Real Protección y Amparo impusieron en esta Compañía». Para él la Compañía estaba en aquel momento:

- 1.º Cumplido el término señalado en 1825 en la Real Cédula de erección, y no habiendo convocado a los accionistas para dar cuenta de la administración.
- 2.º Con la queja de los accionistas, que siendo dueños del establecimiento con sus fondos, experimentaban, cumplido el término, tan arbitraria e ilegal situación que prescindía de ellos.
- 3.º Produciendo críticas de nacionales y extranjeros, por la posición tan ilegal y arbitraria que representaba, escudada con la sombra real, y las murmuraciones contra el gobierno, con el consiguiente descrédito y desconfianza.

Beratarrechea creía inaplazable la convocatoria de la Junta General de accionistas, como lo hacía el Banco de San Carlos. A fines del mismo año de 1829 se citó a Beratarrechea a Junta. En ésta se manifestó la cesación de la Compañía, y el nombramiento de accionistas liquidadores.

Beratarrechea seguía gozando de la confianza real para representar a los indígenas. Desde 1826 hasta 1828, ⁸⁶ hay pruebas de que tuvo a su cargo la representación, y la consiguiente autorización para percibir los dividendos producidos desde 1821.

A mediados de 1829, y al ser creado el Banco Español de San Fernando, se pidió al Secretario de Estado y del

⁸⁵ Juan José de Beratarrechea al Rey, en Madrid a 23-I-1829. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁸⁶ Francisco Tadeo de Calomarde, Secretario de Gracia y Justicia a Don Juan José de Beratarrechea, en Aranjuez a 3-IV-1826. (A. G. I., Indiferente 1851).

Despacho de Gracia y Justicia ⁸⁷ la carpeta de los duplicados de las 1.343 acciones de las Parcialidades de Indios que estaban a cargo de dicho Ministerio, para que fueran inscritas en el nuevo Banco.

La respuesta, ⁸⁸ hacía referencia a que dichas acciones estaban depositadas en el propio Banco de San Carlos, y sus principales y duplicados se habían remitido al Virrey de Nueva España y Cajas de Comunidad de Indios. Beratarrechea, ⁸⁹ tras ratificar lo anteriormente dicho por el Ministro de Gracia y Justicia, daba la relación de dichas acciones con sus correspondientes números, para que pudiera procederse a la inscripción correspondiente.

En 4 de mayo de 1833 se entregaron a Beratarrechea ⁹⁰ los títulos o extracto de las acciones de las Parcialidades, reducidas a la 5.ª parte, que quedaban en 268 acciones 3/5. Los restantes pasaron a otro papel titulado residuos. También le entregaron a Beratarrechea el 18 % sobre esta reducción, por intereses de tres años, y cuyo importe era de 96.696 reales de vellón. El libramiento lo hizo la casa Miquelarena para que lo cobrase, avisándole el propio día 7 lo tenía a su disposición.

Dificultades para la conversión de las acciones del Banco de San Carlos en el de San Fernando

En 10 de septiembre de 1830 ⁹¹ el Ministerio de Hacienda comunicaba al de Gracia y Justicia de España, haber

87 José de Fagoaga, Director del Banco Nacional de San Carlos al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 7-V-1830. (A. G. I., Indiferente 1851).

Galvariato, Juan Antonio: *El Banco de España. Su Historia en la centuria, 1829-1929*, Madrid, 1932, págs. 41-42. R. C. de 9-VII-1829.

88 El Secretario de Estado del Despacho de Gracia y Justicia a José de Fagoaga, en Madrid a 24-VII-1830. (A. G. I., Indiferente 1851).

89 Juan José de Beratarrechea a los Directores del extinto Banco de San Carlos, en Madrid a 29-VII-1830. (A. G. I., Indiferente 1851).

90 Nota: adjunta a la anterior en 4-V-1833.

91 Consulta del Consejo de Indias dirigida al Ministro de Gracia y Justicia de Indias, en Madrid a 20-XII-1830. (A. G. I., Indiferente 1851).

dado cuenta al Rey de una exposición, por la que la Comisión de Liquidación del extinguido Banco Nacional de San Carlos, al tratar de inscribir sus antiguas acciones en los Registros del Banco de San Fernando, encontró que las correspondientes a Propios, Pósitos y Parcialidades de Indios, no podían inscribirse a nombre de los pueblos, porque la mayoría no llegaban al número de 5, requerido para hacer una inscripción. Propuso por ello el Ministerio de Hacienda que las referidas inscripciones se hicieran a nombre de las Direcciones Generales de los referidos Ramos de Propios y de Pósitos, y de la Administración de las Parcialidades de Indios que representaba las acciones, concurría a las Juntas, cobraban los dividendos y practicaba las demás gestiones a nombre de dichos pueblos.

El Rey consideró que dicho asunto debía ser consultado al Consejo de Indias, que no encontró más antecedentes sobre la materia que la Real Orden de 1 de julio de 1782, por la cual se circuló a los dominios de Indias la erección del Banco de San Carlos. Tampoco halló el Consejo antecedentes en la Contaduría General. Pidió por ello informe al Fiscal, cuya respuesta también fue tenida en cuenta. El Consejo de Indias para dar su dictamen con conocimiento de causa, acordó pasar oficio al Ministerio de Gracia y Justicia de Indias. En él estimaba la agregación de los oficios en los que los Regentes de las Audiencias de Indias, como Subdelegados de Propios y Arbitrios, y de los Fondos de Comunidades de Indios, era regular dieran cuenta al Gobierno para su aprobación de haber dispuesto de los sobrantes de ellos, imponiéndolos en acciones del Banco de San Carlos, que entonces se trataban de inscribir en el de San Fernando; como también los oficios en los que constaba si en otro tiempo asistieron, como parecía, a las Juntas Generales del Banco, en nombre de las Parcialidades de Indios, sobre los cuales se pedía únicamente la consulta a algunos individuos del Consejo.

Propuso pues, el Consejo, la remisión de dichos antecedentes, contestando el Ministerio de Gracia y Justicia de Indias que el Rey había resuelto que el Consejo sólo debía contestar sobre el contenido del oficio del Ministerio de Hacienda.

Nuevamente consultó el Consejo de Indias al Fiscal que, en su respuesta, entendía la conveniencia de adoptar el medio propuesto por la comisión de liquidación con respecto a las acciones de las Parcialidades.

El Rey⁹² se conformó con el parecer del Consejo de Indias y lo ejecutado por el Comisionado Real de las Parcialidades del Banco de San Carlos acerca de la inscripción en el de San Fernando, conforme lo propuesto por la Comisión de Liquidación del primero. El Rey mandó decir cómo lo ejecutó, y estar ya arreglado lo correspondiente a dichas parcialidades con los mismos comisionados del Banco.

En 12 de agosto de 1831, Don Rafael Morant, Consejero General de Indias,⁹³ se dirigió al Secretario de Estado de Gracia y Justicia de Indias, contestando al Comisionado de las Parcialidades de Indios de Nueva España sobre la clase en que debían quedar convertidos los 167 vales de 50 reales de 1 de abril de 1830, existentes en su poder, de acuerdo con el Real Decreto de 28 de marzo de 1831, citado por la Caja de Amortización. Y no encontrando ninguna regla fija sobre que apoyar las preferencias, dijo: «procure valerse de sujetos inteligentes en el comercio y guía de negociaciones, hasta de empleados en la Caja de Amortización, y no habiendo encontrado ninguno que satisficiera mis deseos, por depender el buen o mal éxito de circunstancias que no pueden preverse, me parece lo más prudente adoptar un término medio, dividiendo en ambas clases de

92 Secretario de Gracia y Justicia de Indias al de Gracia y Justicia de España, en Madrid a 8-I-1831. (A. G. I., Indiferente 1851).

93 Rafael Morant, Consejero General de Indias al Secretario de Estado de Gracia y Justicia de Indias, en Madrid a 12-VIII-1831. (A. G. I., Indiferente 1851).

inscripciones de la deuda transferible, y en documentos al portador los referidos 167 vales; participando de este modo de las ventajas o desventajas que pueden ofrecer en lo sucesivo».

En 1833 y 1834 seguía asistiendo a las Juntas del Banco Juan José de Beratarrechea,⁹⁴ como comisionado de las Parcialidades de Indios de Nueva España. Era entonces Beratarrechea comisionado del Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Protector de las dichas parcialidades.

La Reina Gobernadora dispone al fin de las acciones de los indios de Nueva España

En 1834, la Reina Gobernadora,⁹⁵ enterada de que las Parcialidades de Indios de Nueva España tenían 268 acciones del Banco Español de San Fernando, resolvió, «en consideración a las graves urgencias en que se halla el Real Erario, y atendiendo a que todos los gastos de ese Ministerio se hallan incluidos en los presupuestos», se pusieran a disposición del Director del Real Tesoro. En vista de ello, y en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Ministros,⁹⁶ se ordenó la entrega al Real Tesoro de 536 reales

⁹⁴ Manuel González Allende, Secretario del Banco Español de San Fernando al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 15-I-1833. (A. G. I., Indiferente 1851).

Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia responde a la anterior, en Madrid a 22-I-1833. (A. G. I., Indiferente 1851).

Manuel González Allende al Secretario de Estado de Gracia y Justicia de Indias, en Madrid a 7-II-1834. (A. G. I., Indiferente 1851).

Al adjuntar Cédula de entrada para la Junta General de Accionistas del Banco de San Fernando que se ha de celebrar en 1-III-1834, dice que ésta se celebrará en la "casa propia calle de la Montera". Secretario de Gracia y Justicia a González Allende, en Madrid a 13-II-1834. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁹⁵ Conde de Toreno, Ministro de Hacienda al Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 7-XI-1834. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁹⁶ Juan Peñuelas de Zamora, Secretario del Consejo de Ministros al Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 13-XI-1834. (A. G. I., Indiferente 1851).

en 268 acciones del Banco Español de San Fernando. Las razones para esta determinación eran:

- 1.º Las urgentes necesidades del Real Erario.
- 2.º No tener las acciones aplicación alguna.
- 3.º El Real Tesoro había pagado los gastos de viaje de los últimos misioneros a Filipinas.
- 4.º El Real Tesoro satisfacía los gastos del presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia de Indias.

Posteriormente el Director General del Real Tesoro ⁹⁷ manifestaba no podía expedirse carta de pago de dichas acciones porque no se acompañaba a las mismas, y además porque no podría hacerse hasta que el Banco de San Fernando, en el que debían estar inscritas, las transfiriera al Real Tesoro, según las formalidades reglamentarias de aquél, al que debe ser comunicada la Real Orden.

Poco después Don Andrés Caballero, Director del Banco de San Fernando, ⁹⁸ manifestaba haber puesto en conocimiento de la Junta de Gobierno del Banco la Real Orden de 2 de noviembre de 1834. La Junta, para no «causar perjuicio al curso de los documentos de crédito del establecimiento, acordó hacer presente al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia:

- 1.º Si la transferencia se había de hacer con la nota expresa de «inalienable» que llevan los títulos de dichas acciones, o si se les ponía el sello de «libre disposición». En dicho caso es «indispensable una declaración terminante de S. M. para seguridad del Banco y del Público».
- 2.º Era necesario que la orden de transferencia se hiciera

⁹⁷ Director General del Real Tesoro al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 22-XI-1834. (A. G. I., Indiferente 1851).

⁹⁸ Andrés Caballero, Director General del Banco de San Fernando al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 12-XII-1834 (A. G. I., Indiferente 1851).

por persona suficientemente autorizada por el Ministro, para que firmara el traspaso en el Registro del Banco.

- 3.º Se determinará el número de extractos de Inscripción que hubieran de hacerse, así como la división del Título de las 268 acciones.

La Reina respondió ordenando se hiciera la transferencia⁹⁹ «sin hacer novedad en los títulos respecto a la cualidad de inalienables que en la actualidad tienen»; y comisionando a Don Juan José Gil de las Revillas, Jefe de la Sección de la Secretaría de Gracia y Justicia para que suscribiera la transferencia.

Gil de las Revillas,¹⁰⁰ en cumplimiento de la Real Orden anterior, remitía el expediente de las Parcialidades de Indios de Nueva España, que por Real Orden de 21 de noviembre de 1834 pasó a su cuidado, y hacía presente que por las dos cartas de pago del Director del Real Tesoro que obraban en el expediente, se evidenciaba que por las órdenes que ha recibido, «ha entregado al Director del Real Tesoro las acciones del Banco Español de San Fernando, y todos los efectos de la Deuda del Estado y dinero metálico que resulta del expediente de haber entrado en mi poder, pertenecientes a las referidas parcialidades; de cuyo recibo ruego a V. E. tenga a bien darme aviso para mi resguardo». Pocos días después se acusaba recibo a lo propuesto por Gil de las Revillas.¹⁰¹ Las liquidaciones de todos los efectivos de la cobranza de acciones e intereses de las Parcialidades de Indios,¹⁰² tanto en el Banco, como en la Compañía de Filipinas desde 1784. Las acciones importaban 537.200 reales, y eran inalienables. Las recaudaciones du-

⁹⁹ Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia al Director del Banco Español de San Fernando, en el Pardo a 13-XII-1834. (A. G. I., Indiferente 1851).

¹⁰⁰ Juan José Gil al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 20-VI-1836. (A. G. I., Indiferente 1851).

¹⁰¹ Se acusa recibo a la anterior en 24-VI-1836. (A. G. I., Indiferente 1851).

¹⁰² Juan José de Beratarrechea al Ministro de Despacho de Gracia y Justicia, en Madrid a 24-I-1835.

rante diez años ascendían a 139.247 reales en papel y 234.740 reales y 24 maravedíes en metálico. La última cobranza, derivada de las anteriores, y entregada, daba un resultado líquido de 180.000 reales oro, 4.999 reales, 16 maravedíes; y en papel 139.247 reales.

Cargaba Beratarrechea por partida de refacción, trabajo y costo de un escribiente, e indemnización del 3 % de lo recaudado, que desde el comienzo de la gestión del representantes en tiempos de Jovellanos tenía asignado el 2 %. Pedía un 6 % por haber aumentado el trabajo que como Comisionado tenía. Le fue aprobada toda la distribución¹⁰³ y recaudación de intereses, pero el premio siguió siendo del 2 %.

La carta de pago de los intereses, entregada por el Director General del Tesoro a Gil de las Revillas,¹⁰⁴ ascendía en su cuantía a 330.155 reales y 16 maravedíes, de los cuales 190.908 reales y 14 maravedíes eran en metálico, y 139.247 reales, 2 maravedíes estaban en documentos con interés de la deuda del Estado. En dicha carta de pago, se especificaba que la porción en metálico «se ha mandado se ingrese en el Tesoro para ayudar a cubrir sus muchas y urgentes obligaciones».

JOSÉ ANTONIO CALDERÓN QUIJANO

¹⁰³ R. O. del Ministerio de Gracia y Justicia a Beratarrechea, en Madrid a 28-IV-1835. (A. G. I., Indiferente 1851).

¹⁰⁴ José Segundo Ruíz, Director General del Real Tesoro a Don Juan José Gil de las Revillas, Secretario del Consejo de Ordenes, en Madrid a 12-XI-1835. (A. G. I., Indiferente 1851).